Gaceta del Senado

Tercer Año de Ejercicio

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE:
SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

VICEPRESIDENCIAS:
SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ
SEN. CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN
SEN. DAVID MONREAL ÁVILA
SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS

SECRETARÍAS:
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
SEN. MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO
SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ
SEN. MARTHA PALAFOX GUTÍERREZ

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

PRESIDENTA:
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

SEN. EMILIO GAMBOA PATRÓN, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

SEN. HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



No. 117
TOMO III

Martes 17 de abril de 2018

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ
Secretario General de Servicios Administrativos

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios



CONTENIDO

Dictámenes a Discusión y Votación

1. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 734

2. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 19 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 746

3. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 758

17. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 763

4. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 766

5. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 769

6. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3º de la Ley General de Población. 781

7. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 785

8. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 790

9. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 802

10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General



para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 820

11. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 847

12. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley General de Turismo. 873

13. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 882

14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 899

15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72, 104, 105 y 149 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 919

16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 936

17. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 52, 164 y 173 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 948

18. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud. 969

19. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud. 972

20. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º fracción III; 168, fracciones II y V; 171 y 465, segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud. 977

21. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud. 983

22. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud. 989

23. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del párrafo primero del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud 992

24. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud. 998



25. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 58 y se adiciona un artículo 160 Bis de la Ley General de Salud..... 1002

26. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud. 1011

27. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 1014

28. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter del Código Civil Federal y se reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 1029

29. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 13; se adiciona el capítulo vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 1058

30. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. 1079

31. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria. 1087

32. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Dictamen en sentido negativo) 1102

33. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad este grupo de personas. 1145

CONTINÚA TOMO IV



Dictámenes a Discusión y Votación

1. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

05 ABR 2018 Diario de Primera Lectura

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

Página 1 | 8



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de marzo del 2017, de la Senadora **Yolanda de la Torre Valdez**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene la finalidad de reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor vigente, con el propósito de que se modifique una serie de términos inadecuados y discriminatorios para las personas con discapacidad, dichos están desactualizados conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación correspondiente, por lo que se actualiza para su comprensión clara y armónica.

CONSIDERACIONES

El término discapacidad de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, (OMS) la discapacidad es una palabra general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Por consiguiente, la población mundial cuenta actualmente con más de siete mil millones de personas. Lo que significa el 15% viven con algún tipo de discapacidad, la mayor parte en los países en vías de desarrollo.

Además, las personas con discapacidad, son la minoría dentro de la sociedad de cada país, suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación entre otros aspectos. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados.

Actualmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su marginación. La Convención subraya que la discapacidad es un concepto creciente, la ignorancia de este, es en gran parte responsable de la estigmatización y la discriminación que padecen las personas discapacitadas.

La Organización de las Naciones Unidas, (ONU) señala que la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades. Son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos. La Convención expresa en el artículo 9 pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. De igual forma solicita a los estados que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número de personas con discapacidad en el país equivale al 6 % de la población, lo que representa alrededor de 7.2 millones.



Sin embargo, es conveniente atender la recomendación que el Comité de Expertos sobre Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha propuesto al Estado mexicano sobre la necesidad urgente de contribuir en su desarrollo e inclusión social en todos los ámbitos de la vida y al ejercicio pleno de sus derechos.

Lo anterior se hace necesario puesto que, al no contar con una adecuada comprensión del concepto de discapacidad, resulta difícil tener certeza sobre el número exacto de personas con tal condición, así como de las barreras que enfrentan, lo que impide la eficaz formulación e implementación de políticas públicas incluyentes.

El Gobierno de la Ciudad de México, tiene un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades para las más de 500 mil personas con discapacidad que habitan en la ciudad.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal y al compromiso establecido en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, acerca de definir y establecer las políticas públicas para la plena inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, que garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales, se presenta por primera ocasión en la Ciudad de México el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal (PID-PCD 2014-2018).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH)y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación, (CONAPRED) busca lograr la efectiva aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de tres ejes principales: la promoción, la protección y la supervisión de los derechos de las personas con discapacidad para lo cual lleva a cabo actividades de toma de conciencia dirigidas a personas servidoras públicas, organizaciones sociales, personas con discapacidad y sus familias.



Tales acciones motivan a l estado mexicano a fortalecer, junto con los organismos públicos estatales de derechos humanos, el mecanismo nacional de referencia, para que promueva, proteja y supervise eficazmente el reconocimiento, respeto y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideran satisfactoriamente la aprobación de la presente iniciativa, por lo que resulta importante que se tome en cuenta la inclusión para mejorar la calidad vida y minimizar la discriminación de la población con discapacidad.

RESUELVEN

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Único. Se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 58.- El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, **discapacidad,** nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad.

Los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o **de las personas con discapacidad**, o se funden en disposiciones expresas de otros ordenamientos legales. Dichos proveedores en ningún caso podrán



aplicar o cobrar tarifas superiores a las autorizadas o registradas para la clientela en general, ni ofrecer o aplicar descuentos en forma parcial o discriminatoria. Tampoco podrán aplicar o cobrar cuotas extraordinarias o compensatorias a las personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su uso personal, incluyéndose **los animales de asistencia, tales como perros guía** en el caso de **personas ciegas o débiles visuales.**

Los proveedores están obligados **a adoptar las medidas de accesibilidad de conformidad con lo estipulado en el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen.** Dichas **medidas** no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan a **la persona con discapacidad** como consumidor.

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2017.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN
POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza
PRESIDENTA

Senadora Héctor Larios Córdova
SECRETARIO

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
SECRETARIA

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

Senadora Margarita Flores Sánchez
INTEGRANTE

Senador Daniel Amador Gaxiola
INTEGRANTE

Senadora María Elena Barrera Tapia
INTEGRANTE

Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA PRESIDENTE			
 SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO SECRETARIO			
 SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS SECRETARIO			
 SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO INTEGRANTE			



Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

6ª REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
Lista de Asistencia

31 de octubre de 2017

PRESIDENTA



Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza

SECRETARIOS



Sen. Héctor Larios Córdova



Sen. Lorena Cuéllar Cisneros

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Oficia 01
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508
E-mail: grupos.vulnerables@senado.gob.mx



Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

INTEGRANTES



Sen. Hilda Esthela Flores Escalera



Sen. Margarita Flores Sánchez



Sen. Daniel Amador Gaxiola



Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo



Sen. María Elena Barrera Tapia

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Oficia 01
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508
E-mail: grupos.vulnerables@senado.gob.mx



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA

14 DE MARZO DE 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

	**SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA** **PRESIDENTE**	
	**SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO** **SECRETARIO**	
	**SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS** **SECRETARIO**	
	**SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO** **INTEGRANTE**	



2. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII del artículo 19 a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

05 ABR 2018 RECIBO DE PRIMERA LECTURA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

IV. En el capítulo de "RESOLUTIVO", es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República.

Página 1 | 8



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ANTECEDENTES

1. En la Sesión del Senado de la República del 26 de noviembre de 2015, la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5, la fracción XV del artículo 10, las fracciones I y IV del artículo 19 y se adiciona la fracción VIII al mismo artículo 19, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO

Esta iniciativa tiene por objeto garantizar mejores condiciones laborales para las personas adultas mayores, condiciones laborales decenetes y de calidad para este sector. Se destaca el promover y estimular el mejoramiento de las fuentes de empleo en línea con los estandares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo la OIT, esto mediante estimulos fiscales.

La Iniciativa menciona que las políticas en nuestro país deben facilitar que el campo laboral transite cada día más a la formalidad, fomentando la inversión, el crecimiento y la generación de empleos suficientes y de calidad.

Y que uno de los sectores que más se ven afectados en esta temática, es el conformado por las personas adultas, ya que se encuentran en una situación en la que su edad es determinante para que las empresas les nieguen injustificadamente los puestos de trabajo o los acepten sin cualquier tipo de prestación adicional, con plazas temporales, sin contrato, en áreas de poca jerarquía y con un pago inferior, sin que este sea suficiente para solventar sus gastos más elementales, además, hay que considerar que muchos de ellos cuentan con alguna enfermedad que genera costos médicos adicionales que muchas veces deben cubrir



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

solos y en otras circunstancias, carecen de pensiones o seguridad social. Esta serie de factores solo da lugar a que sus derechos se violenten de forma reiterada y que no puedan gozar de una vejez digna.

Es por estas razones que el Estado mexicano debe priorizar acciones que resuelvan la problemática y velar porque los derechos humanos de las personas en edad adulta sean respetados, aún en el complejo escenario actual, estas merecen gozar de todos sus derechos si deciden prolongar su vida laboral.

CONSIDERACIONES

1. En tenor de lo antes mencionado en la presente iniciativa, como Comisión de Atención a Grupos Vulnerables nos parece que como lo menciona la Iniciativa antes expuesta, el sector poblacional referente a las personas de edad avanzada, son un grupo vulnerable debido a ciertas características propias y también debido a una reticencia social, la cual no ha podido integrar por completo a las personas adultas mayores.

En el sector internacional, las personas adultas mayores han tenido un bajo interés por diversas organizaciones mundiales y se han prolongado por mucho tiempo los esfuerzos para tratar las problemáticas presentes en este grupo poblacional presente en cualquier parte del mundo y que dicho sea de paso, tiene un crecimiento poblacional a la alza, sobretodo en paises en vias de desarrollo.

La ONU por una parte ha creado un grupo de trabajo en relación a los derechos de las personas adultas mayores, con miras a convertirse en una Convención Internacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores como ya sucedió con otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, mujeres y niños y niñas y aunque aún no ha podido concretar esta Convención, en el Grupo de Trabajo se han comenzado pláticas para que este grupo pueda tener a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, y además de la creación de un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado donde sea.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

2. Por otro lado, si bien la ONU no ha podido concretar la Convención acerca de los derechos de este sector poblacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) si ha podido concernir una Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en donde menciona que tiene por objeto el:

"... promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad."

Y menciona en su artículo 18 las medidas que adoptarán los Estados Parte en relación al empleo:

Artículo 18
Derecho al trabajo

" La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma Apropiada a las condiciones locales.

El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado. "

Como es posible comprender, las personas adultas mayores deben de contar con toda la protección por parte del Estado para que puedan desenvolverse, participar, relacionarse, protegerse y desarrollarse dentro de cualquier sociedad, esto por medio de la proteccion de sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Y como bien se menciona en la iniciativa, estos derehos deben de protegerse por medio de la legislación vigente la cual debe de actualizarse y evolucionar de acuerdo a la coyuntura nacional e internacional.

3. Sin embargo, la introducción de los términos decente y calidad en varios artículos de la propuesta, debe de ser más específico si es que se quiere dar una mayor certidumbre a la ley vigente sobre los adultos mayores , ya que estos términos pueden ser interpretados de muchas maneras, de acuerdo a cada situación específica.

Como lo menciona Ishikawa, uno de los principales autores acerca de la calidad junto con Deming y Jurán, *" La calidad es equivalente a la satisfacción del cliente"* con esta definicion se puede deducir que algo (el empleo) es de calidad cuando logre satisfacer las necesidades, expectativas y requerimientos del consumidor (trabajador) y será este el que establezaca los parámetros a alcanzar, es decir, lo que para un trabajador adulto mayor pueda ser de calidad debido a sus expectativas y deseos para otro puede ser todo lo contrario precisamente por las mismas razones.

Por lo que este tipo de definiciones, pueden estar mejor determinadas por medio de otros términos, condiciones o especificaciones sobretodo dentro de la ley.

4. Es por ello, que analizando la Iniciativa propuesta, nos parece que como lo menciona la misma, es fundamental continuar el mejoramiento de los derechos de las personas adultas mayores, en el rubro del empleo se debe de continuar el trabajo para que este sector pueda accesar a más y mejores oportunidades de empleo, con una visión igualitaria e incluyente.

En virtud de lo planteado anteriormente, se considera pertinente la aprobación del Proyecto de Decreto de la citada Iniciativa, con las siguientes modificaciones:

RESUELVEN

ÚNICO. – Es de **aprobarse con modificaciones** la reforma que adiciona la fracción VIII al artículo 19, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción VIII a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 19.- ...

I. a **VI .** ...

VII. La creación y difusión de programas de orientación dirigidos a personas adultas mayores cuando deseen retirarse de los centros de trabajo públicos y privados, y

VIII. La promoción y el estímulo para el mejoramiento de fuentes de empleo para adultos mayores.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2017.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN
POR LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza
PRESIDENTA

Senadora Héctor Larios Córdova
SECRETARIO

Senadora Lorena Cuéllar Cisneros
SECRETARIA

Senadora Hilda Esthela Flores Escalera
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Senadora Margarita Flores Sánchez
INTEGRANTE

Senador Daniel Amador Gaxiola
INTEGRANTE

Senadora María Elena Barrera Tapia
INTEGRANTE

Senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo
INTEGRANTE

Página 8 | 8



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 19 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII AL MISMO, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA PRESIDENTE			
 SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO SECRETARIO			
 SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS SECRETARIO			
 SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO INTEGRANTE			



Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

6ª REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
Lista de Asistencia

31 de octubre de 2017

PRESIDENTA



Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza

SECRETARIOS



Sen. Héctor Larios Córdova



Sen. Lorena Cuéllar Cisneros

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Oficia 01
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508
E-mail: grupos.vulnerables@senado.gob.mx



Comisión de Atención a Grupos Vulnerables

INTEGRANTES



Sen. Hilda Esthela Flores Escalera



Sen. Margarita Flores Sánchez



Sen. Daniel Amador Gaxiola



Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo



Sen. María Elena Barrera Tapia

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Cuña del Nivel 1. Oficia 01
Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F.
Tel. Conmutador: 5345 3000, Lada sin costo 01 800 5010 810 Ext. 3508
E-mail: grupos vulnerables@senado.gob.mx



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

VIGÉSIMA REUNIÓN ORDINARIA

27 DE FEBRERO DE 2018

REGISTRO DE ASISTENCIA

	**SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA** **PRESIDENTE**	
	**SEN. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO** **SECRETARIO**	
	**SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS** **SECRETARIO**	
	**SEN. JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO** **INTEGRANTE**	



3. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA MINUTA",** se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

IV. En el capítulo de **"RESOLUTIVO"**, es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República.

I. ANTECEDENTES

1. En la Sesión del Senado de la República del 13 de julio de 2016, los Senadores Roberto Gil Zuarth e Hilda Flores Escalera, así como Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

3. En sesión del 27 de abril de 2017, la Cámara de Senadores aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, Primera, relativo al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, remitiéndose el expediente a la Cámara de Diputados de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del artículo



72 constitucional.

4. Con fecha del 2 de mayo de 2017, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó la Minuta de referencia a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen, con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

5. El 12 de diciembre de 2017, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

6. En la sesión del 14 de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones por 391 votos, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

7. Con fecha 15 de diciembre de 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República recibe la Minuta en comento y con fecha 7 de febrero de 2018, se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta aprobada en el Senado de la República iniciativa propone reformar el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para establecer que las instituciones de seguros y mutualistas que operen el ramo de gastos médicos dentro de sus pólizas ofrecerán como beneficio adicional la cobertura de riesgos derivados de gastos de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias y los servicios médicos adicionales que requieran contratar las aseguradoras con carácter indemnizatorio, de acuerdo a las sumas aseguradas contratadas y el procedimiento de riesgo correspondiente.

Por otra parte, no podrán rehusarse a recibir una solicitud por razón de raza, religión, orientación sexual o discapacidad del solicitante. Asimismo, asegurarán las medidas necesarias para auxiliar a la población con discapacidad en la atención, servicio y trato digno.

Asimismo, pretende reformar el artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para definir los términos: discapacidad, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual, y discapacidad sensorial.

Por último, propone reformar el artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece que el Sector Salud expedirá a través de las instituciones de salud públicas y privadas un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad, válido a nivel nacional. Señala la propuesta que los datos serán compartidos con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La Cámara de Diputados coincide con lo propuesto en la Minuta de la Cámara de Senadores en lo que se refiere a los artículos 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.



En el caso de la reforma propuesta al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Colegisladora, en su dictamen propone su desechamiento, plasmando en el considerando décimo segundo, la opinión de la Comisión de Asuntos para la Atención a Grupos Vulnerables; y en el considerando décimo tercero los argumentos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, mismos que textualmente señalan lo siguiente:

> ***"DÉCIMA SEGUNDA.*** *En adición a lo anterior, cabe hacer mención que el 7 de diciembre de 2017, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta H. Cámara de Diputados emitió su opinión respecto a la Minuta que se dictamina, mediante oficio CAGV/530/2017, destacando entre sus considerandos lo siguiente:"*
>
> *II. y III. ….*
>
> *IV. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables opina como no favorable e incluso contraproducente la propuesta de modificación y adición del artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, toda vez que denota una confusión sobre la responsabilidad de os registros de población, que son facultad del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la facultad para llevar a cabo censos y encuestas, que es del Instituto Nacional de estadística y Geografía.*
> *….*
> *….*
>
> *V. ….*
> *….*
> *….*
>
> *La modificación planteada no visualiza las funciones de RENAPO y el INEGI en el manejo de información estadística y el de los datos vinculados de los ciudadanos a través de la CURP: Es por esta razón que se propone eliminar loa modificación al artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.*
>
> *VI. En consecuencia a lo expuesto en las consideraciones precedentes, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le propone a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no aceptar la modificación y adición planteada para el artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.*
>
> ***DÉCIMA TERCERA.*** *Atendiendo las consideraciones expuestas por la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con los argumentos que plantean una situación contraproducente y controvertida en caso de aceptarse la propuesta de reformar el artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene la minuta en estudio.*
>
> *Dicha modificación modificaría obligaciones que no corresponden a la naturaleza de las entidades involucradas, perdiendo de vista el objetivo para el cual están diseñadas y establecidas las instituciones.*
>
> *En razón de lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado eliminar la modificación al artículo 10 de la Ley General para los Derechos de las Personas*



con Discapacidad, que propone la minuta de la Colegisladora.

III. CONSIDERACIONES

Estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que los razonamientos realizados por la Colegisladora son atendibles en sus términos, haciendo suyos sus argumentos, en el sentido de aprobarse las reformas al artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

En el caso del artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que la Colegisladora desecha, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, coinciden con su argumentación, misma que se encuentra en el capítulo de Considerandos de este dictamen.

IV. RESOLUTIVO

ÚNICO. – Por lo anteriormente expuesto y fundado, los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, que suscriben este dictamen, someten a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTICULO PRIMERO. - Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del Artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 27. ….

I a III. ….

IV. ….

Igualmente, las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas para operar este ramo, para el caso de riesgos que puedan afectar la persona del asegurado generándole una discapacidad ofrecerán como cobertura dentro de un producto o beneficio adicional, que ampare el pago de gastos derivados de la atención médica, programas de rehabilitación, terapias rehabilitadoras y los servicios médicos adicionales que requieran los asegurados que sean necesarios para la atención de dicha discapacidad, de acuerdo con las sumas aseguradas y coberturas contratadas, esto mediante el procedimiento de selección de riesgo correspondiente y diseño del producto o beneficio adicional que se ofrezca al mercado para la cobertura de riesgos futuros, que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.

ARTICULO SEGUNDO. - Se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII y XIII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 2, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I a VIII. …



IX. Discapacidad. Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

X. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XI. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;

XII. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, y

XIII. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

XIV. a XXXIII. ….

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El Ejecutivo Federal elaborará a través del o de los institutos que la misma designe para este fin, dentro de los 365 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, un estudio sobre la probabilidad de ocurrencia de riesgos que puedan afectar las personas del asegurado generándole una discapacidad, así como los costos asociados a su atención.

TERCERO. - El estudio mencionado en el artículo anterior será con cargo al presupuesto del Instituto o Dependencia que el Ejecutivo Federal designe para su realización.

CUARTO. - Las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas tendrán un plazo de 180 días naturales contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo Transitorio Segundo, para presentar a registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas la o las coberturas de que se trata;

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los seis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.



17. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio la **Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de las Personas Adultas Mayores; y se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación**

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "**ANTECEDENTES**" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "**CONTENIDO DE LA INICIATIVA**", se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES**", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de octubre del 2017, la presidencia de la cámara de senadores recibió de la colegisladora Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de las Personas Adultas Mayores; y se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa plantea establecer la equidad de oportunidades en el acceso al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos.

CONSIDERACIONES

1. Con la presente iniciativa tenemos por entender que si bien es cierto uno de los puntos principales es el tener un mejor alcance para las personas adultas mayores, como se es citado en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio de sus derechos y garantías.
   Pues esto se remarca en su Artículo primero que a la letra dice:

Articulo 1 El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.



Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional **o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.**
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

2. Es por tal motivo que también lo interpretamos de conformidad con el Artículo 1 Y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos hablan sobre el derecho de las persona. El trabajo y el ejercicio del mismo, que a su letra dicen:

Artículo 1o**. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece**.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos**. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad**. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La Ley determinará en cada Entidad Federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.



Resuelve

ÚNICO: Se aprueba con modificación la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

Único. - Se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

I. …
II. …

III. Condicionar, limitar, o restringir las oportunidades **de empleo,** permanencia **o** ascenso **laborales.**

IV. a XXXIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 6 de marzo de 2018



4. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio la **Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de las Personas Adultas Mayores; y se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación**

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "**ANTECEDENTES**" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "**CONTENIDO DE LA INICIATIVA**", se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES**", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 12 de octubre del 2017, la presidencia de la cámara de senadores recibió de la colegisladora Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 5 de la Ley de las Personas Adultas Mayores; y se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

2. Con misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa plantea establecer la equidad de oportunidades en el acceso al trabajo, jornadas laborales y salarios dignos.

CONSIDERACIONES

3. Con la presente iniciativa tenemos por entender que si bien es cierto uno de los puntos principales es el tener un mejor alcance para las personas adultas mayores, como se es citado en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el ejercicio de sus derechos y garantías.
   Pues esto se remarca en su Artículo primero que a la letra dice:



Articulo 1 El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional **o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.**
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

4. Es por tal motivo que también lo interpretamos de conformidad con el Artículo 1 Y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos hablan sobre el derecho de las persona. El trabajo y el ejercicio del mismo, que a su letra dicen:

Artículo 1o**. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece**.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos**. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad**. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.



La Ley determinará en cada Entidad Federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Resuelve

ÚNICO: Se aprueba con modificación la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN.

Único. - Se reforma la fracción III del Artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

III. …
IV. …

III. Condicionar, limitar, o restringir las oportunidades **de empleo,** permanencia **o** ascenso **laborales.**

IV. a XXXIV. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 6 de marzo de 2018



5. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por distintos Senadores de la República, por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO" se sintetizan las propuestas de reformas en estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras, que se realizará agrupándolas por grandes temas.

IV. En el capítulo de "RESOLUTIVO", es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República.

ANTECEDENTES

1. Estas Comisiones Unidas coincidieron en la pertinencia de analizar y determinar, en primera instancia, la totalidad de iniciativas presentadas y turnadas a cualquiera de ellas que tuvieran como elemento esencial una propuesta de reforma o adición a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dichas Iniciativas son las siguientes:

a) En la Sesión del Senado de la República del 02 de enero de 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con



Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de asistencia personal.

Se turnó a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, con fecha del 05 de enero de 2017.

b) En la Sesión del Senado de la República del 26 de abril de 2016, el Senador Félix González Canto integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III y se adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 12 de la General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

c) En la Sesión del Senado de la República del 28 de abril de 2016, la Senadora María de los Ángeles Verónica González Rodríguez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

d) En la Sesión del Senado de la República del 14 de diciembre de 2015, el Senador Alejandro Tello Cristerna integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

e) En la Sesión del Senado de la República del 11 de diciembre de 2014, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de empleo y reinserción productiva.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

f) En la Sesión del Senado de la República del 04 de octubre de 2012, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad .

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

CONTENIDO



A continuación se presenta en orden cronológico, como se muestra en el apartado de "Antecedentes", la mención específica del propósito de cada una de las iniciativas presentadas para su análisis y dictamen.

1. Iniciativa presentada por la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, referente al inciso a) del apartado anterior.

La Iniciativa menciona que pretende diversas adiciones en materia de inclusión de las personas con discapacidad a fin de adoptar mejores prácticas en la acción gubernamental para el alcance de sus derechos.

La Iniciativa propone en primer término incorporar las acciones necesarias para la actuación de las autoridades respecto a los principios de inclusión y accesibilidad. El principio de inclusión es una innovación dentro del marco jurídico nacional que ya se ha propuesto ante el Pleno de la Cámara de Senadores, que, de manera enunciativa y no limitativa, pretende dirigir el accionar de la política pública en México sobre la inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo a las siguientes directrices:
1. El Estado reconoce que la Discapacidad es una condición que conjuga las características físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales de las personas, con una omisión por parte de la sociedad, lo que resulta en una interacción restringida de las mismas con su entorno, lo que tiene como consecuencia un acceso limitado a sus derechos humanos.
2. El Estado en el momento de generar alguna política pública comprende que las personas con discapacidad requieren ciertos ajustes para acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Si esta premisa se ignora con frecuencia las personas con discapacidad estarán en desventaja frente a sus pares con discapacidad.
3. El Estado debe reducir las acciones asistenciales, para enfocarse en el diseño y desarrollo de políticas públicas que promuevan el empoderamiento de las personas con discapacidad, con autonomía e independencia.
4. El Estado tendrá siempre la atribución de consultar a las personas con discapacidad y las organizaciones que los representan, en todos los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas, sea que estén enfocadas directamente a este grupo social

En este sentido, es necesario incorporar dos acciones pendientes que la Ley aún no considera, pero que la sociedad ha manifestado en diversas ocasiones, en primer lugar, la necesidad de contar con asistencia personal residencial y con animales de asistencia, ambos de alguna manera subrogados por el Estado o favoreciendo su incorporación como servicios públicos, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1914 y 2015 de la Convención. En este sentido se pretende incorporar la figura de la asistencia humana y animal definiéndola como una acción de accesibilidad necesaria para que las personas con discapacidad puedan vivir en comunidad y movilizarse con independencia.

2. Iniciativa presentada por el Senador Félix Arturo Canto, referente al inciso b) del apartado anterior. **NEGATIVO**

La Iniciativa menciona que a no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Se encuentra presente en sus principales tratados. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como discapacidades, religión, sexo, raza, color, preferencias sexuales, y así sucesivamente.

Un aspecto fundamental que incorporó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es el relativo a la educación inclusiva, entendido por ella la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, lo cual es de suma importancia debido a que el asegurar la educación a los niños,



adolescentes y jóvenes discapacitados lleva aparejada una mejora en su calidad de vida puesto que –como a cualquier persona- la educación les permite obtener conocimientos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su interacción social, cultural y económica. Además de que desde la perspectiva económica, la educación de una persona discapacitada hace de ella una persona productiva que no tiene necesariamente que depender de su familia o del Estado durante toda la vida.

El prohibir el condicionamiento a la integración de las niñas, niños y adolescentes a la educación básica radica en la importancia de que adquieran toda una serie de conocimientos básicos indispensables para el desarrollo de múltiples habilidades, así como para su integración social, cultural y económica y de que los niños y adolescentes con discapacidad necesitan tanta educación como sus pares.

Por lo que se pretende que las niñas y niños con discpacidad en el país tengan un acceso total al sistema educativo.

3. Iniciativa presentada por la Senadora María de los Ángeles González, referente al inciso c) del apartado anterior. **NEGATIVO**

La reticencia de la sociadad ante las personas con discapacidad resulta un problema serio para el desarrollo de estos ya que ni siquiera en los escenarios donde evidentemente pueden requerir ayuda e incluso, muestra acciones discriminatorias en contra de ellos, por lo tanto, además de las barreras físicas a las que se enfrenta este grupo vulnerable, también se encuentran con diferencias en el trato personal.

Se debe reconocer que las personas con discapacidad son miembros de la sociedad que tienen los mismos derechos que los demás y por ende, merecen las mismas oportunidades que la población en general.

Por lo tanto, es necesario que nuestro país asuma una postura de compromiso con estas personas y muestre la voluntad de garantizar los derechos humanos de toda su población de acuerdo con las disposiciones internacionales y lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política.

En esta dirección, esta iniciativa pretende facultar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el andamiaje legislativo necesario que permita hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad.

4. Iniciativa presentada por el Senador Alejandro Tello Cristerna, referente al inciso d) del apartado anterior.

La Iniciativa menciona que en primer término, debe señalarse que el análisis que se realice en materia de discapacidad debe hacerse a la luz de los principios de igualdad y de no discriminación. Lo anterior en virtud de que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que sobre personas con discapacidad se ha realizado, tiene como finalidad última evitar la discriminación hacia este sector social y, en consecuencia, propiciar unaigualdad material entre las personas.

A la luz del modelo social, la discapacidad debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada las necesidades de las personas con diversidades funcionales. En tal virtud, la deficiencia individual es la que genera una diversidad funcional, misma que al ponerse en contacto con una barrera social produce una discapacidad.

En virtud de las consideraciones vertidas, considero necesario modificar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de ampliar el espectro de cobertura y aplicación de los principios referidos a la consecución de una situación óptima contextual para las personas con discapacidad.

5. Iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, referente al inciso e) del apartado anterior. **NEGATIVO**



Menciona que las personas con discapacidad se ven en la necesidad de cubrir costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares, además de medicamentos o servicios de atención a la salud. En parte debido a estos gastos, es probable que las personas con discapacidad y sus familias sean más pobres que las personas sin discapacidad con unos ingresos similares, sin embargo, el mayor problema que enfrentan sigue siendo la exclusión que agrava sus condiciones de vida al no permitirles la incorporación a la vida laboral y productiva.

Si reconocemos que en nuestro país todas las personas tenemos derecho – al menos escrito- a tener un trabajo que nos permita recibir un ingreso económico y gozar de prestaciones laborales y de seguridad social, es necesario garantizar que esas condiciones se cumplan para la población con discapacidad.

Tomando en cuenta que el artículo 5º de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley Federal del Trabajo, señalan que a ninguna persona se le puede impedir, se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando sean lícitos, debemos garantizar que las personas con discapacidad puedan incorporarse a las actividades que elijan.
Así esta propuesta plantea que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de un programa de financiamiento, apoye a las empresas y centros laborales para que realicen obras tendientes a mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

6. Iniciativa presentada por la Senadora Adriana Díaz Lizama, referente al inciso f) del apartado anterior.

La Iniciativa que se dictamina, conjunta una serie de disposiciones en pro de mejorar la normatividad encargada de velar por los derechos de las personas con discapacidad. Lo que trata de modificar en sentido general son ciertas conceptualizaciones dentro de la norma, la atribución del manejo de las subvenciones por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y por último otorgar nuevas facultades al Sistema Nacional para el desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De forma particular la iniciativa pretende:

- Modificar los conceptos de Comunidad de Sordos, Igualdad de Oportunidades y de Persona con discapacidad, a fin de usar un lenguaje más claro y preciso.

- Establecer que por Situación Comparable se, entiende aquel hecho en que converjan circunstancias de modo, tiempo y lugar idénticas, y mayormente en situación de elección entre una persona con cualquier discapacidad y otra persona que no la posea.

- Incluir como uno de los principios que deberán observar las políticas públicas la procuración de la contribución, asistencia y protección a cargo de la familia respecto de las personas con discapacidad en el goce de sus derechos

- Facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal para estimular la participación de la familia, a través de subvenciones

- Incorporar presupuesto a los municipios para alcanzar los objetivos de esta Ley

- Proteger la privacidad de las personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES



Conceptualización

1. Las personas con discapacidad, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones tienen el derecho inalienable de que les sean respetados y se les haga valer sus derechos humanos, en este sentido es necesario que la legislación vigente debe de estar evolucionando y yendo hacia una mejor dirección constantemente debido a las nuevas necesidades y al mejoramiento en la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Es por ello que resulta indispensable que las leyes sean lo más claras posibles, así que en el rubro de la conceptualización es importante añadir ciertos conceptos que resultan importantes para comprender mejor y para añadir certidumbre a la legalidad de las mismas.

Aún existen conceptos que necesitan ser agregados a la Ley General que estamos tratando, cabe mencionar que estas adiciones deben de ir en sentido del tema y con un propósito claro.

2. Es de suma importancia que las personas que desempeñan cargos en relación con personas con discapacidad se encuentren correctamente capacitadas y puedan brindar el mejor servicio posible a este sector de la población. La "Asistencia Personal" debe de estar certificada para que se logren los resultados esperados.

3. En el término de "Accesibilidad Universal" nos parece que aunque es una amplitud del concepto, el simple término "Accesibilidad" contiene más ideas y es posible manejarlo en diferentes ámbitos dentro de la ley para referirse a muchas más acciones.

En todo caso se podría agregar además del concepto de sólo accesibilidad para reforzar el mismo y tener varias aristas de utilización.

4. En el caso de la llamada "Eficacia Horizontal" creemos que resulta de vital importancia comprometer y hacer parte a los mismos ciudadanos del cuidado, protección y respeto hacia las personas con discapacidad, así que este concepto ayuda a abrir el horizonte de acción para este sector.

5. La "Comunidad de Sordos" en el país se refiere a un grupo de personas con ciertas características que comparten y que los hace pertenecer a dicha comunidad, es importante mencionar que aunque si se les puede catalogar como una comunidad no es posible transferirlo a un "grupo social" ya que este se refiere a un término genérico que se refiere a un número de personas que interactúan entre ellas para conseguir un objetivo común y diverso. Se dice que es la parte más explícita de la estructura social.

Un conjunto de personas con las mismas características sin que necesariamente tengan que perseguir un objetivo en común, sería una conceptualización más acertada para un grupo con un problema de salud similar en este caso la sordera.

6. Por otro lado, el concepto "Igualdad de Oportunidades" busca una meta y como lo menciona la misma iniciativa resulta importante esclarecer el objetivo que se pretende alcanzar con la definición de igualdad de oportunidades y esta se adecúa más a que las personas con discapacidad buscan esta igualdad de oportunidades para alcanzar las mismas condiciones que tienen todos los demás, por lo tanto la conceptualización de la presente Ley General resulta poco clara y es conceptualizada por medio del mismo concepto resultando en un pleonasmo.

7. En el caso del concepto de "Persona con Discapacidad" el cual resulta fundamental para los usos de esta Ley, parece que al querer agregar a "las actitudes" de la sociedad como un impedimento para el correcto desarrollo de una persona con discapacidad en la sociedad resulta repetitivo, ya que en el texto ya se encuentran incluidos estos impedimentos como "barreras" por lo que agregar "actitudes" a la conceptualización resulta poco aclaratorio, como si los impedimentos que enfrentan las personas con discapacidad sólo se redujeran a los comportamientos de la sociedad.



Protección del Estado hacia las Personas con Discapacidad

2. Como bien se menciona en la misma Ley General, el Estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y en conjunto de los preceptos legales establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la ONU, y cito:

Capítulo VI DESARROLLO SOCIAL
Artículo 21.
La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:
I. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo Social;
II. Establecer programas para la prestación de servicios de asistencia social para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, incluidos servicios de capacitación, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales, los cuales se extenderán a las regiones rurales y comunidades indígenas;
III. Promover la apertura de establecimientos especializados para la asistencia, protección y albergue para personas con discapacidad en situación de pobreza, abandono o marginación, y
IV. Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

Por lo que ya existe en la legislación la proteccion y respeto y promoción hacia las personas con discapacidad por parte del Estado

Movilidad
Es una de las prioridades más importantes para la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad que este sector cuente con todo lo necesario para desenvolverse dentro de la sociedad. La movilidad permite a las personas de este sector mayor independencia y mejor calidad de vida en grandes proporciones. Como se menciona en la Convención en su artículo 20:

Artículo 20

Movilidad personal

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que



tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Donde también México como Estado Parte de la Convención lo ha plasmado en la Ley vigente sobre este tema:

Capítulo IV Accesibilidad y Vivienda
Artículo 16.
Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente. Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los mismos. Para tales efectos, el Consejo realizará las siguientes acciones:
I. Coordinará con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, la elaboración de programas en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda, la promoción de reformas legales, elaboración de reglamentos o normas y la certificación en materia de accesibilidad a instalaciones públicas o privadas;
II. Supervisará la aplicación de disposiciones legales o administrativas, que garanticen la accesibilidad en las instalaciones públicas o privadas, y
III. Promoverá que las personas con discapacidad que tengan como apoyo para la realización de sus actividades cotidianas, un perro guía o animal de servicio, tengan derecho a que éstos accedan y permanezcan con ellos en todos los espacios en donde se desenvuelvan. Asimismo, queda prohibido cualquier restricción mediante la que se impida el ejercicio de este derecho
Por lo que también se aseguró que por medio de esta norma, las personas con discapacidad cuenten con vías de comunicación, transporte y desarrollo urbano. Se han realizado grandes esfuerzos para que este sector cuente con todo lo necesario en materia de movilidad y accesibilidad.

Situación Comparable

1. En lo que respecta a las adiciones del artículo 4 y 5, que hablan de una definición más amplia al concepto de "situación comparable" y de una adición a los principios que se deben de observar en las políticas públicas referentes al tema de discapacidad, respectivamente.

En el primer párrafo del artículo 4 que menciona que: "Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una "situación comparable."

Queda claro que lo que se trata es de que las personas con discapacidad sean tratadas en un ambiente de total igualdad ya sea con personas con o sin discapacidad.

Principios que rigen la Ley General en sus Políticas Públicas

1. En el segundo punto, en la modificación al artículo 5 referente a los principios en las políticas públicas, se pretende agregar la procuración y protección de la familia a cargo de una persona con discapacidad. En este sentido un principio como lo son la no discriminación, la igualdad y la transversalidad,



por mencionar algunos ejemplos, si tienen cabida en este artículo, más el tratar de incluir el velar por la familia de una persona con discapacidad en este contexto queda fuera de ámbito, es claro que se le debe de brindar cuidado a las personas encargadas de una persona con discapacidad ya sea familiar u otro, pero no sobre los principios que se necesitan para el buen desarrollo de políticas públicas dirigidas a este sector.

Apoyo Económico a Personas con Discapacidad

1. Los apoyos económicos o subvenciones procedentes por parte del gobierno para algún particular, en este caso para alguna persona con discapacidad, para familiares directos o personas que estén al cargo de las mismas se encuentran registrados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y específicamente en el informe "Presentación y Análisis del Inventario 2012-2013" por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Inventario de programas federales para personas con discapacidad

Ramo	Institución	Nombre del programa	Derecho Social o Bienestar Económico (directo)	Derecho Social o Bienestar Económico (indirecto)	Areas de Atención de los Derecho Social o Bienestar Económico	Grupos de atención	Apoyos que reciben los beneficiarios directos
Educación Pública	SEP	Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa	Educación	NA	Infraestructura y equipamiento escolar	Instituciones de Educación | Otro: Equipos Técnicos Estatales	Asesoría técnica | Capacitación | Libros y/o material didáctico | Servicios educativos | Financiamiento de servicios
Educación Pública	SEP	Educación para personas con discapacidad	Educación	No Discriminación	Becas; Infraestructura y equipamiento escolar	Personas con discapacidad	Beca | Financiamiento de infraestructura
Educación Pública	SEP	Sistema Nacional de Educación a Distancia	Educación	NA	Programas educativos de los sistemas regular o comunitario; Servicios educativos	Estudiantes | Personas con discapacidad | Otro: Personas Adultas en lugares sin acceso a la Educación Superior | Otro: Internos de Centros Penitenciarios	Servicios educativos
Salud	SALUD	Programa de Atención a Personas con discapacidad	Salud	No Discriminación	Derechos humanos	Personas con discapacidad | Población con ingreso específico	Difusión, campañas y/o promoción | Capacitación | Servicios de salud
Trabajo y Previsión Social	STPS	Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	Trabajo	No Discriminación	Derechos humanos	Grupos vulnerables | Otro: Personas en situación de vulnerabilidad laboral	Asesoría técnica
Desarrollo Social	SEDESOL	Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Alimentación	Salud	Abasto y/o comercialización de alimentos	Población con ingreso específico | Población en pobreza	Alimentos
Desarrollo Social	SEDESOL	Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa[1]	Vivienda	No Discriminación	Infraestructura social básica	Madres | Personas con discapacidad | Población con ingreso específico | Población en pobreza	Tierra, lote, predio o parcela | Vivienda nueva o mejoramiento de vivienda pre existente | Otro: Subsidios
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	ISSSTE	Rehabilitación	Salud	NA	Servicios de salud o cobertura de servicios	Población Derechohabiente	Servicios de salud
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	ISSSTE	Atención a Personas con discapacidad	Salud	NA	Atención y/o prevención de enfermedades	Población Derechohabiente	Capacitación

Fuente: Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 2012.

De acuerdo entonces con el CONEVAL existen 9 programas de ámbito federal que otorgan alguna clase de apoyo a las personas con discapacidad ya sea directa o indirectamente. Estos programas velan por el desarrollo personal y social de las personas con discapacidad y también por sus familias.

Y son estás instituciones las encargadas de acuerdo a su alcance, en otorgar, controlar y evaluar el uso de los apoyos otorgados.

Como es posible constatar existen medios de apoyo por parte de distintas secretarías, los cuales ya se encuentran considerados y por ende en el Presupuesto de Egresos de cada año correspondiente. Estos son apoyos federales enfocados en la atención hacia las personas con discapacidad por lo que el establecer nuevas subvenciones necesitaría de un estudio más profundo en materia fiscal y económica así como un reordenamiento de los programas de apoyo ya existentes.

Protección de Datos Personales



1. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, brinda las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a posibles actos contra nuestra privacidad.

La Ley que mencionamos en el párrafo anterior tiene por objeto, el tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, que hagan posible el acceso a los datos personales con arreglo a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. Y se consideran fuentes de acceso público:

I. Los medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general;

II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica;

III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa, y

IV. Los medios de comunicación social.

En este sentido, es posible corroborar que los datos personales de cualquier individuo perteneciente a la sociedad mexicana tiene alcance en esta Ley Federal, incluidas las personas con discapacidad, es por ello que parece innecesario crear un apartado acerca de la "privacidad" de las personas con discapacidad y mucho menos crear todo un capítulo en relacióna este tópico.

Es por ello, que analizando las Iniciativas propuestas, y por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones VII y XVII del artículo 2, la fracción XI del artículo 5, la fracción III del artículo 7; se adicionan las fracciones IV y XIII al artículo 2 y las fracciones XII y XIII al artículo 5, recorriéndose en su orden la subsecuente, todos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a **III.** …

IV. Asistencia Personal: Es el servicio personal que ayuda a realizar las actividades cotidianas y de cuidado personal a una persona con discapacidad dificultad para realizarlas por sí misma, de acuerdo a un contrato de servicios o por vía voluntaria, el cual cumple con la capacitación y certificación para realizar esta actividad;

V. **Ayudas Técnicas.** …

VI. Comunicación. …

VII. Comunidad de Sordos. Aquel conjunto de personas, cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral;



VIII. Consejo. …

IX. Convención. …

X. Discriminación por motivos de discapacidad. …

XI. Diseño universal. …

XII. Educación Especial. …

XIII. Eficacia Horizontal. Se refiere a la exigencia de los principios contenidos en esta Ley tanto a las autoridades, así como a los particulares.

XIV. Educación Inclusiva.

XV. Estenografía Proyectada.

XVI. Estimulación Temprana. …

XVII. Igualdad de Oportunidades. Proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras o adopción de acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad su inclusión, integración, convivencia y participación, con objeto alcanzar las mismas condiciones con el resto de la población;

XVIII. Lenguaje. …

XIX. Lengua de Señas Mexicana. …

XX. a **XXX.** …

Artículo 5. …

I. a **X. …**

XI. La transversalidad;

XII. El diseño universal;

XIII. La eficacia horizontal, y

XIV. Los demás que resulten aplicables.

Artículo 7. …

I. y II. …

III. Elaborar e implementar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en lo que corresponda, programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad



y asistencia personal, a fin de que los profesionales de la salud y servicios relacionados a la asistencia y cuidado personal, proporcionen a las personas con discapacidad una atención digna y de calidad, sobre la base de un consentimiento libre e informado;

IV a XII. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores, a 31 de octubre de 2017



6. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 3º de la Ley General de Población.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Población, en materia de inclusión de personas con discapacidad.

Estas Comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de agosto del 2014, de la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Población, en materia de inclusión de personas con discapacidad.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa en comento a las



Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objeto adicionar una fracción VII del artículo 3° de la Ley General de Población vigente, con la finalidad de que se considere establecer que la Secretaría de Gobernación promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, la plena inclusión de las personas con discapacidad.

CONSIDERACIONES

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

Las personas con discapacidad, son la minoría más extensa del mundo suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas de pobreza más altas. Eso se debe principalmente a la falta de servicios que les puedan facilitar la vida (como acceso a la información o al transporte) y porque tienen menos recursos para defender sus derechos. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la existencia de estas barreras es un componente esencial de su separación dentro de la sociedad. La Convención recalca que la discapacidad es un concepto evolutivo al pasar de ser considerado un aspecto netamente médico hasta uno más complejo de respeto de derechos humanos en donde la discapacidad es considerada parte de la condición humana.

Asimismo la ONU menciona en sus cifras que 7 mil millones de personas de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad es decir una persona de siete sufre discapacidad.

De esta forma la Organización Panamericana de la Salud, (OPS) y la Organización Mundial de la Salud, (OMS) señalan que en la región de las Américas unos 140 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para la inclusión en todos los aspectos de la vida: educación, empleo, participación social y política y salud.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) en el censo de población de 2010 las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total.

De igual forma con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, tenemos que de los 7.7 millones de personas con discapacidad que viven en México, las cifras siguientes:



- 51.4 por ciento de las personas con discapacidad tiene más de 60 años de edad.
- El principal tipo de discapacidad es la dificultad para caminar (57.5 por ciento).
- Las enfermedades son la principal causa de discapacidad con el 38.5 por ciento.
- En 19 de cada 100 hogares del país vive al menos una persona con discapacidad.
- Hay mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los de ingreso más bajo.

Es necesario señalar que las normas y compromisos en México por lo que todas las leyes y políticas públicas deben tener un enfoque de inclusión a favor de las personas con discapacidad.

En ese sentido, también mandata la creación de un Programa Nacional en materia de discapacidad, a través del cual se deberán establecer las políticas públicas y estrategias a favor de la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad

En mayo de 1995 se presenta el Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE). En el año 2000 se creó la Oficina para de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPIS), además la creación del Consejo Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (CODIS), como el organismo encargado de dar cumplimiento a las acciones derivadas del Programa Nacional.

Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad los estados en parte tienen el compromiso de trabajar a favor del pleno reconocimiento y respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Al mismo tiempo el 30 de mayo del 2011 se publica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad que tiene como objetivo establecer las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la Ley General de Población, esta tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

Para ello, la Secretaría de Gobernación dictará o promoverá ante las dependencias las medidas necesarias, entre otras, para:

- Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades de la población.
- Realizar programas de planeación familiar.
- Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de salud pública y de protección a la infancia.
- Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional.

Por consiguiente las acciones encaminadas a fomentar la participación justa y equitativa de la población en los beneficios del desarrollo económico y social no se contemplan medidas encaminadas directamente a favor de las personas con discapacidad. Si no es la necesidad de una inclusión total para las personas con discapacidad



Por lo antes expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideran satisfactoriamente la aprobación de la presente iniciativa, por lo que resulta importante que se tome en cuenta la inclusión para mejorar la calidad vida y minimizar la discriminación de la población con discapacidad .

RESUELVEN

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 3o DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.

Único. – Se adiciona una fracción VII al artículo 3o de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 3o.- ...

I.- a **VI.-** …

VII.- La inclusión de las personas con discapacidad;

V III.- (se deroga)

IX. a **XIV**. …

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 31 de octubre de 2017



7. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de atención a grupos vulnerables y de estudios legislativos, segunda de la LXIII legislatura del senado de la república del honorable congreso de la unión, les fue turnada para su estudio la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance que tenía la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de agosto del 2016 la presidencia de la cámara de senadores recibió de la Sen. Yolanda de la Torre Valdez la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, segunda, para su estudio y dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene por objetivo el proponer establecer una comunicación interinstitucional del Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad toda vez que, a través de la atribución de concurrencias, se asiente el conjugar el ámbito de competencia de las instituciones, de tal manera que se generen políticas comunes donde se observe una visión enfocada a las y los jóvenes con discapacidad en México.

CONSIDERACIONES

De conformidad con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo cuarto



que nos menciona las "obligaciones generales", por lo entendido se considera que en este apartado manejarán las obligaciones de asentimiento con las leyes establecidas en el país.

Lo que a su letra dice el artículo en materia:

> 1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:
>
> a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Convención;
>
> b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
>
> c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
>
> d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;
>
> e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
>
> f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;
>
> g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;
>
> h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;
>
> i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en



otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Y si hablamos de las formas para desarrollarse en la sociedad, discutimos de la forma de accesibilidad que existe para las personas con discapacidad como lo marca la misma convención en su artículo nueve que a la letra dice:

Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor



medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en menor medida.

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprueba con modificaciones el Decreto presentado por la Senadora promovente, toda vez que con esto se creará una sinergia entre las instituciones para poder trascender en las políticas públicas encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las Personas con Discapacidad, de esta manera, reducir la brecha que existe para su vida independiente.

Resuelve

Único: Se aprueba con modificaciones en términos para reformar y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Primero: Se reforman el párrafo primero, la fracción I y el inciso i) del artículo 8; y el primer párrafo del artículo 15 Bis. Se adiciona el inciso k) a la fracción l del artículo 8, todos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por **dieciocho** miembros, de los cuales será:

I**. Once** Miembros Propietarios:

a) a **h)** …

i) El Secretario de Comunicaciones y Transportes,

j) …

k) El Director del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

II. …

…



…

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, **procurando la representación de jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad**, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, los pueblos y comunidades **indígenas y las organizaciones de personas con discapacidad.**

…

…

Segundo.- Se **reforma** el quinto párrafo del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 44. …

…

…

…

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía e **Instituto Mexicano de la Juventud.**

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 6 de marzo de 2018



8. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas Iniciativas con Proyecto de Decreto por distintos Senadores de la República, por las que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Estas comisiones, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 117, 135, 150, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "**ANTECEDENTES**", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a "**CONTENIDO**" se sintetizan las propuestas de reformas en estudio.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES**", las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras, que se realizará agrupándolas por grandes temas.

IV. En el capítulo de "**RESOLUTIVO**", es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno del Senado de la República.

ANTECEDENTES

1. Estas Comisiones Unidas coincidieron en la pertinencia de analizar y determinar, en primera instancia, la totalidad de iniciativas presentadas y turnadas a cualquiera de ellas que tuvieran como elemento esencial una propuesta de reforma o adición a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Dichas Iniciativas son las siguientes:



a) En la Sesión del Senado de la República del 24 de octubre de 2017, el Senador José María Martínez Martínez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona la fracción XXII al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

b) En la Sesión del Senado de la República del 13 de diciembre de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solorio integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

c) En la Sesión del Senado de la República del 13 de diciembre de 2016, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 9 bis y reforma la fracción II del artículo 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

d) En la Sesión del Senado de la República del 08 de noviembre de 2016, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el inciso c de la fracción II del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Se turnó con fecha a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda.

CONTENIDO

A continuación, se presenta en orden cronológico, como se muestra en el apartado de “Antecedentes”, la mención específica del propósito de cada una de las iniciativas presentadas para su análisis y dictamen.

1. Iniciativa presentada por el Senador José María Martínez Martínez referente al inciso a) del apartado anterior.

La Iniciativa presentada por el Senador José María Martínez pretende reformar la Ley en comento con el objetivo de mejorar la calidad en la atención y en el otorgamiento de servicios para las personas de edad avanzada.



Se menciona en la Iniciativa que es necesario estimular y fortalecer las acciones que realizan los integrantes del Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar la calidad de la atención, procurando que la prestación de los servicios de atención, respondan a parámetros que aseguren una operación integral más eficaz, que contribuya a brindar una atención digna a los adultos mayores en situación de riesgo y de vulnerabilidad.

Por lo que es necesario reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para crear un esquema que se enfoque en dos áreas:

- La primera: en diferenciar el cuidado familiar y la prestación del servicio de cuidado, y
- La Segunda: en establecer estándares mínimos de atención integral en los espacios de cuidado de los adultos mayores.

2. Iniciativa presentada por el Senador Rabindranath Salazar Solorio, referente al inciso b) del apartado anterior.

La Iniciativa tiene un alcance amplio, ya que pretende reformar y adicionar ciertas disposiciones como definiciones y principios para dar una mayor certeza a los derechos de las personas adultas mayores.

En resumen, se pretende realizar lo siguiente:

La incorporación en el capítulo de los derechos a que, en los casos de adultos mayores con discapacidad o indígenas, deberán contar con un traductor, intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas, peritos especializados en las diversas discapacidades que les garantice un debido proceso y permita un mejor acceso a la justicia.

En lo que respecta a la perspectiva de salud, la alimentación y la familia se propone el consentimiento informado para cualquier tratamiento médico, incluida la posibilidad de voluntad anticipada, poniendo especial atención en las personas con discapacidad y en aquellos casos de adultos mayores con discapacidad, se les garantizarán los tratamientos farmacológicos necesarios de forma gratuita o de bajo costo.

En el rubro que corresponde a la educación, se propone que el Adulto Mayor cuente con un sistema nacional de talleres-escuelas dedicadas a la formación, capacitación y enseñanza de temas y conocimientos geriátricos y con programas y espacios para actividades educativas y de recreación cultural y social que vayan acorde a sus necesidades.

En lo referente a los aspectos laborales y la asistencia social, se incorporan en la propuesta el contar con mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso contra las personas adultas mayores en el lugar de trabajo y a recibir el mismo salario que cualquier otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, asimismo se le considera sujeto de subsidios complementarios, especialmente para aquellos jubilados con bajos ingresos y personas con discapacidad para con ello cuente con programas específicos y medidas financieras que les aseguren una vida independiente en la comunidad, permitiéndoles elegir su forma de vida y el lugar de residencia y líneas presupuestarias específicas para cumplir los objetivos en materia de igualdad.

En cuanto a las políticas públicas contempladas en la norma que se reforma, se propone que en los objetivos



de la Política Nacional sobre personas adultas mayores se diseñe implemente un Plan Nacional de Accesibilidad para los Adultos Mayores aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Finalmente se propone que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores diseñe e implemente un sistema de monitoreo periódico de los programas y acciones enfocados a las personas adultas mayores.

3. Iniciativa presentada por la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, referente al inciso c) del apartado anterior.

La presente Iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en cuanto se refiere a la protección de Adultos Mayores que viven solos; y establece el atributo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que dentro de los servicios de asistencia y orientación jurídica que presta a este sector, en cuanto a la seguridad de su patrimonio, en materia de alimentos y testamentaria, de seguimiento permanente cuando un adulto mayor viva en estas condiciones, buscando insertarlos en su núcleo familiar.

Se hace referencia a la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por INEGI en donde se menciona que en nuestro país 1 de cada 10 adultos mayores vive solo, condición que implica que día a día se enfrenten a diversos retos por la falta de apoyo incluso para desarrollar sus actividades diarias y cuidados de salud elementales y en ocasiones, hasta para alimentarse, factores que indudablemente vuelven compleja esta etapa.

Los objetivos principales de estas reformas a la Ley que se proponen en la citada Iniciativa son los siguientes:

1) Determinar que las instituciones públicas deberán de contar con mecanismos de atención a los adultos mayores para que así les otorguen prioridad y atención inmediata.

2) Facultar al DIF para brindar servicios de asistencia y orientación jurídica dando seguimiento en caso de personas de edad avanzada en estado de abandono y que el DIF promueva programas de prevención y protección para este sector de la población y así poder reincorporarlos al núcleo familiar o a alguna institución adecuada.

4. Iniciativa presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, referente al inciso d) del apartado anterior.

Se pretende dar una mayor certeza jurídica a las personas adultas mayores por medio de medidas de protección que busquen un verdadero equilibrio entre las partes, procurar que la Litis del juicio sea debidamente planteada al adulto mayor ya sea en su calidad de actor o demandado, asimismo dar la mayor celeridad y agilidad en la realización de las diligencias que se decreten en los procesos; desde el inicio de un procedimiento, se debe ordenar una entrevista por el Juez de la causa para observar el estado físico y emocional del adulto mayor.

Con esta medida estaremos contribuyendo en la preparación del trato que debe recibir el adulto mayor en los litigios y evitar injusticias relacionadas con el despojo de sus bienes de parte de familiares y extraños, que no les tienen ninguna consideración después de una larga vida de trabajo y entrega que les permitió adquirir



los mismos.

En este sentido, el objetivo de la Iniciativa es el de procurar el bienestar de los adultos mayores al iniciar un proceso judicial.

CONSIDERACIONES

POLÍTICA NACIONAL SOBRE PERSONAS ADULTAS MAYORES

1. En México existe un órgano encargado de la política nacional en torno a las personas adultas mayores que es el Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores INAPAM, el cual nace con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el 2002.

Y es este Instituto es el que garantiza los servicios de atención, protección, apoyos y políticas públicas hacia el sector de la población de los adultos mayores. La actual administración gubernamental federal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ha establecido cinco Ejes orientados a reducir las desigualdades que imperan en el país y a alcanzar un mayor desarrollo.

El Eje 2 "México Incluyente" es el marco de las acciones del INAPAM, al promover la equidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades, así como la provisión de una red de protección social que garantice el ejercicio del derecho a la salud.

Asimismo, el Instituto ubica su actuación en el Objetivo 2.2 del PND 'Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente', en la Estrategia 2.2.2 'Articular políticas que atiendan, de manera específica, cada etapa del ciclo de vida poblacional' y en la línea de acción centrada en el fortalecimiento de "la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social"

Por lo que es posible constatar que es por medio del Instituto y de la Ley por la que se rige, que la Política Nacional en torno a las personas adultas mayores se está aplicando en todos los ámbitos y necesidades de este sector de la población y que se garantizan sus derechos y se velan por sus necesidades.

CONCEPTUALIZACIÓN

1. Existen diversas disposiciones que se pretenden realizar en torno a las conceptualizaciones dentro de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, este tipo de disposiciones creemos firmemente que son importantes para darle un uso y un entendimiento correcto a la Ley, y es importante que se estén actualizando y añadiendo nuevos términos debido a las particularidades de cada norma y también a las coyunturas que existan en la actualidad.

Sin embargo, existen ciertos criterios y en particular en el tema de la discapacidad, en donde muchos organismos internacionales, asociaciones y fundaciones han buscado la manera de no ver a la discapacidad como algo fuera de lo normal, sino que se busca que sea un término totalmente incluyente y que se le dé un nuevo sentido hacia la no discriminación.

Es por ello que en los cambios que se pretenden realizar en torno al concepto de "discapacidad" y "persona con discapacidad" no resultan completamente satisfactorios. Como ejemplo proponemos el concepto que se



trató en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual menciona que la discapacidad es "aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad".

2. Por otro lado nos resulta conveniente ampliar el sentido del término "Equidad" añadiendo una variable más que es la palabra "discapacidad" y que es muy importante como variable para que se tenga un contexto más amplio de las diversas situaciones en las que se puede presentar discriminación.

CERTEZA JURÍDICA

1. Es sumamente importante que se apliquen las medidas necesarias o como decimos en el argot "acciones afirmativas" de cualquier tipo para que las personas adultas con discapacidad o indígenas cuenten con un proceso legal adecuado y sobre todo justo, además de la gratuidad que está cubierta por el mismo INAPAM en asesoría jurídica, se debe de contar con el personal adecuado para tratar con este sector poblacional y no dejarlo desprotegido.

SALUD

1. En el ámbito de la Salud, el gobierno federal ha hecho esfuerzos constantes porque se respete la voluntad de los pacientes, y no sólo en el sector de las personas adultas mayores sino en todos los sectores pertinentes.

Es necesario mencionar que en muchas ocasiones el paciente por distintas características de su padecimiento u otras adquiridas tiempo atrás, no puede contar con voluntad propia y es necesaria la intervención de algún tercero.

En torno al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, En cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) pondrán en marcha un programa de vales de medicamentos para sus derechohabientes conforme a lo siguiente:

En el caso del IMSS:

Cuando un medicamento no esté disponible en la farmacia de la Unidad de Medicina Familiar que le corresponde al derechohabiente, su receta será activada como vale autorizado que podrá canjear, el mismo día, por sus medicinas en cualquiera de las 60 farmacias de las Unidades de Medicina Familiar en el Distrito Federal o en el Centro de Canje de Medicamentos que el IMSS habilitó especialmente para este programa.

En el caso del ISSSTE:

Cuando un medicamento del cuadro básico no esté disponible en una farmacia del ISSSTE, se entregará al derechohabiente un vale por la medicina que no pudo recibir. El vale podrá hacerse efectivo el mismo día en uno de los centros de canje del propio instituto, los cuales funcionarán los siete días de la semana.

Este programa se irá implementando gradualmente en las principales ciudades del país en el transcurso del año.

ASISTENCIA SOCIAL

1. Acerca de las disposiciones que se pretenden cambiar en torno a este punto de la asistencia social



hacia las personas adultas mayores, hay que mencionar que ya existen de distintas maneras. A continuación, se presenta algunos ejemplos:
A nivel federal, existen varias instituciones que se dedican al resguardo de este sector de la población, con recursos, programas y políticas públicas al servicio de nuestras personas mayores. Las cuales se mencionan a continuación:

2. El Programa "Pensión para Adultos Mayores" de corte federal y que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, es un programa que se ha venido reforzando y que ha avanzado hacia una mayor protección para todos los adultos mayores del país, este programa actualmente además de otorgar un apoyo económico de $1, 160 bimestrales a las personas de 65 años en adelante, también los integra a grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen facilidades para acceder a servicios y apoyos de instituciones como el INAPAM, además de aquellas que ofrecen actividades productivas y ocupacionales.

Aunado a esto, las reglas de operación también han evolucionado hacia un mejor camino en beneficio de las personas adultas mayores como la eliminación de trámites de supervivencia y la agilización en los procesos de registro, todo esto para facilitar el acercamiento de este sector hacia los apoyos que tienen por derecho.
3. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el actual año de ejercicio aunque ha sido precavido en el destino de los recursos, en el ámbito de la Clasificación Administrativa que incluye el gasto programable de cada dependencia y entidades públicas del gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL ha sido una de las dependencias que menos recortes han recibido precisamente por la importancia que deriva de esta institución hacia las personas con menos recursos y menos acceso.



[1]

Por otro lado, aunque haya existido un recorte de presupuesto para la SEDESOL, el gasto programable que

[1] "Recorte para 2017 castigará a todas las dependencias", El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recorte-para-2017-castigara-a-todas-las-dependencias.html, 10/07/17



mantiene el gobierno para el propósito de desarrollo social, es el más alto, sobrepasando incluso el gasto que se tiene destinado al desarrollo económico y al mismo gobierno (gasto público administrativo). Con un gasto de 2.81 billones de pesos destinados a Desarrollo Social y específicamente con 1.07 billones de pesos para personas de edad avanzada, que por cierto es el objetivo más alto dentro de todo el rubro de Protección Social.



[2]

4. A su vez, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores el INAPAM, cuenta con otros programas aplicados hacia las personas adultas mayores que aunados a otros apoyos económicos tanto locales como federales que ya mencionamos, realizan una política global encaminada hacia el mejoramiento de las condiciones de las personas de edad avanzada.

Como por ejemplo, el acceso a los Centros de Atención Integral, con los que cuenta el INAPAM, que ofrece servicios de atención médica de primer nivel; los cuales buscan apoyar a la detección, el control y el seguimiento de las enfermedades comunes y otros servicios como educación, empleo y orientación.

REGISTRO ÚNICO

1. Es importante destacar que de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social por medio del INAPAM, se cuenta con un padrón de adultos mayores registrados, para 2016 se incorporaron al padrón de beneficiarios de la tarjeta para adultos mayores un millón 410 mil personas, cifra mayor que en el 2015, cuando se

[2] "Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017", Observatorio del Gasto, Transparencia Presupuestaria, http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/infografia_ppef2017, 10/07/17.



registraron 103 mil 996.

En un año, se incorporaron 419 nuevas instituciones dedicadas a la atención y cuidado de las personas adultas mayores.

Al hacer un balance anual, de acuerdo al INAPAM menciona que su programa de afiliación ha crecido sustancialmente en todo el país, sobre todo en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Nuevo León.

2. También está como iniciativa de prioridad la creación del "Registro Único de Personas con Discapacidad", el cual sería un instrumento de mucha utilidad para las instituciones que atienden este rubro, así como hospitales y centros de cuidado y por supuesto como un medio de identificación y acceso a servicios por parte de las personas con discapacidad.

CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES SOLAS

1. Las personas adultas mayores, muchas veces se encuentran en estado de abandono y es importante que la Ley a su servicio cuente con las herramientas necesarias para proteger sus derechos y para cuidar su calidad de vida.

Muchas de estas acciones encaminadas hacia este sector vulnerable de la población, están coordinadas por medio del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF.

El DIF a nivel nacional cuenta con diversas acciones y programas encaminados a cuidar de los adultos mayores en cualquier situación que estén, no importa si se encuentran dentro de un núcleo familiar o si están totalmente en estado de abandono, el DIF ofrece desde casas de día, apoyos económicos hasta albergues temporales o definitivos.

A continuación, presentamos dos programas de atención integral para los adultos mayores por parte del DIF, publicados en su página web:

- Atención Integral a las y los Adultos Mayores Sujetos de Asistencia Social

Modalidad de Residencia: Consiste en otorgar atención integral a la persona adulta mayor dentro del Centro los 365 días del año.

Modalidad de Atención de día: Consiste en otorgar atención diurna (alimentaria, actividades recreativas, sociales y culturales, médica, psicológica y de trabajo social a la persona adulta mayor).

¿Quién puede ser beneficiario?
- Persona Mayor de 60 años o más

- Sujeta de asistencia social en desamparo, marginación o sujetos a maltrato, conforme a la Norma

- No ser portadora de enfermedades infectocontagiosas

- Aceptar y presentarse a las valoraciones social, médica y psicológica

- Expresar mediante escrito libre su deseo manifiesto de ingreso



- Funcional física y mentalmente para el desarrollo de las actividades de la vida diaria

- Si presenta alguna discapacidad que ésta les permita incorporarse a los programas de atención integral del Centro, y la vida en comunidad.

- Programa de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad

¿Quién puede ser beneficiario? Personas en estado de vulnerabilidad social: Niñas, niños y adolescentes, adultos con discapacidad y adultos mayores con enfermedades propias de su edad.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar el trámite y cuáles deben ser sus características? Se deberá presentar solicitud mediante escrito libre y firmado de apoyo directo económico temporal o apoyo directo en especie, o bien de atención especializada, mediante escrito libre y firmado.

Como se puede constatar el DIF ya cuenta con varios programas enfocados a mejorar la situación de las personas mayores, como apoyos económicos temporales, apoyos en especie, de atención especializada como consultoría jurídica, gastos funerarios y también para apoyo familiar dirigido a la reintegración.

Es por ello, que después de haber estudiado y analizando las Iniciativas propuestas, y por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se **reforman** la fracción III del artículo 4; el inciso c. de la fracción II del artículo 5; y las fracciones II y III del artículo 16; y se **adicionan** los incisos b. y c. a la fracción V del artículo 5, quedando su actual párrafo como inciso a); y la fracción IV al artículo 16, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 4o. …

I a II. …

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión**, discapacidad** o cualquier otra circunstancia;

IV. a V. …



Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. …

II. …

a. y b. …

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita**; a ser entrevistado por el juez de la causa a inicios del procedimiento a fin de que observe el estado físico y emocional del adulto mayor,** en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. **Asimismo, en los casos de adultos mayores con discapacidad o indígenas, contar con un traductor, intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas, peritos especializados en las diversas discapacidades que les garantice un debido proceso y permita un mejor acceso a la justicia.**

d. …

III. y IV. …

V. …

a. A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

b. A contar con mecanismos de protección contra cualquier forma de explotación y acoso contra las personas adultas mayores en el lugar de trabajo.

c. A recibir el mismo salario que cualquier otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada.

VI. a IX. …

Artículo 16. …

I. y II. …

II. Promover en coadyuvancia con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la suscripción de Convenios Internacionales en materia de atención a las personas adultas mayores;



III. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para acciones de atención dirigidas a las personas adultas mayores**, y**

V. Difundir las políticas y programas orientados a las personas adultas mayores.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de senadores a 7 de marzo de 2018



9. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 177, 178, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente dictamen relativo a **LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**, derivado de la Iniciativa presentada, por el Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de emitir el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el apartado de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción y turno de la minuta para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas.

II. En el apartado relativo al **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA"**, se sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio.

III. En el apartado de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

1



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

I. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En la sesión celebrada el 9 de febrero de 2017, el Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

SEGUNDO.- En la misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de referencia a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen, mediante oficio DGPL 63-II-5-2069, expediente N° 5504.

TERCERO.- El 28 de septiembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria, conoció del Dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas siendo aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular con 377 votos a favor, sin votos en contra y sin ninguna abstención. La Mesa Directiva en consecuencia, remitió el expediente relativo a este Senado para los efectos de ley.

CUARTO.- Recibida la Minuta respectiva en esta Cámara, en sesión de Pleno celebrada el 3 de octubre de 2017, se ordenó turnarla para dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, Primera con el oficio No. DGPL-1P3A.-1269.

QUINTO.- A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones, conducentes al presente dictamen.

Derivado de ese intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas instruyeron a sus respectivas Secretarías Técnicas para que se procediera a la elaboración del proyecto de dictamen.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA.

Para describir la Minuta en estudio y determinar su objeto es necesario transcribir el texto relativo al proyecto de decreto propuesto en la Iniciativa y que fue aprobado en el dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas de la colegisladora y que posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad.

PROYECTO DE DECRETO DE LA INICIATIVA PRESENTADA EL 9 DE FEBRERO DE 2017 EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LXIII LEGISLATURA.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Impulsar y coadyuvar en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

3



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La exposición de motivos de esta Iniciativa contiene las siguientes valoraciones:

El diputado promovente señala que actualmente, en México se utilizan 68 lenguas indígenas, pertenecientes a 11 familias lingüísticas y ramificadas en 364 variantes dialectales. Cada una representa una visión distinta del mundo en el que vivimos, una percepción particular sobre el cosmos, la cultura y la propia condición humana. Por su contenido simbólico, epistémico y ontológico, al ser empleadas por pueblos y comunidades las lenguas no sólo representan marcadores culturales que expresan la identidad e ideología de un grupo humano, sino que constituyen complejos sistemas de conocimiento que contribuyen con la riqueza cultural de las naciones.

En este sentido se destaca en la iniciativa que no existe sin embargo, una sola lengua desde cuya altura alcance a observarse la totalidad del mundo. Cada lengua sirve como un lente distinto a través del cual participar del mosaico de visiones, valores y tradiciones que caracterizan a nuestra especie. Por consiguiente, su desaparición no puede entenderse más que como una tragedia humanitaria, no sólo por la pérdida de la cultura de los hablantes de esa lengua (incluido el conocimiento de sus ancestros), sino por la extinción de una de expresión insustituible del conocimiento humano, una organización particular, única e irrepetible de la realidad. En ese sentido, la salvaguarda del patrimonio cultural humano implica forzosamente la preservación y promoción de las lenguas, particularmente de las minoritarias, amenazadas por su desaparición.

El diputado promovente señala que la noción de la diversidad lingüística entendida como un "problema" que hay que resolver más que como un elemento primordial del patrimonio cultural nacional se desprende de una aspiración que por más de un siglo orientó la política cultural en el México Independiente: la conjunción de todos los pueblos en torno a una sola identidad que sirviera como cimiento cultural del aún endeble proyecto nacional. Las políticas educativas asimilacionistas implementadas como resultado de esta visión lograron disuadir a miles de hablantes indígenas de conservar sus tradiciones y lenguas maternas, pues hacerlo implicaba siempre ser excluidos, víctimas de violencia y segregación social. Así pues, por décadas la política



lingüística en México se resumió a una tendencia hacia la unificación lingüística del país y la desaparición de las lenguas nativas[1] .

Asimismo, señala el legislador como podría esperarse, los esfuerzos por alienar las lenguas indígenas en favor de la hegemonía lingüística del castellano han repercutido de manera importante en la política educativa, a menudo moldeando el modelo de enseñanza utilizado durante cada uno de los periodos de gobierno en México. En la época colonial, era común que los frailes utilizaran las lenguas indígenas para educar y evangelizar a los indios; sin embargo, luego de la Independencia la educación pública en español se institucionalizó en todo el territorio. Desde entonces, la política lingüística ha cambiado de administración en administración, sin que ello haya implicado alguna vez un cuestionamiento serio sobre la preeminencia del castellano y la marginación de las lenguas indígenas en la instrucción pública.

Sería hasta 1964, luego de la sexta Asamblea Nacional de Educación, que se aprobara como base de la política educativa nacional para las regiones interculturales, la utilización de métodos bilingües con docentes bilingües, reemplazando con ello la política de castellanización directa de niños y adultos indígenas que había sido implementada hasta ese momento. Sin embargo, el nuevo planteamiento no implicó que se dejaran de determinar los contenidos de manera unilateral, dando prioridad al conocimiento occidental, ni que se dejaran de menospreciar los valores y costumbres de los pueblos indígenas[2] .

Ya en la actualidad, la educación pública se ha descentralizado a fin de dotar a las entidades de mayores atribuciones en cuanto a su diseño e implementación; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública federal sigue ejerciendo un fuerte control sobre el modelo. Hoy por hoy, el Estado mexicano imparte educación bilingüe formal únicamente en localidades indígenas, cuya coordinación corre a cargo de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI). Sin embargo, el organismo cuenta con presupuestos exiguos para el cumplimiento de sus objetivos y sus nombramientos a menudo dependen de afinidades políticas. Esto ha impedido que



la dependencia sea capaz de preservar y fomentar con éxito el uso de las lenguas indígenas.

Con todo, los beneficios de la enseñanza de lenguas indígenas no son exclusivos del ámbito de la promoción cultural. Para cualquier educando, el aprendizaje de un idioma distinto al suyo conlleva también efectos positivos para su desarrollo académico, personal e intelectual. Diversos estudios han señalado que cuando los estudiantes aprenden otro idioma muestran mayor sensibilidad para entender su propia lengua, aprenden con mayor rapidez y desarrollan habilidades para comunicarse más eficazmente. Son proclives a mejorar en el desempeño de sus capacidades lectoras y de lidiar mejor con las distracciones, así como de retener y procesar mejor la información. Además, amplían su vocabulario en su lengua materna, haciéndoles más fácil aprender en contextos institucionalizados debido a la expansión de su conciencia lingüística. Finalmente, el conocimiento de una nueva lengua conduce al desarrollo de la flexibilidad cognitiva y la creatividad y favorece el mejoramiento de las habilidades de razonamiento analógico y pensamiento divergentes[3] . Así pues, el aprendizaje de otras lenguas ayuda a cualquier estudiante a expandir sus horizontes y a estar dentro y fuera de la propia cultura, revitalizándola a través de la comparación y el contraste.

De hecho, uno de los hallazgos mejor consolidados de la investigación educativa sugiere que cuando son bien implementados, los programas bilingües pueden estimular las capacidades cognitivas de los estudiantes sin efectos contraproducentes en el manejo de su primer idioma. Cuando los estudiantes aprenden una lengua distinta a la suya, no sólo están aprendiendo un nuevo idioma en el estricto sentido de la palabra sino que también están accediendo a nuevos conceptos y habilidades que son igualmente relevantes para su desarrollo intelectual[4] .

Por lo anterior, debe corresponder al Estado mexicano, a través de sus instituciones y distintos órganos gobierno, garantizar la existencia y oferta en la educación pública, tanto a nivel básico, como medio superior y superior, de cursos y programas de estudio dedicados a la enseñanza de lenguas maternas. Esto serviría para



fomentar valores y capacidades interculturales entre los estudiantes, sin menoscabo de su rendimiento en otras áreas del conocimiento, pues ha quedado demostrado que el bilingüismo tiene efectos positivos en el desarrollo social, intelectual y lingüístico de los educandos. Aprender un nuevo idioma, en paralelo al curso de sus asignaturas, permitiría a niños, jóvenes y adultos alcanzar un conocimiento profundo sobre su propio lenguaje y fortalecer el desarrollo de sus habilidades para organizar y aprehender la realidad.

Asimismo, fomentar el aprendizaje de lenguas indígenas serviría para generar las condiciones necesarias para la promoción del diálogo intercultural y el respeto y reproducción de los idiomas nativos. Cuando la educación formal se enriquece con este tipo de experiencias, es capaz de convertirse en elemento clave para la defensa y promoción de la diversidad lingüística y cultural de una nación, al mismo tiempo que contribuye a la consolidación de una sociedad armoniosa e incluyente. Las lenguas indígenas deben dejar de ser relegadas a la oralidad y los espacios informales y en cambio, ser parte sustantiva de la educación formal de todas y todos los mexicanos.

Para evitar el riesgo de parálisis cultural ante el agitado tránsito de los tiempos modernos, así como para frenar el desuso y eventual decadencia de lenguas indígenas minoritarias, las escuelas deben convertirse en espacios vivos y proactivos, donde se respete y honre la riqueza cultural y lingüística de nuestro país y en donde el aprendizaje de una lengua indígena se conciba sólo como una experiencia enriquecedora. Ello requiere la creación e implementación de una verdadera educación intercultural bilingüe que afirme las identidades de los estudiantes y favorezca la integración de las culturas de todos quienes integran el aula[6] .

Desperdiciar la riqueza lingüística de una nación al desalentar el uso o promover prejuicios respecto al uso de las lenguas maternas simplemente va en contra de los intereses nacionales y además representa una violación a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, el reto consiste en encauzar la inevitable evolución de la identidad nacional de tal suerte que el ejercicio de los



derechos de las personas sea garantizado mientras que los recursos culturales, lingüísticos y económicos de nuestra nación sean maximizados.

Bajo tales premisas, y de conformidad con lo que establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. constitucional, concerniente a las obligaciones de la federación, los estados y los municipios en materia de garantía de los derechos y desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas:

> "...Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos (...) Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación."

Del apartado c) de la fracción II del artículo 3o. constitucional, respecto los criterios que orientarán la educación pública:

> "Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural..."

Y de lo señalado en las fracciones IV y VI Bis del artículo 7o. de la Ley General de Educación:

> "IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
>
> ...
>
> VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de la inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural"

El diputado Santiago Rodríguez señala que, la presente iniciativa buscar hacer de competencia concurrente de las autoridades educativas federales y locales la creación, ampliación, promoción e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, respetando



la diversidad lingüística que caracteriza a cada región y velando permanentemente por la transmisión y reconocimiento de las lenguas maternas, incluido el rico bagaje de conocimientos históricos, cosmológicos, ecológicos, sociológicos, espirituales, etcétera, del que están siempre embebidas.

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 13 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Impulsar y coadyuvar en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.

VIII. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, en el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Colegisladora se destaca el análisis realizado sobre la procedencia de la Iniciativa en cuestión.

Ahora bien, respecto al análisis del fondo de la Iniciativa, la Comisión de la Colegisladora señala que coincide con el diputado promovente, en que la enseñanza de lenguas indígenas tendría el efecto de revalorar las lenguas indígenas que se



hablan en México, preservar y enriquecer nuestra diversidad cultural, así como establecer las bases para que esas lenguas adquieran funcionalidades específicas.

Asimismo, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados considera que la reforma que se plantea en su dictamen, está en concordancia con el Artículo 2° Constitucional, Apartado A, fracción IV, donde se establece que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

> IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Del mismo modo, los integrantes de dicha comisión consideran que la propia Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas persigue objetivos congruentes con la propuesta de la iniciativa objeto del dictamen.

Siguiendo con el análisis y en congruencia con los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por México, es que la Dictaminadora coincide que la propuesta que realiza el Diputado proponente cumpliría lo establecido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar, acciones coordinadas y sistemáticas para proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad; y tomar medidas necesarias para asegurar que los individuos de los pueblos indígenas tengan la oportunidad de leer ye escribir en su lengua materna, o la de su comunidad y la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país.

Ahora bien, la dictaminadora continuando con el estudio de la iniciativa señala, que la diversidad cultural y lingüística de México se refleja en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, que consigna 11 familias lingüísticas, de las que derivan 67 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias; y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Este catálogo contiene información que será útil para el diseño, aplicación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la población hablante de lengua indígena, en particular para las acciones que el gobierno emprenda haciendo uso de la lenguas indígenas respectivas y para que los tres órdenes de gobierno adecuen las referencias a las lenguas indígenas nacionales.

Bajo estos términos, la dictaminadora de la colegisladora considera que se tiene una base mínima de información, con la cual se puede trabajar para impulsar acciones a favor de promover la enseñanza de las lenguas indígenas.

Ahora bien, también considera pertinente establecer que la propuesta del diputado promovente de establecer la enseñanza **de** lenguas indígenas, es de naturaleza distinta a la enseñanza **en** lenguas indígenas. Porque la enseñanza **en** lenguas indígenas subyace al sistema de educación indígena que implementa la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las entidades federativas.

Al respecto, señala que con base en lo que mandata la Constitución en sus artículos 2° y 3°, así como la Ley General de Educación, las niñas, niños y adolescentes indígenas tienen derecho a una educación intercultural, con maestros que conocen sus lenguas y sus culturas, con materiales didácticos adaptados a sus lenguas, etcétera. Si bien la educación indígena presenta múltiples rezagos, para efectos del presente dictamen podemos establecer que esta educación engloba lo que es la enseñanza en lenguas indígenas.

En este orden de ideas, es evidente que la iniciativa del diputado promovente plantea la enseñanza de lenguas indígenas. Es decir, que se enseñen en las escuelas públicas las lenguas, maya, náhuatl, zapoteca rarámuri, ñañú, etcétera.

Es por ello que la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados consideró que la iniciativa del diputado Santiago Rodríguez era de aprobarse aunque con modificaciones.

Dicha modificación consiste en eliminar la mención de "programas de enseñanza", así como la alusión a "las escuelas públicas de nivel básico, media superior y



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

superior". Esto, porque tales acciones y niveles educativos corresponden al ámbito que se regula en la Ley General de Educación.

En este sentido, la comisión dictaminadora recibió opinión de la Secretaría de Cultura respecto a la viabilidad de la iniciativa en comento, donde establece que, al hablar de programas de enseñanza y niveles educativos, no procedía reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, sino la Ley General de Educación.

Por ello, la dictaminadora estimó conveniente mantener lo que establece la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, adicionando el tema de la enseñanza de lenguas indígenas, para que quede de la siguiente forma:

TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	TEXTO DICTAMEN
ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes: I. a VI. ... VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias; VIII. a XVI. ...	**ARTÍCULO 13.** Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes: I. a VI. ... VII. **Impulsar y coadyuvar en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.** VIII. a XVI. ...	**ARTÍCULO 13.** Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes: I. a VI. ... VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias; **así como, promover su enseñanza.** VIII. a XVI. ...



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Ahora bien, en el dictamen de la colegisladora se señala que de esta forma, se preserva el objetivo esencial de la iniciativa, que es el de la enseñanza de lenguas indígenas. Como se puede observar, la fracción VII del artículo 13 establece una acción fundamental para hacer posible la enseñanza de lenguas indígenas, que es la de impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias; esta actividad proporciona la base teórica, metodológica y conceptual que permitiría la enseñanza de lenguas indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXIII legislatura sometió a la consideración de la H. Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Artículo Único. - Se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias; **así como, promover su enseñanza.**

VIII. a XV. ...

13



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

TRANSITORIO

Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El proponente se encuentra plenamente legitimado para presentar la iniciativa en estudio, habida cuenta de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- Quienes integramos estas Comisiones unidas coincidimos plenamente en la intención del Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de impulsar que la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país. Así mismo, consideramos pertinentes las modificaciones propuestas por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con la intención de soló incluir en la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la promoción de la enseñanza de dichas lenguas.

TERCERA.- En este sentido, es de destacar que el objeto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, señalado en su artículo 1°, es el desarrollo de las lenguas indígenas, que a la letra dice:

ARTÍCULO 1. *La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.*

Asimismo, el artículo 5° en el cual se establece que el estado a través de sus tres órdenes de gobierno reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas, que a la letra dice:

ARTÍCULO 5. *El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.*

14



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

En este sentido, es necesario señalar que la promoción de la enseñanza de las lenguas indígenas desde el ámbito educativo, permite la armonización con los instrumentos internacionales que México ha suscrito, como es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, donde se establece la responsabilidad de los gobiernos de tomar medidas necesarias para asegurar que los individuos de los pueblos indígenas tengan oportunidad de leer y escribir en su lengua materna, o la de su comunidad.

CUARTA.- Ahora bien, la enseñanza de lenguas indígenas que planteó el diputado promovente en su iniciativa y así como el dictamen de la misma presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Colegisladora, fortalecerá el contenido y aplicación de las normas de escritura para la lengua Maya y norma de escritura de la lengua Hñähñu (otomí), porque propicia la generación de conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural del país, a fin de que con la escritura unificada se facilite la enseñanza de la lengua, cuyo aviso de publicación fue el 10 de octubre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación.

QUINTA.- En términos de lo expuesto, estas Comisiones Unidas coincidimos con el objeto de la presente Minuta proyecto de Decreto que reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ya que, a través de la promoción de la enseñanza de las lenguas indígenas se fortalecen, preservan y se desarrollan las misma. Asimismo se logra la armonización entre la legislación nacional e internacional, en el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos de las personas, comunidades y pueblos indígenas.

Por tanto, estas Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188, 222 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la discusión, votación y, en su caso, aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente:

15



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Artículo Único. - Se reforma la fracción VII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Impulsar políticas de investigación, difusión, estudios y documentación sobre las lenguas indígenas nacionales y sus expresiones literarias; **así como, promover su enseñanza.**

VIII. a XV. ...

TRANSITORIO

Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

16



COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
8ª. REUNIÓN ORDINARIA
13 DE DICIEMBRE DE 2017, 10:00 HORAS
SALA 7, PLANTA BAJA DEL HEMICICLO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVO, PRIMERA DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Votaciones a favor

SEN. JORGE TOLEDO LUIS
PRESIDENTE

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA
SECRETARIA

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ
SECRETARIO

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA
INTEGRANTE

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA RELATIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo
Presidenta





Sen. Jose Marco Antonio Olvera Acevedo
Secretario

Sen. Zoe Robledo Aburto
Secretario





Sen. Enrique Burgos García
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán
Integrante



10. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos 142 y 153 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, mediante oficio No. CP2R2A.-5417, de fecha 16 de agosto de 2017, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se dictamina, estas Comisiones, con base en las facultades que les confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente dictamen.

Página **1** de **17**



En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de está H. Cámara de Senadores, realizan el análisis técnico y jurídico pormenorizado de las reformas y adiciones propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.

ANTECEDENTES

1.- En sesión plenaria celebrada el dia 16 de agosto de 2017, la Senadora Cristina Diaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la República turnó dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente:

CONTENIDO



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina tiene como finalidad reformar la fracción II del artículo 86 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR); así como los artículos 142 y 153, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), a fin de incluir durante la importación de residuos peligrosos u otros desechos, la obligación de considerar y cumplir los fines, restricciones y condiciones previstas en los tratados internacionales en materia de movimientos transfronterizos de los que México es parte.

La Legisladora promovente señala que existen diversos instrumentos internacionales que actualmente prevén mejores formas de gestionar algunas sustancias, materiales y residuos peligrosos por la constante participación de la comunidad internacionales que han impulsado su evolución. Consecuentemente, la Senadora que promueve estima importante atender durante la aplicación de la legislación ambiental mexicana las diversas disposiciones que existen en el marco jurídico internacional en materia de movimiento de residuos peligrosos, y de esta manera, nuestro país esté en la posibilidad de aplicar los criterios y obligaciones que se han desarrollado recientemente bajo el marco de los tratados internacionales de los que México es parte, en lo referente a la óptima valorización de residuos peligrosos para facilitar su reúso, reciclaje y otros manejos.

En este sentido, la Senadora promovente estima que estas propuestas de reforma, al establecer de manera explícita la obligación de cumplir con los fines y obligaciones establecidos en los tratados internacionales en materia de movimientos trasfronterizos, permitirán armonizar el marco jurídico de nuestro país con el marco internacional en materia de movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos, y con ello se evitará que pueda existir algún conflicto respecto a la aplicación jerárquica de los instrumentos legales nacionales e internacionales.



Asimismo, la que promueve estima que esta Iniciativa contribuirá a brindar una solución ambiental y social a la problemática que afecta a nuestro país y a la comunidad internacionall por la inadecuada importación de residuos peligrosos, que debe ser atendida de forma conjunta.

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y de otros desechos entre los diversos países constituye un tema de gran relevancia en la agenda internacional, el cual ha derivado en la construcción de una sólida regulación internacional que establece diversas directrices sobre el manejo y gestión de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos o de otros residuos que proceden de la zona jurisdiccional de un país y se destina a la zona de otro país, o bien, pasa a través de esta zona.

El despertar de la conciencia ambiental y el desarrollo de legislaciones ambientales más estrictas en países industrializados, en la década de los 70´s y los 80´s provocaron el aumento de la resistencia pública contra la eliminación de los desechos peligrosos y un incremento en los costos de su eliminación.[1] Esto condujo a que algunos empresarios buscaran opciones más económicas para la eliminación de los desechos peligrosos y comenzaron a enviarlos a países de Europa Oriental y del mundo en desarrollo, lugares que tenían una legislación ambiental menos estricta y desarrollada, en comparación de los países en los que residían.[2]

---

[1] ONU (2011). *Convenio de Basilea sobre el control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.* Katharina Kummer Peiry. Disponible en: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/bcctmhwd/bcctmhwd_s.pdf (Consultada en octubre de 2017).
[2] *Ídem.*



Esto culminó en una gran indignación internacional tras el descubrimiento de depósitos de desechos tóxicos que fueron importados de otros países hacia África y en otras partes del mundo en desarrollo. Como consecuencia, el tema del transporte internacional de desechos peligrosos en general y del tráfico transfronterizo ilegal de dichos desechos en particular, fue ganando impulso, y en 1988 se comenzaron a desarrollar y utilizar instrumentos legales más estrictos para regular el movimiento transfronterizo. La gestión de los desechos peligrosos fue abordada en el primer Programa de Montevideo sobre derecho ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1981.

El primer esfuerzo internacional para regular los residuos peligrosos fue en 1989 a través de la adopción del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación (El Convenio de Basilea). Este Convenio tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos de los desechos peligrosos. [3] Asimismo, el alcance de este instrumento internacional abarca una serie de desechos definidos como "desechos peligrosos", en función de su origen y/o composición y de sus características (artículo 1 y anexos I, III, VIII y IX), así como dos tipos de desechos definidos como "otros desechos" (desechos recogidos de los hogares y residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares; artículo 1 y anexo II).

Por otro lado, las disposiciones del Convenio de Basilea tienen como objetivos fundamentales: i) reducir la generación de desechos peligrosos y fomentar el manejo ambientalmente razonable de estos desechos, cualquiera que sea su lugar de eliminación; ii) restringir los movimientos transfronterizos de los desechos

[3] *Ibidem.*



peligrosos, excepto cuando se estime que se realizan de acuerdo con los principios del manejo ambiental racional; e iii) instaurar un sistema regulador para los casos en los que se pueden permitir los movimientos transfronterizos. [4]

Además, el movimiento trasfronterizo de residuos se regulan por las directrices que fueron emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) durante los años ochenta y representaron una contribución al desarrollo sostenible. En 1974 el Comité de Medio Ambiente de la OCDE creó el Grupo de Política de Gestión de Residuos para considerar, desarrollar y promulgar instrumentos internacionales de política para regular la gestión de residuos peligrosos.[5] Este grupo de trabajo adoptó ocho Decisiones/Recomendaciones, las cuales formaron parte de las bases del Convenio de Basilea, y contribuyeron a la adopción de varias Directivas europeas sobre identificación, definición y control de residuos.[6]

Desde abril de 1992 se comenzó a supervisar y controlar los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros desechos en la operación de recuperación de residuos entre países miembros de la OCDE, a través de un Sistema de Control que fue establecida por la Decisión C(2002)107(Final), la cual está dirigida a facilitar el comercio de materiales reciclables de una manera ambientalmente racional y económicamente eficiente mediante un procedimiento simplificado y un enfoque basado en el riesgo para evaluar el nivel necesario de control de los materiales.[7]

---

[4] *Ídem.*
[5] *Ibídem.*
[6] *Ídem.*
[7] OECD. *The OECD Control System for waste recovery.* Disponible en: http://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm (Consultada en octubre de 2017).



En el caso del gobierno mexicano, desde 1986 cuando adoptó las Decisiones de la OCDE, así como, el Anexo III del Convenio de La Paz, el 12 de noviembre de 1986, en Washington, D.C., con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Posteriormente, se ratificó el Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y su Disposición, el 4 de septiembre de 1990.

Igualmente, los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos en México son regulados en distintos ordenamientos nacionales como la LGEEPA, LGPGIR, el Reglamento de la LGPGIR en materia de Residuos Peligrosos, Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Norma-052-SEMARNAT-2005 y "el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la SEMARNAT", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2007.[8]

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) está facultada para intervenir, en coordinación con las autoridades aduaneras, en los recintos fiscales y fiscalizados, puertos marítimos y aéreos, terminales ferroviarias y, en general, en cualquier parte del territorio nacional, con el objeto de controlar los residuos peligrosos importados o a exportarse, así como para dictar y aplicar las medidas de seguridad que correspondan, tendentes a evitar la contaminación del ambiente y el deterioro de los ecosistemas.[9]

---

[8] SEMARNAT. *Guía para la importación y exportación de residuos en México*. Disponible en: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/guia_Import_Export_RP.pdf (Consultada en octubre de 2017).

[9] Artículo 153, fracción I de la LGEEPA y 107 del R-LGPGIR.



En la sustanciación de estos trámites ante la SEMARNAT para obtener la autorización para la importación de los residuos peligrosos y otros desechos, así como para presentar los avisos correspondientes, la legislación ambiental establece los distintos requisitos y obligaciones que se deberán cumplir. Sin embargo, actualmente también es necesario dar cumplimiento a las obligaciones reguladas en los tratados internacionales en materia de movimientos transfronterizos de los que México sea parte.

Consecuente, las que dictaminan estiman viable la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone detallar en los diversos preceptos legales de la LGEEPA y de la LGPGIR la obligación de cumplir con los tratados internacionales en materia de movimientos transfronterizos durante la importación de los residuos peligrosos, a fin de armonizar el marco jurídico de nuestro país con el marco internacional.

SEGUNDO.- Ahora bien, en la Iniciativa que se dictamina se propone reformar los artículos 86 de la LGPGIR y de los artículos 142 y 153 de la LGEEPA para realizar las siguientes modificaciones:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 86.- En la importación de residuos peligrosos se deberán observar las siguientes disposiciones:

I. Sólo se permitirá con el fin de reutilizar o reciclar los residuos; **o bien, para hacer posible el cumplimiento de los fines previstos en los**



tratados internacionales vigentes, conforme a los términos previstos en el respectivo acuerdo internacional;

II. ...

III. ...

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. **Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje o aquellos otros fines previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.** Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

ARTÍCULO 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:

I.



> II.- Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reúso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; **o bien, para dar cumplimiento a los fines previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.**

1.- En la Iniciativa que se dictamina, se propone modificar la fracción II del artículo 86 de la LGPGIR y la fracción II del artículo 153 de la LGEEPA, con el fin de establecer que únicamente se podrá autorizar la importación de los residuos peligrosos y otros desechos, para la reutilización o reciclaje de los residuos —que actualmente se encuentra previsto en dicha fracción—, y se incluye como uno de los objetivos para otorgar las importaciones el dar cumplimiento a los fines previstos en los tratados internacionales.

No obstante, de la manera en que está redactada esta propuesta se entiende que sólo se permitirá la importación de residuos peligrosos con la finalidad de hacer posible el cumplimiento de los fines previstos en los tratados internacionales vigentes, lo cual resulta inviable pues de la lectura que se haga al artículo 86, fracción I de la LGPGIR regula las actividades para las cuales se permitirá la importación de residuos peligrosos, en la que únicamente se permite la reutilización y reciclaje de residuos peligrosos, cuando su utilización se realice conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes[10]

[10] Artículo 153, fracción II de la LGEEPA y 86, fracción I de la LGPGIR



En este sentido, se estima inviable incluir en este artículo "el dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de movimientos trasfronterizos" como uno de los supuestos en los que se permite la importación de residuos peligrosos, toda vez que estos instrumentos internacionales establecen diversas obligaciones que no necesariamente están relacionadas con los supuestos para los cuales se permitirá la importación de los residuos sino involucran diversas cuestiones. Consecuentemente, estas Comisiones Unidas coinciden con el espíritu de esta propuesta, por lo cual estiman necesario modificar la redacción propuesta para señalar que también se podrá autorizar la importación de residuos peligrosos para los fines que establecen los tratados internacionales de los que México es parte.

Estas Comisiones Unidas estiman procedente el incluir como supuestos para los cuales se podrá autorizar la importación de los residuos peligrosos, aquellos que se establecen en los tratados internacionales toda vez que no contravienen en ninguna cuestiones los ordenamientos ambientales nacionales, además de que estos instrumentos internacionales conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados resultan obligatorios para el Estado mexicano.

Para mayor abundamiento, las que dictaminan se permiten detallar brevemente las distintas obligaciones y prohibiciones en materia de importación de residuos peligrosos que regula nuestro ordenamiento ambiental. Al respecto, la LGEEPA prohibe la importación de materiales o residuos cuyo único objeto sea su disposición final o simple depósito, derrame, confinamiento, almacenamiento, incineración o en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción o cuando su uso o fabricación no esté permitido en el país en que se



hubiere elaborado.[11] Igualmente, la LGPGIR prohíbe la importación de residuos que sean o estén constituidos por compuestos orgánicos persistentes.[12]

Además, la LGEEPA prohíbe el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fueron elaborados, o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá autorizarse el tránsito de tales materiales o residuos peligrosos, cuando provengan del extranjero para ser destinados a un tercer país.[13] Igualmente, se podrá autorizar el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, cuando exista previo consentimiento del otro país a la que se va a destinar estos residuos no peligrosos. Por otro lado, la SEMARNAT puede imponer limitaciones a la importación de estos residuos cuando desincentive o constituya un obstáculo para la reutilización o reciclaje de los residuos generados en territorio nacional.[14]

Ahora bien, los tratados internacionales regulan algunos supuestos en los cuales se permite la importación de residuos peligrosos, además de la reutilización y reciclaje de estos residuos, y que igualmente resultan aplicables en la importación de residuos peligrosos al territorio nacional, al ser el Estado mexicano parte de estos instrumentos internacionales.

El Convenio de Basilea establece la obligación de los Estados de tomar las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos y asegurar su manejo ambientalmente racional; así como impedir la

[11] Artículo 142 y 153, fracción III de la LGEEPA
[12] Artículo 86, fracción II de la LGPGIR
[13] Artículo 153, fracción IV de la LGEEPA
[14] Artículo 86, fracción III de la LGPGIR



importación de desechos peligrosos y otros desechos si tienen razones para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional. Igualmente, exige que los desechos peligrosos y otros desechos que sean objeto de un movimiento transfronterizo, se embalen, etiqueten y transporten de conformidad con los reglamentos y normas internacionales generalmente aceptados y reconocidos en materia de embalaje, etiquetado y transporte y teniendo debidamente en cuenta los usos internacionalmente admitidos al respecto;

Respecto a lo anterior, estas Comisiones Unidas estiman, como lo sostiene la Senadora promovente, que los tratados internacionales establecen una serie de disposiciones en materia de importación de los residuos peligrosos que regulan de manera más detallada alguna obligaciones y supuestos en los cuales se podrán realizar estos, y los cuales no contravienen lo dispuesto en la legislación nacional.

Por lo cual, las que dictaminan coinciden con la Legisladora promovente en la necesidad de incluir como uno de los supuestos para que se autorice la importación de los residuos peligrosos u otros desechos, el que se trate de alguno de los supuestos o fines que establecen los tratados internacionales de los que México es parte.

A la luz de lo anterior, estas Comisiones Unidas consideran pertinente modificar la redacción de los artículos 86 de la LGPGIR y 142 y 153 de la LGEEPA para quedar como sigue:

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS



Artículo 86.- En la importación de residuos peligrosos se deberán observar las siguientes disposiciones:

I. Sólo se permitirá con el fin de reutilizar o reciclar los residuos **o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;**

II. ...

III. ...

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. **Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.** Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

ARTÍCULO 153.- La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las restricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Comercio Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:



I.

II.- Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reúso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; o bien **para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.**

2.- Ahora bien, en la Iniciativa que se dictamina se propone la modificación del artículo 142 de la LGEEPA, a fin de eliminar "la destrucción de los residuos peligroso y otros desechos", como una de las actividades para las que están prohibidas la importación de estos residuos y desechos. Igualmente, se propone incluir un párrafo a través del cual se permite la importación de residuos con la finalidad de reutilizarlos o aquellos fines previstos en los tratados internacionales de los que México es parte.

Al respecto, estas Comisiones coinciden con la modificación que propone eliminar "el tratamiento de los residuos peligrosos y otros residuos para su destrucción" como una de las prohibiciones para su importación, en virtud de que el artículo 42 de la LGEEPA también incluye a la incineración como una de las actividades para las que está prohibida la importación de residuos, la cual del análisis que se haga a su propia definición incluye o implica la destrucción de estos residuos.

El artículo 5o., fracción XIII de la LGPGIR define a la incineración como: *Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, como la temperatura, el tiempo*



de retención y la turbulencia, pueden ser controlados, a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales previamente establecidos.

Las que dictaminan estiman que la incineración involucra la destrucción de los residuos peligrosos y otros desechos, pues en este proceso pues este proceso tiene como objetivo descomponer o cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o gaseoso. Por lo cual, las que dictaminan coinciden con la Senadora promovente en que resulta innecesario incluir la destrucción de los residuos peligrosos como una de las actividades para las cuales está prohibida su importación.

A la luz de lo anteriormente expuesto, las Comisiones que dictaminan someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 142 Y 153, FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del artículo 86 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 86.- ...



I. Sólo se permitirá con el fin de reutilizar o reciclar los residuos; **o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos;**

II. a III. ...

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los articulos 142 y 153, fracción II de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. **Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje; o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.** Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

ARTÍCULO 153.- ...

I. ...

II.- Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su tratamiento, reciclaje o reúso, cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; **o bien, para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el**



Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos.

III. a VIII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal llevará a cabo las modificaciones al Reglamento en la materia para adecuarlo a los términos de la presente reforma en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

	A favor	En contra	Abstención
Sen. Ninfa Salinas Sada Presidenta			
Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz Secretario			
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván Secretaria			
Sen. Hilda Ceballos Llerenas Integrante			
Sen. Ernesto Gándara Camou Integrante			
Sen. Aarón Irízar López Integrante			
Sen. Jesús Casillas Romero Integrante			
Sen. Fernando Torres Graciano Integrante			
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro Integrante			
Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal Integrante			

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lista de Asistencia

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda

Sala de protocolo de Mesa Directiva

Senado de la República

12 de diciembre de 2017

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presidenta	Senador (a)	Entidad	GP	Firma
	Ninfa Salinas Sada	Lista Nacional		

Secretarios	Senador (a)	Entidad	GP	Firma
	Raúl Aarón Pozos Lanz	Campeche		
	Silvia Guadalupe Garza Galván	Coahuila		



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lista de Asistencia

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda
Sala de protocolo de Mesa Directiva
Senado de la República
12 de diciembre de 2017

Integrantes	Senador	Entidad	GP	Firma
	Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro	Baja California Sur	PAN	
	Fernando Torres Graciano	Guanajuato	PAN	
	Ernesto Gándara Camou	Sonora	PRI	

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lista de Asistencia

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda

Sala de protocolo de Mesa Directiva
Senado de la República
12 de diciembre de 2017

Integrantes	Senador (a)	Entidad	GP	Firma
	**Aarón Irizar López**	Sinaloa	PRD	
	**Jesús Casillas Romero**	Jalisco	PRD	
	**Hilda Ceballos Llerenas**	Colima	PRD	



Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Lista de Asistencia

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Segunda

Sala de protocolo de Mesa Directiva
Senado de la República
12 de diciembre de 2017

Fernando Enrique Mayans Canabal

Tabasco

PRD



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE



Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo
Presidenta





Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo
Secretario

Sen. Zoe Robledo Aburto
Secretario





Sen. Enrique Burgos García
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán
Integrante



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
4 DE ABRIL DE 2018
REGISTRO DE ASISTENCIA
SALA 7, PB HEMICICLO
10:00HRS

	**SENADORA LAURA GUADALUPE HERRERA GUAJARDO PRESIDENTA**	
	**SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO SECRETARIO**	
	**SENADOR JOSÉ MARCO ANTONIO OLVERA ACEVEDO SECRETARIO**	
	**SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA INTEGRANTE**	
	**SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN INTEGRANTE**	



SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIII LEGISLATURA

RECIBIDO
Presidencia de la Mesa Directiva
SECRETARÍA TÉCNICA
2018 ABR 12 AM 11 25
2018 ABR 12 AM 11 22
CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
H. CÁMARA DE SENADORES
0003183
006744

Ciudad de México a 12 de abril de 2018.

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA CÁMARA DE SENADORES
PRESENTE.

Estimado Senador Cordero:

Los que suscriben, Senadoras Ninfa Clara Salinas Sada y Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Presidentas de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera respectivamente, hacemos de su conocimiento la modificación al texto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera, que contiene la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual se propone con el objeto de que sea incorporadas en el cuerpo del mismo, con el objeto de que sea puesto a consideración de la Asamblea:

Dice	Debe decir
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente	
ARTÍCULO 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. **Sólo se permitirá la**	Artículo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración **o cualquier otro tratamiento para su eliminación** o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en



importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje; o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.	las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin de su reutilización, reciclaje; o para los fines previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, conforme a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos. Las autorizaciones para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta.

Agradeciendo de antemano su atención, le enviamos un cordial saludo

ATENTAMENTE

SEN. NINFA CLARA SALINAS SADA

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEN. LAURA GUADALUPE HERRERA GUAJARDO

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA



11. De las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la siguiente:

Minuta con Proyecto Decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Una vez recibida por las Comisiones Unidas, sus integrantes iniciaron su estudio con la convicción de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar sus fundamentos en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 222 y 226 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:



METODOLOGÍA

I. En el apartado "**ANTECEDENTES",** se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción de los turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Minuta.

II. En el apartado **"CONTENIDO DE LA MINUTA"**, se sintetizan los términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la o las componen.

III. En el apartado **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas, expresan sus argumentos y razonamientos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan su determinación final.

I. ANTECEDENTES

1. El 28 de abril de 2017 la Diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, presentó ante la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



2. En la misma fecha la Mesa Directiva de dicha Cámara, dispuso turnar la iniciativa a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el dictamen correspondiente.

3. El 12 de diciembre de 2017, la Comisión de Igualdad de Género de la Colegisladora, presentó ante el pleno el dictamen correspondiente a la Minuta en comento, el cual fue aprobado el mismo día.

4. Con fecha 15 de febrero de 2018, la Cámara de Diputados turna con oficio D.G.P.L. 63-II-6-2985 a la Cámara de Senadores la Minuta motivo del presente análisis.

5. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con oficio No. DGPL-2P3A.-913, del 20 de febrero de 2018, turna a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Primera para que se dictamine; la Comisión para la Igualdad de Género la recibe el 21 de febrero de 2018.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

1. Las Comisiones Dictaminadoras coinciden en las consideraciones sustentadas y fundamentadas en el marco internacional como en el marco nacional, tanto de la iniciativa como del dictamen de la colegisladora, por lo que no se citan en virtud de ya haberlas estudiado y analizado.



2. La colegisladora pretende incluir un apartado que se refiera al acoso sexual en todos los ámbitos de la sociedad, de igual manera el hostigamiento, que también las agresiones verbales, físicas o simbólicas, no consensuadas en la calle comprenden un tipo de violencia que deber sancionado es imperante para el entendimiento integral del problema general de violencia contra las mujeres que hay en nuestro país y la eventual erradicación de ésta.

3. Comentan que a pesar del esfuerzo que ha emprendido el Estado mexicano para erradicar cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, aún persiste esta cultura androcéntrica y machista que promueve de forma natural, los actos de violencia y discriminación hacia las mujeres, ello tiene como resultado una limitación de facto a los derechos humanos de las mujeres, que además restringe las oportunidades para un libre desarrollo psicosocial de la mujer en todos los ámbitos de la vida.

4. Coinciden con el sentido de la proponente, en que es a través de la intervención del Estado que se garantiza el acceso de las mujeres a contextos libres de violencia, por lo que dicho ente está obligado a garantizar que sus agentes actúen con la debida diligencia.

5. Señalan que el acoso sexual es una forma de violencia que actualmente se encuentra legislada dentro de nuestro marco jurídico a nivel federal pero que presenta áreas de oportunidad que articulen de mejor



forma su funcionamiento, razón de lo anterior es que las víctimas de éste se encuentran en un estado de indefensión frente a cualquier acción de terceros que violenten sus derechos humanos, por ello, recurren a los Centros de Justicia para las Mujeres, organismos de Derechos Humanos estatales o federales e Institutos de las Mujeres en las entidades federativas, etc., para que les brinden alternativas legales psicológicas y de empoderamiento social y económico.

El acoso y hostigamiento sexual, es una conducta que tiene una fijación cultural dentro de la ideología del mexicano, ya que se le considera una conducta socialmente aceptada y, en su caso, deseable para aquellas personas a quien se dirige, sin embargo, diversos estudios han demostrado que las personas objeto de acoso, en cualquiera de sus formas o expresiones, sufren un impacto negativo en su autoestima, salud psicológica y emocional la que puede generar en problemas de depresión, ansiedad, tristeza, soledad, cambios en los patrones alimentarios y de sueño y , en el peor de los casos, suicidio.

Indican que de forma cotidiana el acoso se presenta en perjuicio de las mujeres, ya que es esta parte de la población a quien le es dirigida dicha conducta, puede realizarse a través del lenguaje, gestos o amenazas, al hablar de acoso sexual no se tiene en cuenta el género, estatus u orientación sexual del autor/víctima, por lo que no es exclusivamente en perjuicio de las mujeres, sin embargo, son ellas quienes lo sufren en mayor medida e intensidad.



Resaltan que en los últimos años esta conducta ha recibido un reconocimiento como actividad socialmente reprobable y con consecuencias sociales negativas para aquel o aquella que la realice, se presenta una mayor incidencia en lugares públicos o de acceso público, así como en el transporte público, pero, como ya se dijo, jurídicamente no tiene consecuencias o sanción alguna, razón de ello es que se tiene la visión de que es una conducta que se realiza sin ameritar ningún tipo de sanción; es un delito tipificado en todas las entidades federativas, pero no así a nivel federal, ya que el Código Penal Federal es omiso en tipificar dicha conducta; lo que propone esta reforma es integrarla dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por ser una conducta que afecta en su totalidad a las mujeres y como se ha señalado, es consecuencia de una percepción social que normaliza cualquier tipo de acoso u hostigamiento que se realice en contra de las mujeres por el simple hecho de serlo. Hacen notar que ambas figuras ya se encuentran contempladas dentro del propio ordenamiento, específicamente en el artículo 13 y por cuestiones de técnica legislativa, consideran pertinente y adecuado tomar las aportaciones y enriquecer el texto que actualmente se encuentra vigente.

6. Mencionan que el CPF tiene un ámbito de aplicación restringido, funge como la norma marco para las entidades federativas, las directrices



que contiene son la estructura a partir de la cual las entidades federativas generan y adecuan su propia legislación, es así que la inclusión y actualización de esta conducta dentro de la LGAMVLV cumple con el objetivo de visualizarla y establecer lineamientos que integren su conformación factores primordiales como lo es la perspectiva de género, lo cual repercutirá en las legislaciones locales, con el objeto de reconocer y armonizar este tipo de violencia en sus respectivos ordenamientos ya que es común que la misma sea obviada por las autoridades, al no contar con un respaldo que sustente las aseveraciones negativas que representan estas conductas.

7. Por último, consideran necesario diferencia entre el tipo de hostigamiento y el de acoso sexual, ya que si bien ambos son un tipo de violencia sexual, hay diferencias entre ambas; en la figura del hostigamiento sexual, se encuentra presente una relación de superioridad jerárquica de cualquier índole entre la víctima y el victimario, mientras que en el acoso sexual; no existe tal subordinación pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión o riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; de igual manera, el hostigamiento sexual puede presentarse en todos los ámbitos de la vida laboral, escolar, social, doméstico o cualquier otro donde se dé una relación de subordinación, mientras que el acoso sexual se da en cualquier espacio o ámbito de relación, público o privado, sin distinción. Debido a esto, es necesario adecuar conforme a las últimas posturas teóricas y jurídicas ambas figuras, para hacerlas más acordes a las conductas que se



realizan, ya que la definición de una se encuentra concadenada con la otra y ambas describen una situación similar, pero con características distintas en cada caso y que en su conjunto amplían el rango de protección jurídica a las mujeres que son víctimas de esta modalidad de violencia.

8. Explican que si bien estas figuras se encuentran contempladas dentro de la Ley, las mismas deben someterse a un estudio analítico profundo que establezca enunciados normativos claros y concretos, que permitan redefinir los criterios y hacerlos funcionales; por tanto, es oportuno integrar las aportaciones de la proponente y posicionarlas en el enunciado normativo correspondiente, es decir, es contra la buena práctica de la técnica legislativa incluir un artículo 16 bis dentro del ordenamiento, cuando el concepto y texto propuesto ya se encuentran contemplados en un artículo 13 de la misma ley, lo cual produce una duplicidad en la ley que contribuye a disminuir su eficacia y efectividad; de tal manera y con anuencia de la proponente, se decantó por actualizar el enunciado normativo contemplado en el artículo 13 de la Ley e integrarle las consideraciones contendidas en la iniciativa, resultando el siguiente texto:

TEXTO VIGENTE	TEXTO MINUTA
ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de	**ARTÍCULO 13.- Hostigamiento sexual: es cualquier conducta que comete una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado y/o valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus**



TEXTO VIGENTE	TEXTO MINUTA
connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.	**relaciones labores, docentes, domésticas o cualesquiera otra que implique subordinación.** **Acoso sexual: cualquier conducta que comete una persona en contra de otra mediante el ejercicio abusivo del poder, acoso u atosigamiento con el fin de incordiarla sexualmente, así como aquellas conductas con una connotación sexual que no son consentidas por quien las recibe y que pueden conllevar a un estado de riesgo o indefensión para la víctima.**

Como se aprecia, la actualización del enunciado normativo responde de manera real a las situaciones que las mexicanas viven día con día y con el objeto de proteger sus derechos humanos se visibiliza dentro de la ley estas conductas violentas y que culturalmente son normalizadas por la sociedad, por lo que al definirla de forma adecuada dentro de la ley se busca favorecer un cambio en esta que considera natural el ejercer violencia contra la mujer.



III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. El acoso sexual, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en insinuaciones sexuales indeseables o en un comportamiento verbal o físico de índole sexual que pretende interferir, sin razón alguna, en el requerimiento laboral de una persona o crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo.[1]

De acuerdo con este organismo deben integrarse tres elementos para que haya acoso sexual: un comportamiento de carácter sexual que no sea deseado y que la víctima lo perciba como un condicionamiento hostil para su trabajo convirtiéndolo en algo humillante. Existen niveles de conductas de acoso sexual en los que se contemplan la interacción verbal o no verbal, el contenido del mensaje (menos o más coercitivo) y la presencia o no de contacto físico.

De acuerdo con la OIT, el acoso ha sido clasificado en cinco niveles, según lo agravante de la práctica: abarcan del acoso leve verbal, el acoso moderado no verbal sin contacto físico; el acoso medio fuerte verbal; el acoso fuerte con contacto físico; hasta el acoso muy fuerte con presiones físicas y psicológicas para tener contactos íntimos.

Las consecuencias del acoso sexual son varias y distintas. Entre las principales se encuentra: abandono voluntario del trabajo o despido,

[1] OIT, Género, Salud y Seguridad en el Trabajo. Disponible en http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf



sometimiento y silencio para no perder el ingreso, sentido de culpa por la carga cultural "provocadora", nerviosismo, ansiedad, depresión y trastornos psicosomáticos que terminan por cobrar una cuota en la integridad física y psicológica.

SEGUNDA. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos. Aunado a ello, también señala la obligación de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En este marco en términos del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", el Estado Mexicano está obligado a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar las políticas y medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia.

Aunado a lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé el establecimiento de que las medidas que se



establezcan para el cumplimiento de esta ley deben encaminarse a la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra la mujer. La ley referida, como las diversas en materia laboral, consideran a las conductas de hostigamiento sexual y de acoso sexual como una forma de violencia en el ámbito laboral, por lo que deben implementarse acciones para prevenir y atender este tipo de conductas, además de determinar como causa de responsabilidades en materia administrativa el incumplimiento de esta ley. No obstante, derivado del análisis de la Minuta, estas Comisiones Dictaminadoras, coinciden con la colegisladora en que el hostigamiento puede darse en otros ámbitos en donde exista una relación de subordinación.

En tanto, las que dictaminan reconocen que de acuerdo con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su siglas en inglés), la discriminación contra la mujer, denota toda distinción, exclusión, a restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Y derivado de lo dispuesto por la CEDAW; en el artículo 2 inciso b) para que los Estados Partes, adopten las medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer.



TERCERA. En 2015, en el país, se cometieron 29.3 millones de delitos (la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016 (ENVIPE) mide los delitos más representativos del fuero común), los cuales están asociados a 23.3 millones de víctimas, de lo que resulta un promedio de 1.3 delitos por cada víctima del sexo masculino y 1.2, del femenino. Nueve entidades federativas están por encima del promedio; sobresalen: Guerrero, Morelos y Jalisco, cuyos promedios son superiores a 1.5 delitos por víctima. Para las mujeres, estas mismas entidades registran los promedios más altos (1.8, 1.4 y 1.5 delitos, respectivamente), además de Sonora (1.4 delitos); mientras que para las víctimas varones, los mayores promedios corresponden a Guerrero (1.7 delitos por víctima), Morelos (1.6), Oaxaca (1.5) y Jalisco (1.5).[2]

Del total de delitos cometidos durante 2015, cuando las víctimas son hombres significan 51.2% de los casos y cuando son mujeres, 48.8%. La distribución por tipo de delito y sexo de la víctima muestra diferencias: respecto al delito de lesiones, 61.5% de las víctimas son varones y 38.5% mujeres; en el otro extremo, 80 de cada 100 víctimas de los denominados "otros delitos" corresponden al sexo femenino (*sic*) –aquí se incluyen el secuestro y los delitos sexuales, como hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violación. Esta clase de delitos son relevantes para entender la victimización de las mujeres, ya que existen conductas que no son consideradas como delitos, pero repercuten notablemente en su percepción de la seguridad.

[2] INMUJERES, (2016), Mujeres y Hombres en México 2016, disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2016.pdf



CUARTA.- Las Comisiones Dictaminadoras en el estudio y análisis de la presente Minuta, concuerdan con la colegisladora en que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son dos formas de violencia que se ejercen en diversos escenarios y ámbitos de la sociedad, expresadas de forma verbal, física o de ambas maneras y que son relacionadas con la sexualidad que violan el derecho a la libertad psicosexual de las personas a partir del ejercicio abusivo del poder, que se traducen en una relación de subordinación real con la víctima ante la persona agresora y que conlleva una connotación lasciva.

De igual manera, señalan que las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual constituyen faltas de respeto, diligencia y rectitud hacia las personas con las que se tiene relación con motivo del empleo o cualquier otra relación que implique subordinación. Asimismo, estas conductas atentan contra los valores éticos, los derechos humanos y la integridad física o psicológica de las víctimas. Por ello, y derivado de la recomendación general No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujer, estas conductas deben ser atendidas en virtud de que afectan de forma desproporcionada a las mujeres e infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer estos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.

QUINTA.- Por lo que respecta al acoso sexual, coincidimos con lo que establece la OIT, que esta conducta puede presentarse de distintas



maneras: entre ellas, se encuentra el chantaje: cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral –aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo– para que acceda a comportamientos de connotación sexual; también como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación hacia la víctima. Reconocemos que este tipo de situaciones incomodan o tal y como señala la Colegisladora con el fin de incordiarla. No obstante, consideramos necesario modificar la minuta propuesta, en virtud de que del análisis previsto en el presente dictamen la incordialidad de la víctima se traduce en que se percibe un ambiente hostil que puede desencadenar en intimidación, condicionamiento o humillación hacia la víctima.

Por ello, quienes dictaminan consideran positiva la propuesta presentada y vistos lo apartados de análisis, se ha decido **aprobar en positivo con modificaciones** la MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, proponiendo reformar el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por tanto, con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 113 numeral 2, 135 numeral 1 fracción 1, 182, 183 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL.

Artículo único. – Se reforma el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, **escolar, docente, doméstico, o cualquier otro en el que exista subordinación.** Se expresa con conductas verbales, físicas o ambas, **independientemente de que se realice en uno o varios eventos**, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder, **en el que se percibe un ambiente hostil que puede desencadenar en intimidación, condicionamiento o humillación y** que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.



Transitorio

Único. – El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 4 de abril de 2018.



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.



Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo
PRESIDENTA





Sen. Angélica de la Peña Gómez
SECRETARIA

Sen. Martha Elena García Gómez
SECRETARIA



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES A REALIZAR ACCIONES Y CAMPAÑAS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES.

4 de abril de 2018.



Sen. Yolanda de la Torre Valdez
INTEGRANTE



Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora
INTEGRANTE



Sen. María del Carmen Izaguirre Francos
INTEGRANTE



Sen. Sen. Adriana Loaiza Garzón
INTEGRANTE



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.





Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama
INTEGRANTE

Sen. Sandra Luz García Guajardo
INTEGRANTE



Sen. Carmen Dorantes Martínez,
INTEGRANTE



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA



Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo,
PRESIDENTA





Sen. José M. Antonio Olvera Acevedo,
SECRETARIO

Sen. Zoé Robledo Aburto,
SECRETARIO





Sen. Enrique Burgos García,
INTEGRANTE

Sen. Raúl García Guzmán,
INTEGRANTE



Transitorio

Único. – El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 4 de abril de 2018.



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.



Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo
PRESIDENTA





Sen. Angélica de la Peña Gómez
SECRETARIA

Sen. Martha Elena García Gómez
SECRETARIA



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES A REALIZAR ACCIONES Y CAMPAÑAS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES.

4 de abril de 2018.



Sen. Yolanda de la Torre Valdez
INTEGRANTE



Sen. Itzel Sarahi Ríos de la Mora
INTEGRANTE



Sen. Maria del Carmen Izaguirre Francos
INTEGRANTE



Sen. Sen. Adriana Loaiza Garzón
INTEGRANTE



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.





Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama
INTEGRANTE

Sen. Sandra Luz García Guajardo
INTEGRANTE



Sen. Carmen Dorantes Martínez,
INTEGRANTE



COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA A LA MINUTA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

4 de abril de 2018.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA



Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo,
PRESIDENTA



Sen. José M. Antonio Olvera Acevedo,
SECRETARIO



Sen. Zoé Robledo Aburto,
SECRETARIO



Sen. Enrique Burgos García,
INTEGRANTE



Sen. Raúl García Guzmán,
INTEGRANTE



12. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley General de Turismo.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Estas Comisiones Unidas que suscriben, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 162, 176, 177, 178, 182, 187, 188, 190, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al estudio y análisis de la Iniciativa antes señalada, y conforme a las deliberaciones y al análisis que de la misma realizaron sus integrantes reunidos en pleno, presentan a la consideración de esta soberanía el presente Dictamen, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la Iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma bajo estudio.

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

ANTECEDENTES

I.- El 23 de febrero de 2016, la Sen. Luz María Beristain Navarrete, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

II. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha Minuta a las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

III. Una vez remitida la Iniciativa a estas Comisiones, se procedió a su estudio, análisis y la elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Señala la promovente que el turismo es una actividad prioritaria nacional que genera recursos económicos y beneficia a la población de las regiones turísticas. Por lo anterior, se ha construido una Política Turística Nacional entendida como el conjunto de instrumentos, políticas, estrategias, programas y acciones encaminadas al impulso, fomento y desarrollo turístico; sin embargo, continua la Senadora Promovente, ha sido insuficiente para la promoción de un desarrollo inclusivo y sostenible que genere derrama en todos los sectores de la zona e impacte positivamente en la superación de la pobreza, ya que se tiene una concepción



inadecuada en la Ley de qué es el turismo y no se cuentan con mecanismos que fortalezcan las actividades relacionadas con las cadenas productivas.

La promovente considera que la actividad turística ha generado una relación de interdependencia entre los grandes prestadores de servicios y las poblaciones locales, modificando las características económicas y sociales de las áreas de destino, las cuales obtuvieron oportunidades de desarrollo gracias a la derrama económica generada en la zona, motivando que los núcleos sociales asentados en regiones turísticas desarrollaran sus actividades alrededor de la atención a los vacacionistas.

Sin embargo, continua la legisladora, este modelo se ha visto afectado por la concentración de servicios turísticos en grandes prestadores, en detrimento de la economía de las familias mexicanas.

La promovente establece que el objeto de la iniciativa de mérito es corregir una falla de mercado asociada a la oferta de productos turísticos, debido a que la oferta de paquetes “todo incluido” está afectando al comercio local de los destinos mexicanos, pues los turistas han dejado de salir a explorar la zona y tener interacción con el comercio local.

En este sentido, establece la promovente, el turismo sí ha generado crecimiento, pero que este no ha alcanzado por igual a todos los sectores, pues aunque el PIB turístico nacional ha tenido variaciones anuales positivas en el último lustro, el crecimiento se ha concentrado en las empresas de alojamiento y transporte.

La Senadora Promovente establece que según cifras cruzadas entre Cuenta Satélite del Turismo de México del INEGI y el "Compendio Estadístico del Sector Turismo” de la SECTUR la derrama turística ha disminuido a la mitad para los comercios locales, afectando directamente a las microempresas de servicios turísticos ya que los turistas no salen de su hotel o bien los servicios de los que hacen uso les son proporcionados por la empresa responsable de vender el paquete de todo incluido.

La legisladora establece que el esquema de todo incluido ya se ha regulado en otros países, como es el caso de España es donde se impide el uso exclusivo de las playas como parte del complejo y se restringe a las empresas que manejan paquetes multiservicio para que se apoyen con la comunidad para crear más empleos. Refiere además que en Grecia e Italia también se ha regulado en el mismo sentido.

La promovente propone establecer en la Ley General de Turismo mecanismos para procurar que el desarrollo turístico sea incluyente y beneficie de manera equitativa a los prestadores de servicios turísticos de los sectores social y privado mediante la creación y consolidación de cadenas productivas, por un lado, y promoviendo condiciones de oferta que fomenten una competencia sana e incluyente entre todos los prestadores de servicios.

También propone prohibir la concentración estricta de servicios turísticos en un prestador o establecimiento, sin que ello implique prohibir los paquetes todo incluido, mismos que podrán seguir ofertándose siempre y cuando se apeguen a lo dispuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica, además de señalar de manera expresa el derecho del turista a solicitar en cualquier momento la cancelación de los servicios contratados, en cuyo caso no se podrá establecer una penalización desproporcionada.

Finalmente, la legisladora propone facultar expresamente a la Comisión Federal de Competencia Económica para verificar que los prestadores de servicios turísticos no observen conductas que supongan una práctica monopólica relativa.

CONSIDERACIONES



Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consideran que el turismo es especialmente importante para México, tiene la cualidad de ser un sector incluyente, ya que los ingresos permiten generar más empleos, integrar cadenas de valor, siendo una importante herramienta para combatir la pobreza, ya que atrae inversiones, fortalece los mercados donde operan las pequeñas y medianas empresas, mejora los medios de transporte y acelera la creación de infraestructura (desde carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y hasta instalaciones públicas deportivas y de recreación) que no sólo benefician al turista sino también a los habitantes del territorio.

Estas Comisiones Dictaminadoras comparten con la promovente la necesidad de que el turismo sea incluyente y equitativo, razón por la cual consideran pertinente aprobar con modificaciones la propuesta de reforma a la primera parte del artículo 15 de la Ley General de Turismo, para establecer que las cadenas productivas y redes de valor favorecerán el crecimiento económico sostenido y el incremento de los niveles de competitividad de la actividad turística del país.



La redacción que estas Comisiones Unidas proponen quedaría en los siguientes términos:

TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	TEXTO PROPUESTO
Ley General de Turismo	Ley General de Turismo	Ley General de Turismo
Artículo 15. La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México.	**Artículo 15.** La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México. **Las cadenas productivas garantizarán que la oferta de servicios turísticos sea incluyente y promueva la participación conjunta de todos los tipos de prestadores, para lo cual se promoverá la asociación entre micro, pequeñas medianas y grandes empresas turísticas. Para los efectos de la presente ley el condicionamiento para la comercialización o distribución exclusiva de servicios turísticos y toda práctica que inhiba, restringa o condicione a través de paquetes de**	**Artículo 15.** La Secretaría, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, estimularán y promoverán entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar las economías locales y buscar el desarrollo regional. Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información disponible en el Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México. **Las cadenas productivas y redes de valor favorecerán el crecimiento económico sostenido y el incremento de los niveles de competitividad de la actividad turística del país.**



	servicios múltiples, servicios de valor agregado u otra figura similar, será considerado como práctica monopólica relativa en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica.	

Por lo que respecta a las propuestas para reformar el párrafo tercero del artículo 1; el párrafo segundo del artículo 5; las fracciones I y XV del artículo 2; la fracción IX del artículo 4; y, la fracción XI del artículo 10, cuyo espíritu atiende a la búsqueda de la promovente por garantizar el desarrollo de actividades y servicios turísticos en condiciones de equidad, dotando a la Secretaría de Turismo de diversas facultades para garantizar que el desarrollo turístico incluya a diversos sectores sociales en condiciones de equidad, promueva la erradicación de la pobreza, empleo, educación, entre otros, estas Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera consideran pertinente mencionar lo siguiente:

Pese a que los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el espíritu de la iniciativa de mérito, respecto de la necesidad de que el desarrollo turístico sea incluyente y beneficie tanto a los micro, pequeño, mediano y grandes prestadores de servicios turísticos, estiman necesario desestimar las propuestas debido a que la Ley General de Turismo vigente, en la fracción II, de su artículo 2, ya contempla que la Secretaría de Turismo establecerá las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado de los Estados, Municipios y la Ciudad de México a corto, mediano y largo plazo, asimismo, observan que el artículo 31 de la citada ley refiere que el Ejecutivo Federal, los Estados, los Municipios y la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en la Zona, fomentando la inversión, el empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en beneficio de la población, por lo que el desarrollo turístico ya se ve orientado hacia lo que busca la legisladora promovente.

Respecto de las propuestas de reformas a la fracciones XI del artículo 3; VI, VII y VII del artículo 7; segunda parte del párrafo tercero del artículo 15; párrafo tercero del artículo 22; artículo 53; párrafo segundo del artículo 55; párrafo segundo del artículo 71; y, el párrafo cuarto del artículo 73, las que tienen como objetivos:

a) Facultar a la Secretaría de Turismo para vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de competencia económica, especialmente en materia de prácticas monopólicas relativas.

b) Establecer en la Ley General de Turismo que el condicionamiento para la comercialización o distribución exclusiva de servicios turísticos y toda práctica que inhiba, restringa o condicione a través de paquetes de servicios múltiples, servicios de valor agregado u otra figura similar, será considerado como práctica monopólica relativa en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, debiendo ser sancionadas las prácticas monopólicas en que incurran los prestadores de servicios turísticos conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.

c) Prohibir en la Ley General de Turismo la concentración estricta de servicios turísticos en un prestador



o establecimiento, estableciendo además que en aquellos casos en que se oferten múltiples servicios, se estará a lo dispuesto por la Comisión Federal de Competencia Económica. Faculta al prestador de Servicios Turísticos a celebrar convenios con otros prestadores de la zona a efecto de ofrecer al turista la mayor cantidad posible de opciones, dentro de la misma relación contractual o paquete.

d) Que en el Programa Sectorial de Turismo se establezca la implementación de medidas para prevenir y sancionar prácticas monopólicas relativas.

Estas Comisiones Legislativas consideran necesario señalar que aunque el espíritu que motiva la presente reforma es loable, ya atiende a la necesidad de generar condiciones de equidad en la competencia de las empresas turísticas, deben desestimar dichas propuestas debido a que el tema de competencia económica se encuentra regulado por la Ley Federal de Competencia Económica y es vigilada por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), además de que las propuestas de reformas comprometen de manera ineludible a la Secretaría de Turismo a realizar acciones que están fuera de su competencia y del objeto de la Ley General de Turismo.

A efecto de fortalecer la argumentación, en el sentido de que existe una autoridad a nivel federal especializada en materia de monopolios, prácticas monopólicas, así como un órgano encargado de instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, estas Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos, Primera consideran oportuno establecer que:

El artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica dispone que “Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.”

La referida Ley Federal de Competencia Económica, también establece el procedimiento que deberán lleva a cabo las investigaciones para determinar la existencia de barreras a la competencia, los artículos 94 y 95 señalan que en caso de existencia de barreras a la competencia, la COFECE notificará a las autoridades que regulen el sector del que se trate para que, en el ámbito de su competencia y conforme a los procedimientos previstos por la legislación vigente, determinen lo conducente para lograr condiciones de competencia.

Por su parte, el artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica prohíbe las conductas anticompetitivas de la siguiente manera: “Están prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios”.

Por su parte, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) órgano administrativo de la Secretaría de Economía tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.

Respecto de la propuesta de reformar el artículo 53 y el párrafo primero del artículo 55 para establecer que en las relaciones entre los prestadores de servicios turísticos y el turista deberá observarse a Ley Federal de Competencia Económica y que el turista tendrá en todo momento el derecho de solicitar la cancelación de



los servicios contratados, en cuyo caso no se podrá establecer una penalización desproporcionada, estas Comisiones Unidas consideran que las propuestas son improcedentes debido a que es la Ley Federal de Protección al Consumidor la encargada de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; y que la misma ya regula los supuestos propuestos en la iniciativa.

Así, el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que "El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá la facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna. La revocación deberá hacerse mediante aviso o mediante entrega del bien en forma personal, por correo registrado, o por otro medio fehaciente. La revocación hecha conforme a este artículo deja sin efecto la operación, debiendo el proveedor reintegrar al consumidor el precio pagado. En este caso, los costos de flete y seguro correrán a cargo del consumidor. Tratándose de servicios, lo anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se encuentra a diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra."

Por su parte, el artículo 85 de la misma ley prohíbe las prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores y las obligaciones inequitativas o abusivas.

Por todas las consideraciones antes vertidas, los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Turismo y Estudios Legislativos, Primera que suscriben el presente dictamen, someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

DECRETO

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DE TURISMO

Artículo Único. Se **adiciona** un párrafo tercero al artículo 15 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 15. …

…

Las cadenas productivas y redes de valor favorecerán el crecimiento económico sostenido y el incremento de los niveles de competitividad de la actividad turística del país.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, a los 01 días del mes de Marzo de 2018.



COMISIÓN DE TURISMO

NOMBRE	FIRMA		
	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Sen. Félix González Canto Presidente			
Sen. Martha Elena García Gómez Secretaria			
Sen. Luz María Beristain Navarrete Secretaria			
Sen. Isaías González Cuevas Integrante			
Sen. Hilda Esthela Flores Escalera Integrante			
Sen. Celestino Cesareo Guzmán Integrante			
Sen. Fernando Torres Graciano Integrante			



NOMBRE	FIRMA		
	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz Integrante			
Sen. Luis Armando Melgar Bravo Integrante			
Sen. Anabel Acosta Islas Integrante			
Integrante			

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

NOMBRE	FIRMA		
	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Sen. Sonia Mendoza Díaz Presidenta			
Sen. Miguel Ángel Chico Herrera Secretario			
Sen. Zoé Robledo Aburto Secretario			
Sen. Enrique Burgos García Integrante			
Sen. Raúl Gracia Guzmán Integrante			



13. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018

CDR/LXIII/397/2018

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

Por este conducto me permito remitir a usted el **"Dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Estudios Legislativos a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 15 y 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,"** aprobado por unanimidad.

En función de lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, por mi conducto le remitimos el Dictamen, para que sea considerada su inclusión en el orden del día y su publicación en la Gaceta del Senado.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo dispuesto por los artículos 73,182,192,193 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República.

Sin otro asunto en particular me despido, no sin antes enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO
PRESIDENTE

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, TORRE DE COMISIONES, PISO 7, OFICINA 2, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO.
CONMUTADOR: 5345 3000 EXTS. 3881 / 5172 desarrollorural@senado.gob.mx



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen lLa Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada por el Senador Raúl Aarón Pozos Lanz del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 14 de noviembre de 2017.

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las cuales se valoró integralmente la iniciativa, desechándose las reformas a los artículos improcedentes.

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta el sentido del Dictamen.

1



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

I.- ANTECEDENTES

Con fecha de 14 de noviembre de 2017 se presentó en el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen.

En esa misma fecha mediante oficio con numero DGPL-1P3A.-3803 de la Mesa Directiva se recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del presente dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa tiene como objetivo el fomentar e impulsar el extensionismo rural como base para hacer más eficientes las actividades agropecuarias, lo anterior se lograría a través de adicionar una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Entre los motivos que fundamentan esta iniciativa, para sustentar las reformas y a los artículos anteriormente mencionados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el proponente señala lo siguiente:

- El proponente menciona que el sector agropecuario en cualquier país es parte estratégica y fundamental para la prosperidad de sus habitantes. En diversos países, a raíz de la globalización y del libre comercio, se ha descuidado al sector agropecuario y pesquero y México, no es la excepción ya que durante varios años se han dejado de implementar políticas que tienden a disminuir la participación de este sector. En un modelo de globalización que evite lo anterior, el libre comercio es vital para cualquier economía, sin embargo, éste debe de ser en condiciones justas y equitativas, para que realmente sea benéfico, de lo contrario algunos competidores se encontraran en franca desventaja competitiva ante países con altos niveles de subsidios directos e indirectos.

- El proponente señala que la aplicación de políticas de otorgamiento de subsidios en las naciones fueron la causa del fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Igualmente menciona que, en el contexto internacional, existe una alta volatilidad en los precios de los alimentos, así como algunos problemas



sanitarios muy focalizados en algunas regiones del mundo. En nuestro país, en el sexenio pasado se observó una clara tendencia a beneficiar los programas sociales asistenciales, disminuyendo el presupuesto a los programas productivos, que son los que derivan en alimentos, empleos y mayores ingresos a las familias rurales.

- El proponente también menciona que el clima también es un factor que deteriora la situación de los agricultores, el calentamiento global está resultando en situaciones climáticas atípicas, las cuales están afectando en mayor medida los niveles de productividad del campo mexicano.

- El proponente destaca que en el presente sexenio la visión implementada por el Gobierno Federal cambió de paradigma, se modificó la visión y los objetivos de las políticas públicas implementadas, que permite una transición de políticas asistenciales a un esquema de políticas basadas en el fomento a la productividad, con el objetivo de crear las condiciones para un crecimiento productivo sostenible y que beneficie a los productores agropecuarios. Por lo que, durante el presente sexenio, el sector agropecuario se ha mantenido en constante crecimiento en nuestro país. El proponente menciona que el titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), manifestó que "se produce 13% más toneladas de alimentos en los sectores agropecuario y pesquero que hace seis años y el valor de la producción es, en términos reales, 26% mayor que en 2009 y 52% más que en 2003 (SAGARPA, 2016[1]). Lo anterior porque el Presidente de la República trazó, desde el inicio de su administración, un objetivo definido "incrementar la producción de alimentos a partir de una mayor productividad agrícola y ganadera. Lo anterior permitirá incrementar los ingresos de los campesinos, además de ofrecer alimentos a mejores precios para los consumidores.

- El proponente menciona que actualmente México es el doceavo productor de alimentos, desde el inicio del Tratado de Libre Comercio para América del

[1] SAGARPA (2016). Sector agropecuario y pesquero tiene mayor valor que hace seis años. Consultado el 29 de enero de 2018 en < https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sector-agropecuario-y-pesquero-tiene-mayor-valor-que-hace-seis-anos-20161012-0129.html>.



Norte (TLCAN), las exportaciones del Sector Agropecuario hacia Estados Unidos de América se incrementaron en 635%, además de contar con una balanza comercial superavitaria (El Universal, 2016)[2]. En el año 2017, a pesar de las restricciones presupuestales manifestadas en el mundo y que también han afectado a nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto a la SAGARPA de alrededor de 70 mil 500 millones de pesos, distribuidos principalmente, en ocho programas y 41 componentes, los cuales contarán con un apartado de atención para pequeños productores. El presupuesto está dividido de la siguiente manera: Fomento a la Agricultura, 16 mil 448 millones de pesos; Pequeños Productores, 15 mil 63 millones de pesos; Productividad y Competitividad, 4 mil 276 millones de pesos; Fomento Ganadero, 3 mil 092 millones de pesos; Productividad Pesquera y Acuícola, 2 mil 285 millones de pesos; Sanidad e Inocuidad, 2 mil 678 millones de pesos; Comercialización, 9 mil 421 millones de pesos, y Concurrencia, 2 mil millones de pesos. Ante este escenario, el reto no es menor, una situación coyuntural que se presenta es el amago por parte del Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, para renegociar los términos que rigen el TLCAN.

- Por lo anterior, el proponente sugiere la necesidad de buscar herramientas adicionales para fomentar el crecimiento de la productividad, una de las cuales es el fomento del extensionismo rural. Sobre este último señala que: en México, el extensionismo es "el servicio prestado por personal de las instituciones de educación y de investigación que facilita el acceso al conocimiento, la información y las tecnologías, a productores, grupos y organizaciones económicas rurales y a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola" (SAGARPA, 2014[3]).

- El proponente señala la importancia histórica del extensionismo mexicano cuyos antecedentes se remontan al siglo XVIII, cuando en Europa, párrocos

[2] El Universal (2016). Exportaciones a EU subieron 600% tras TLC: Calzada. Consultado el 29 de octubre de 2018 en < http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/8/exportaciones-eu-subieron-600-tras-tlc-calzada>

[3] SAGARPA (2014). Extensionismo. Consultado el 29 de enero de 2018 en <https://www.extensionismo.mx/web1/index.php/contenido/119-extensionismo-rural >



de aldeas y maestros, así como de grandes propietarios agrícolas y agricultores progresistas quienes, tanto individualmente como a través de Sociedades Agrarias, intentaron llamar la atención de agricultores locales sobre el conocimiento agrícola y exhortarlos a adoptar nuevas y mejores formas de hacer en sus cultivos y ganados. En nuestro país el extensionismo rural se remonta a los años sesenta, surge bajo el supuesto de "extender" prácticas de producción más eficientes a campesinos que necesitaran mejorar sus sistemas de producción y que demandaran lo que se les ofrecía: tecnología. Los técnicos (extensionistas) eran trabajadores al servicio del Estado que brindaban atención a las unidades de producción rural de forma individualizada; su pago era fijo por nómina. En la década de los ochentas, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) contaba con alrededor de 25 mil empleados, entre los que destacaban extensionistas, agrónomos, veterinarios, técnicos medios y prácticos, éstos operaban los programas de extensión dando servicio a las organizaciones de los productores. Este tipo de programas se eliminaron de 1988 a 1994 por la gran crisis económica que vivía el país y la población rural padeció un periodo crítico de desarrollo. En el año de 1996 se restaura el servicio de extensión a través del Sistema Nacional de Extensionismo y Desarrollo Tecnológico (SINDER), con el diseño y aplicación de dos programas de extensionismo: el Programa de Capacitación y Extensión (PCE) y el Programa Elemental de Asistencia Técnica (PEAT). En el año 2001, se impulsó la transición del cuerpo de técnicos para que éstos prestaran servicios profesionales de calidad a través del Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales (PESPRO). Para el año 2002 la SAGARPA inicia con el Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural conocido como PRODESCA, según dicha Secretaría.

- El proponente menciona que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó en el año 2011 el estudio "Análisis del Extensionismo Agrícola en México" (OCDE, 2011[4]) en el cual se señala que es a partir del año 2011 cuando renace con una nueva visión del extensionismo rural en México con la creación, por parte de la SAGARPA, de un nuevo programa denominado Programa de Desarrollo de Capacidades,

[4] OCDE (2011). Análisis del Extensionismo agrícola en México. OCDE. Paris.



Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, hoy denominada Componente de Extensionismo e Innovación Productiva. Este programa tiene como objetivo específico fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas.

- El proponente menciona que los servicios de extensión agraria, generalmente han establecido como objetivo el difundir nuevas tecnologias y educar al productor para mejorar su desempeño productivo, en México los sistemas de extensionismo están siendo redefinidos, impulsados para mover a México. Considerando lo anterior, el proponente menciona que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 161, fracción IV): "contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral ...". No obstante lo anterior, el proponente considera necesario el incluir en otras partes de la citada Ley el fomento e impulso del extensionismo rural con el objetivo de que se fortalezcan las medidas para impulsarlo y que la capacitación profesional de los agroproductores y ganaderos, se conviertan en un punto central de la política para el sector.

Con base en las consideraciones anteriores, el proponente sugiere la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, que se presenta en el apartado de texto normativo.

III.- TEXTO NORMATIVO

A continuación, se presenta un Cuadro Comparativo sobre adicionar una fracción XIX al artículo 15 y una fracción XIV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Texto actual de la LDRS	Modificación propuesta
Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: I. a XVIII. ... XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.	**Artículo 15.-** El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: I. a XVIII. ... **XIX. Impulso al extensionismo rural como base para eficientar las actividades agropecuarias** **XX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.**
Artículo 32.- El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. ... Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: I. a XIII. ...	**Artículo 32.-** El Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. ... Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante: I. a XIII. ...

7



XIV. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley.	**XIV. El fomento al extensionismo rural.** **XIV. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley.**

IV.- CONSIDERACIONES

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que:

PRIMERO. Estas Comisiones Unidas coinciden con el proponente en cuanto a resaltar la importancia del extensionismo en el desarrollo rural del campo mexicano. Al respecto, Rendón *et al.* (2015, p. 152)[5] señalan que: la generación de riqueza en el sector agropecuario nacional enfrenta tres grandes desafíos: 1) mejorar la competitividad y productividad; 2) reducir la pobreza en el sector rural, y 3) aumentar la sustentabilidad de los recursos naturales. Textualmente, Rendón *et al.* (2015, p. 152) citan que: *"Estos desafíos, por su complejidad, son objeto de atención pública a través de diversos mecanismos de soporte basados en conocimientos y en la transferencia de éstos a los productores del medio rural, denominados de manera genérica como mecanismos de extensionismo."*

SEGUNDO. Igualmente, investigadores como Landini (2016)[6] señalan que actualmente el papel del extensionismo rural está siendo revalorado en Latinoamérica y retornando como herramienta fundamental para el desarrollo rural, así como para la disminución de la pobreza y proporcionar mejoras en cuestiones de seguridad alimentaria.

TERCERO. En una investigación realizada para SAGARPA en 2011 (OCDE, 2011)[7] en la cual se analizó y se discutió el estado actual del extensionismo rural mexicano,

[5] Rendón, Roberto, Elizabeth Roldán, Belén Hernández y Pedro Cadena (2015). Los procesos de extensión rural en México. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 6(1): pp. 151-161.
[6] Landini, Fernando. (2016). Concepción de extensión rural en 10 países latinoamericanos. Andamios. Revista de Investigación Social,13(30): 211 - 236.
[7] OCDE (2011). Análisis del Extensionismo agrícola en México. OCDE. Paris.



se concluye entre otros aspectos que: a) en México no existe un servicio de extensión agrícola específico como tal. Esto es, los agricultores cuentan con asistencia técnica al acceder a los distintos programas de apoyo de la SAGARPA. La asistencia técnica se lleva a cabo por medio de contratistas del sector privado, los cuales ponen en práctica los programas en el nivel de la explotación agrícola y b) esta situación ha generado uno de los problemas más obvios en lo que se refiere al sistema, ya que los prestadores de servicios técnicos son intermediarios para los programas de apoyo, captando las rentas más que para mantenerse al tanto del proyecto agropecuario hasta su finalización y posteriormente evaluar su impacto.

CUARTO. Actualmente, al año 2017, SAGARPA (2017)[8] realiza una labor importante, al mantener en su Programa de Apoyo a Pequeños Productores el Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva. A través de este Componente se apoya monetariamente a los campesinos mexicanos en cuanto a servicios de extensionismo, servicios de coordinación de extensionistas, la organización de foros de cobertura estatal y nacional para el intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades y también la capacitación, seguimiento y certificación de competencias de los extensionistas y productores; lo anterior permite identificar áreas de oportunidad para el desarrollo rural sustentable.

QUINTO. Ante la importancia, problemáticas y evidencias que existen en torno al papel fundamental que desempeña el extensionismo dentro del sector rural mexicano, estas Comisiones Unidas coinciden con el proponente en cuanto a la importancia que tienen las adiciones sugeridas por él a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Si bien, la SAGARPA apoya actualmente dicha actividad, estas Comisiones Unidas consideran necesarias las adiciones al artículo 15 y al artículo 32 de la Ley en comento; en el entendido que "actualmente la Ley menciona al extensionismo sólo como medio para contribuir al aumento de la productividad":

> *Artículo 161.- Los programas que formule el Gobierno Federal para la promoción de las zonas de atención prioritaria, dispondrán acciones e instrumentos orientados, entre otros, a los siguientes propósitos:*

[8] SAGARPA. (2017). Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva. En



I. a III. ...

IV. Contribuir al aumento de la productividad de los recursos disponibles en especial del capital social y humano, mediante la capacitación, incluyendo la laboral no agropecuaria, el extensionismo, en particular la necesaria para el manejo integral y sostenible de las unidades productivas y la asistencia técnica integral;

V. a XII. ...

SEXTO- Sin embargo, es necesario destacar y señalar que, por técnica y precisión legislativa, estas Comisiones Unidas consideran que las reformas propuestas no sean nuevas fracciones en cada uno de los artículos en comento, sino que se incorporen en fracciones ya existentes en cada uno, de la siguiente forma. Para el caso de la adición al artículo 15, dicha reforma se adiciona a la fracción XIV ya existente del mismo artículo. Mientras que para el caso de la adición al artículo 32, dicha reforma se adiciona a la fracción I ya existente dentro del artículo 32.

SÉPTIMO. Se tiene que considerar también que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, quienes basados en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 19 de su Reglamento, opinan que de acuerdo a los resultados de un análisis de impacto presupuestal sobre la Iniciativa en comento, dichas incorporaciones sugeridas por el proponente no prevén o consideran ningún impacto presupuestario, en función de que el Gobierno Federal como parte de la estructura de SAGARPA incluye el Programa de Apoyo a Pequeños Productores y sus componentes, concretamente el de "Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociación Productiva". Dicho análisis de impacto presupuestal fue solicitado por la Comisión de Desarrollo Rural al Centro de Estudios y Finanzas Públicas a través del Oficio CDR/LXIII/323/2017 con fecha de 11 de diciembre de 2017 y los resultados del análisis presupuestal fueron remitidos a esta Comisión a través de Oficio del Centro de Estudios con número CEFP/DEPGP/009/18, con fecha de 11 de enero de 2018. Considerando lo expuesto, estas Comisiones Unidas deciden aprobar con modificaciones, las adiciones sugeridas por el proponente.

Por todo lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos acuerdan el siguiente:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

V. RESOLUTIVO
PROYECTO DE DECRETO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 15 Y EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XIV del artículo 15 y la fracción I del Artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15.- ...

I. a XIII. ...

XIV. Promoción del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la capacitación para el trabajo en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y de servicios**, además del impulso al extensionismo rural como base para eficientar las actividades agropecuarias**;

XV. a XIX. ...

Artículo 32.- ...

...

...

I. El impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas mejoradas incluyendo las criollas**, además del impulso al extensionismo rural como base para eficientar las actividades agropecuarias**;

II. a XIV. ...

11



TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el dia 1 de marzo de 2018.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

La Comisión de Desarrollo Rural

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo
Presidente

Sen. Carmen Dorantes Martínez
Secretaria

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Secretaria

Sen. Esteban Albarrán Mendoza
Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez
Integrante

13



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 15 Y UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



LISTA DE ASISTENCIA A LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2018, A LAS 9:00 HRS. EN LA SALA 2 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.



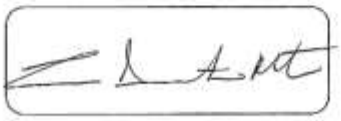
Sen. Fidel Demédicis Hidalgo

PT





Sen. Carmen Dorantes Martínez





Sen. Luisa María Calderón Hinojosa

SG





Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez





Sen. Esteban Albarrán Mendoza





Sen. Ricardo Barroso Agramont





COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Trigésima Reunión Ordinaria

Lista de Asistencia

21 DE MARZO DE 2018

	SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA Presidente	
	SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS Secretario	
	SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Secretario	
	SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA Integrante	
	PAN Integrante	



14. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Desarrollo Rural Sustentable presentada por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 18 de noviembre de 2015.

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las cuales se valoró integralmente la iniciativa, desechándose las reformas a los artículos improcedentes.

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta el sentido del Dictamen.

1



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

I.- ANTECEDENTES

Con fecha de 18 de noviembre de 2015 se presentó en el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen.

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-1P1A.-4046.de la Mesa Directiva se recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del presente dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa propone reformar y adicionar los artículos 1, 5, 7, 8, 178, 182 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el objeto de establecer las bases de coordinación, operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los municipios a efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las políticas, objetivos y estrategias derivadas de la planeación del desarrollo rural sustentable, así como aquéllas de fomento productivo para procurar el abasto de alimentos a la población.

Entre los motivos que fundamentan la iniciativa, para sustentar las reformas y adiciones a los artículos anteriormente mencionados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la proponente señala lo siguiente:

- La proponente menciona que nuestro país se caracteriza por tener un territorio con grandes mosaicos geográficos, regiones y microclimas que permiten obtener una gran variedad de productos agrícolas, y por otro lado también se tienen condiciones que favorecen la producción ganadera y su mejoramiento. Sin embargo, la misma proponente señala que a pesar de las grandes ventajas geográficas nacionales para la producción agropecuaria, no se obtienen los volúmenes deseados, debido a la falta de técnicas apropiadas, a no considerar la vocación de la tierra, y también debido a que en muchas ocasiones la tradición, cultura y arraigo en los cultivos son inapropiados. De acuerdo a la proponente "ahí está la gran barrera en la actividad agroalimentaria, de tal forma que si cambiamos esa forma tradicional de producción de alimentos, se tendrán mejores y mayores resultados".



- La proponente cita que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria (la suma del valor de alimentos básicos) y de la canasta no alimentaria (la suma de los gastos en educación, vestido, trasporte, entre otros). Considerando lo anterior a septiembre de 2015, el valor de la canasta alimentaria en la zona rural fue de $ 917.45 y en la zona urbana fue de $1,304.92. Sobre la canasta no alimentaria se reportó para el sector rural $1,685.50 y $2,633.25 para el sector urbano.
- La proponente también menciona que en nuestro país existen grandes problemas provocados por el gran desequilibrio mundial, habiendo entre otros problemas: a) una grave deficiencia alimentaria que agobia a los grupos vulnerables; b) escasa estrategia agrícola; c) el calentamiento global causante del cambio climático que magnifica los huracanes y ciclones e intensifica las sequías ocasionando muerte y destrucción y d) la debacle financiera que ha provocado la quiebra de empresas y la pérdida incontenible de empleos en prácticamente todos los países, poniendo en evidencia las graves insuficiencias de control de que adolecen las políticas económicas de libre mercado y que están provocando ya el retorno de los proteccionismos.
- Sobre la problemática alimentaria, la proponente menciona que nuestra Carta Magna en su artículo 27, fracción XX, establece como de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. Por otra parte con la reforma en materia del derecho a la alimentación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, el Estado tiene la obligación de garantizar el abasto de alimentos a la población. En consecuencia, por mandato del precepto constitucional señalado, el Estado tiene el deber entre otros aspectos el de garantizar el derecho a la alimentación.
- Por lo mismo, la proponente menciona que el México actual se encuentra inmerso en la problemática situación de los mercados internacionales de productos agroalimentarios, siendo la gente de escasos recursos quienes más padecen la crisis mundial. Por lo anterior, según la proponente debemos reaccionar como país, no con medidas paliativas y coyunturales, sino a partir de una profunda reflexión de Estado y de la sociedad mexicana en su



conjunto, respecto al modelo económico y las políticas públicas idóneas para encauzar a la nación en la senda del crecimiento económico y del desarrollo humano y social. Lo anterior debido a que el sector rural, especialmente el agroalimentario y sus actividades económicas, son los más golpeados por la crisis. Los ejidos y comunidades viven una situación muy precaria debido al rezago que existe con la evolución general de la economía, además de que se encuentran disminuidos en cuanto a su organización, recursos naturales, recursos ecológicos, estructura financiera y su capacidad de adecuación tecnológica.

- La proponente hace una revisión histórica de la relación política del Estado con el sector agropecuario, cita que en los años cuarenta del siglo pasado el sector tuvo el respaldo del Estado. Mientras que, en los sesentas, se dejó que el campo se descapitalizara y disminuyera su ritmo de producción y productividad provocando una pérdida de rentabilidad en todo el sector. En consecuencia, se necesita una nueva institucionalidad donde los aspectos productivos tengan sustento en la especialización científica, tecnológica, administrativa y financiera que corresponda a la modernidad de la economía de mercado y a la internacionalización del comercio de alimentos y materias primas.
- De acuerdo a lo anterior la Proponente señala que el objeto de la iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía consiste en establecer las bases de coordinación, operación y funcionamiento de la Federación, las entidades federativas y los municipios a efecto de concretar de manera eficiente y eficaz las políticas, objetivos y estrategias derivadas de la planeación del desarrollo rural sustentables, así como aquéllas de fomento productivo para procurar el abasto de alimentos a la población. Considerando también que cuando en una nación existe incertidumbre en la disponibilidad de alimentos para sus pobladores, se le condena a la dependencia del comercio exterior.
- La proponente proporciona datos estadísticos del sector rural y agropecuario al respecto menciona que 30% de los 112 millones de mexicanos vive en localidades con menos de 5,000 habitantes; menciona además la siguiente información: a) de los 2,454 municipios existentes, más del 50% (1,391) son totalmente rurales; b) se tienen registrados 6.4 millones de unidades censales agropecuarias, c) existen 3.8 millones de ejidatarios y comuneros; d) 1 millón de mujeres está al frente del trabajo de la tierra y f) 4 millones de campesinos con tierras improductivas o sin tierra, son jornaleros agrícolas. Con datos de INEGI, cita que México cuenta con 195.9 millones de



hectáreas. Las cuales comprende: a) 112.7 millones de hectáreas en unidades de producción rural; b) 75.2 de ellas están cubiertas de pastos o son agostaderos; c) 31.5 millones constituyen la superficie de labor; d) El maíz, el frijol y el sorgo que representan el 78% de la superficie cultivada. Existe una alta concentración de ciertos productos por regiones. Por ejemplo, el maíz se concentra en estados como Sinaloa, Jalisco y otros; el trigo en Sonora y el sorgo en Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa.

- Por otra parte, la proponente menciona que la dependencia alimentaria arroja cifras preocupantes pone como ejemplo que: en soya y maíz amarillo, dependemos en un 98%; en arroz en un 80%; en trigo en un 50% y cárnicos en un 30%. Sobre la actividad pecuaria mexicana afirma que ha sufrido con gran intensidad la competencia desleal generada por los altos subsidios que otorgan los países exportadores de carne y leche y por el desplazamiento desleal de sus excedentes comerciales a través de la exportación.
- Por lo anterior, la proponente señala que resulta indispensable realizar modificaciones, adecuaciones y ajustes en la legislación, para garantizar la aplicación de los apoyos, la realización de una nueva infraestructura apropiada, el acceso fluido y eficiente a los insumos, créditos, sistemas de capacitación y asistencia técnica. De esta forma la presente iniciativa tiene como objetivo que las instituciones encargadas de la producción de alimentos se sigan fortaleciendo de tal manera que puedan garantizar el derecho a la alimentación, obligando al Estado a establecer condiciones para el desarrollo humano y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales.

III.- TEXTO NORMATIVO

A continuación, se presenta un Cuadro Comparativo sobre las reformas y adiciones propuestas a los artículos 1, 5, 7, 8, 178, 182 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Texto actual de la LDRS	Modificación propuesta
Artículo 1o.-... ...	**Artículo 1o.-**... ...



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.	Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a **alcanzar y mantener la seguridad alimentaria de la población; y elevar** de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.
Artículo 5o.- ... I. a II. ... III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; **IV. a V.** ...	**Artículo 5o.-** ... I. a II. ... III. Contribuir, **asegurar y mantener** a la soberanía y seguridad alimentaria **y nutricional** de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria **como sustento en el territorio en función de su aptitud y potencial, a través de un análisis con base en un estudio de factibilidad tecnológica de productividad, de competitividad y creación de canales de comercialización a través del uso sustentable de todos los recursos productivos del país;** IV. a V. ...
Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad.	**Artículo 7o.-** Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como a través de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción, **para potenciar, la producción, productividad, rentabilidad,**

6



	empleo, ingreso y competitividad de las actividades agropecuarias, tomando en cuenta los estándares internacionales en cuanto a la calidad e inocuidad, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología.
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:	El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:
I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto;	I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en su conjunto;
II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia;	II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural **mediante la capitalización, desarrollo tecnológico, mejoramiento de las capacidades de organización económica y de participación organizada en las cadenas de valor agregado**, para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia;
III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, fortalecer y ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior;	III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda nacional, **mediante el diseño y ejecución de políticas integrales y sustentables para** fortalecer y ampliar el mercado interno, **que incorporen desde las dimensiones técnicas y económicas** así como mejorar los términos de intercambio comercial con el exterior;
	IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina **e indígena, garantizar el respeto de sus culturas; propiciar** el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la



IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio; **V. a VI.** ...	población rural a la alimentación y los términos de intercambio; **V. a VI. ...** **VII. Fomentar la producción y distribución de semillas conforme a la Ley en la materia sobre los cultivos básicos y estratégicos, para que se lleve a cabo prioritariamente por empresas e instituciones nacionales aprovechando todo el potencial de las condiciones prevalecientes en las regiones agroecológicas del país; y** **VIII. Los demás que determine la presente Ley y su reglamento.**
Artículo 8o.-... Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios.	**Artículo 8o.-**... Para lo anterior, el Estado **establecerá condiciones para el desarrollo humano, y mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, como respuesta a los fenómenos de migración, cambio generacional, transformación productiva y globalización, que permitan a la población rural revertir el actual deterioro y afirmar su arraigo y dominio de los territorios rurales, con base en la apropiación creciente del valor comercial de los productos agroalimentarios, recursos de las localidades y regiones, para la alimentación de la actual y futuras generaciones, como base de la producción nacional agropecuaria, además de** formular y llevar a cabo programas de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, de las entidades federativas, y los municipios.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Artículo 178.- El Estado establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional.	**Artículo 178.-** El Estado establecerá **políticas para asegurar y mantener** el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional **con apego al artículo 7 de esta Ley**.
Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.	**Artículo 182.-** Las acciones para la soberanía y la seguridad **agroalimentaria** deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, **para fortalecer y aumentar las capacidades productivas, asociativas y de gestión de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, nacionaleros, y sus organizaciones, en un sistema productivo eficiente y equilibrado, tanto económicamente como socialmente, que contribuya a la Seguridad Agroalimentaria, y permita una relación justa y equitativa en sus intercambios comerciales con el mercado nacional y mundial,** impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.
Artículo 183.- Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos	**Artículo 183.-** Para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción en los siguientes aspectos: **I. Producir mayoritariamente en el país todos los alimentos estratégicos de los productos básicos, dependiendo de las regiones productivas, para satisfacer las necesidades básicas de consumo de la población, priorizando la atención de la población de los grupos vulnerables y marginados;** II. La identificación de la demanda interna de consumo de productos

9



básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación;	básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación;
II. La identificación de los factores de riesgo asociados con los alimentos, para la elaboración de diagnósticos que permitan establecer acciones en campo o comerciales para asegurar el abasto;	**III.** La identificación de los factores de riesgo asociados con los alimentos, para la elaboración de diagnósticos que permitan establecer acciones en campo o comerciales para asegurar el abasto;
III. La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en las cadenas alimentarias;	**IV.** La definición de acciones de capacitación y asistencia técnica, y el impulso a proyectos de investigación en las cadenas alimentarias;
IV. El impulso de acciones para mejorar y certificar la calidad de los alimentos y desarrollar su promoción comercial;	**V.** El impulso de acciones para mejorar y certificar la calidad de los alimentos y desarrollar su promoción comercial;
V. El establecimiento de compromisos de productividad y calidad por parte de los productores, dependiendo del tipo de productos de que se trate, sean los de la dieta básica o los destinados para el mercado internacional;	**VI.** El establecimiento de compromisos de productividad y calidad por parte de los productores, dependiendo del tipo de productos de que se trate, sean los de la dieta básica o los destinados para el mercado internacional;
VI. La elaboración y difusión de guías sobre prácticas sustentables en las diferentes etapas de las cadenas agroalimentarias;	**VII.** La elaboración y difusión de guías sobre prácticas sustentables en las diferentes etapas de las cadenas agroalimentarias;
VII. La instrumentación de programas y acciones de protección del medio ambiente para la evaluación de los costos ambientales derivados de las actividades productivas del sector; y	**VIII.** La instrumentación de programas y acciones de protección del medio ambiente para la evaluación de los costos ambientales derivados de las actividades productivas del sector; y
VIII. La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garanticen el cumplimiento de los programas	**IX.** La aplicación de medidas de certidumbre económica, financiera y comercial que garanticen el cumplimiento de los programas



productivos agroalimentarios referidos en el articulo 180.	productivos agroalimentarios referidos en el articulo 180.

IV.- CONSIDERACIONES

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que:

PRIMERO. Con respecto al desarrollo rural sustentable y abasto de alimentos básicos nuestra Carta Marga en su artículo 27, fracción XX señala lo siguiente:

Artículo 27. ...

...
...
...
...
...
...
...
...
...

I. a XIX. ...

XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

SEGUNDO. Al respecto la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable define en su artículo 3 el término seguridad alimentaria como el abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población. No obstante el artículo 1 de la misma Ley no hace referencia a la seguridad alimentaria como materia de interés público, por lo que estás Comisiones Unidas coinciden con la Proponente en cuanto a la reforma



y adición sugerida al artículo 1 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Señalando que el término correcto es soberanía y seguridad alimentaria cuya redacción se adecúa para el dictamen.

TERCERO. En cuanto a la reforma y adiciones propuestas al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, hay que considerar que seguridad alimentaria y abasto de alimentos están asociados al término soberanía alimentaria, de esta forma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su fracción XXXIII, define el término soberanía alimentaria como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. Por esta razón, estas Comisiones Unidas consideran fundamental mantener en el marco legal rural el término soberanía en el artículo 5 fracción de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Igualmente se señala que considerando el artículo 3 de la misma ley, el termino seguridad alimentaria y nutricional no está en armonía con el término de seguridad alimentaria que está en la fracción XXVIII, por lo que estas Comisiones Unidas coinciden en mantener el término seguridad alimentaria. Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden en la importancia de que el impulso en la producción agropecuaria nacional considere el uso sustentable de los recursos productivos nacionales basados en análisis integrales de factibilidad tecnológica, competitividad y creación de canales de comercialización; sin embargo, la redacción de la adición propuesta es confusa y reiterativa en cuanto a que la factibilidad tecnológica de la productividad comprende la aptitud y potencial. Además, tales análisis integrales abarcan múltiples estudios particulares en espacio y tiempo; por regiones, productos e intereses de los productores por lo que un solo estudio no puede proveer la información para dicho análisis; consecuentemente, estas Comisiones Unidas coinciden en que esta adición al artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no se debe aceptar.

CUARTO. Sobre las adiciones y reformas al artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estas adiciones discurren en cuestiones de productividad, desarrollo tecnológico, políticas integrales, cultivos y reconocimiento a los pueblos indígenas y respeto a sus culturas. Igualmente cabe decir que nuestra Carta Magna en su artículo 2, apartado B, fracción VII, señala que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades federales, estatales y municipales tienen entre sus obligaciones:



apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos. Por otra parte, con relación al respeto a la cultura en el sector rural, el término es reiterativo ya que está contemplando actualmente en los artículos 49 y 53 de la Ley en comento. De esta forma la adición sugerida por la proponente en el artículo 7, fracción IV del término indígena en cuanto a fortalecer la economía indígena, están en armonía jurídica con nuestra Constitución.

QUINTO. Continuando con las reformas propuestas al artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, en cuanto a las adiciones que la proponente sugiere incorporar en el primer párrafo del artículo en comento junto con las adiciones sugeridas a las fracciones II y III del mismo artículo, tales adiciones se encuentran ya debidamente desarrolladas en los siguientes de la Ley en comento: "Capítulo I.- Del Fomento a las Actividades Económicas del Desarrollo Rural (artículo 32, fracción IV)"; "Capítulo II.- De la Investigación y Transferencia Tecnológica"; "Capítulo III. De la Asistencia Técnica"; "Capítulo IV. De la Reconversión Productiva Sustentable"; "Capítulo V. De la Capitalización Rural"; "Capítulo VI. De la Infraestructura Hidroagrícola, Electrificación y Caminos Rurales"; y finalmente en el "Capítulo VII. Del Incremento de la Productividad y la Formación y Consolidación de Empresas Rurales".
Por lo anterior, se considera que tales reformas propuestas son repetitivas de lo que ya contiene la Ley y que la forma en que se presenta en algunos casos puede ser restrictiva para un propósito general siendo el caso de la adición sugerida a la fracción II ya que lo reduce a la consideración del término "mediante". Por lo que estas Comisiones Unidas coinciden en que dichas adiciones son innecesarias.

SEXTO. Por otra parte, con respecto a la adición de una fracción VII. al artículo 7 de la Ley de Desarrollo sustentable en lo que se refiere a producción y distribución de semillas en materia de cultivos básicos y estratégicos, no está en armonía con el término que emplea y define la LDRS en su artículo 3, fracción XXIII denominado como productos básicos estratégicos; igualmente su redacción es reiterativa en cuanto al aprovechamiento del potencial de las diversas regiones agroecológicas del país, ya que en el artículo 55, fracción III, se señala que: los apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán entre otros propósitos: "fomentar el uso eficiente de las tierras de acuerdo con las condiciones agroambientales, y disponibilidad de agua y otros elementos para la producción"



Por lo anteriormente dicho estás Comisiones Unidas coinciden modificar la redacción de esta adición.

SÉPTIMO. Sobre la adición al artículo 8, con lo señalado en el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que especifica que el desarrollo rural sustentable comprende todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, consecuentemente su contenido es reiterativo. Sobre desarrollo humano la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 41 segundo párrafo señala lo siguiente:

> *Artículo 41.- ...*
>
> *Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularán y ejecutarán bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.*

En consecuencia, las Comisiones Unidas consideran desechar esta adición al artículo 8.

OCTAVO. Con respecto a la adición al artículo 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable referente a establecer políticas que aseguren y mantengan el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos con apego al artículo 7 de la Ley en comento, estas Comisiones Unidas coinciden con lo expresado por la proponente por lo que no tienen alguna observación al respecto.

NOVENO. Sobre la adición y reforma al artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente en cuanto a la importancia de hacer énfasis en los tipos de productores y la necesidad de fortalecer y aumentar sus capacidades productivas, sus organizaciones con miras a lograr sistemas productivos eficientes y equilibrados. No obstante, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable define y emplea el término seguridad alimentaria en su artículo 3, fracción XXVIII, por lo que el término propuesto en la redacción de la reforma: "seguridad agroalimentaria", no está en armonía con la terminología de la Ley



Desarrollo Rural Sustentable. En cuanto a la adición que se hace con respecto a: "que permita una relación justa y equitativa en sus intercambios comerciales con el mercado nacional y mundial"; estas Comisiones Unidas consideran que el sentido comercial nacional y mundial de la adición no tiene relación con el sentido de fomento que tiene el artículo 82; igualmente los aspectos de comercialización en el sector rural son ya abordados por el artículo 72 de la LDRS en cuanto a un entorno de globalización económica y por el artículo 105 que a la letra dice:

Artículo 105.- La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos:

I. Establecer e instrumentar reglas claras y equitativas para el intercambio de productos ofertados por la sociedad rural, tanto en el mercado interior como exterior;

II. a X. ...

En consecuencia, estas Comisiones Unidas señalan la necesidad de modificar la adición propuesta.

DÉCIMO. En cuanto a la reforma y adiciones propuestas para el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estas Comisiones Unidas coinciden en cuanto a la importancia de satisfacer las necesidades básicas de consumo de la población, sin embargo, recordando el considerando tercero de este dictamen, donde se señaló que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su fracción XXXIII, define el término soberanía alimentaria como la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción nacional. El término prioriza la producción nacional, pero mantiene abierta la posibilidad de que existan déficits nacionales para el abasto de diversos productos agropecuarios; debido a que las condiciones geográficas y ambientales del país pudieran provocar que algunos productos básicos y estratégicos y otros más no se puedan producir en cantidades óptimas para cubrir el abasto poblacional, por lo que sería necesario que puedan ser cubiertos a través de importaciones vía comercio internacional. Por esta razón, estas Comisiones Unidas consideran necesario modificar la redacción propuesta a la adición de la fracción I sustituyendo el término "producir mayoritariamente en el país" por "fomentar la producción en el país". Igualmente, la adición en la misma fracción I del término "alimentos estratégicos de los productos básicos" no está en armonía con el término definido por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 3, fracción XXIII de productos básicos y estratégicos, por lo que estas



Comisiones Unidas consideran fundamental emplear el término ya descrito por la Ley en comento. Finalmente, la parte final de la adición propuesta al artículo 183 que menciona la satisfacción de las necesidades de consumo de la población, priorizando la atención de grupos vulnerables, es otro objetivo por sí mismo, además del fomento a la producción nacional; bajo esta consideración, la satisfacción de necesidades y la priorización a grupos vulnerables son aspectos que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ya menciona, por lo que sería reiterativa su adición, particularmente si se considera el artículo 118, párrafo segundo y el artículo 154 primer párrafo, el cual dice textualmente:

> *Artículo 154.- Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.*
>
> ...
> *I. a VI. ...*

DECIMO PRIMERO. Por lo anterior, estas Comisiones Unidas, consideramos aprobar esta Iniciativa de Ley, con modificaciones a algunas de las reformas y adiciones propuestas, ya mencionadas en los considerandos anteriores.

Por lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos acuerdan el siguiente:

V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1o, párrafo tercero; 7o, fracciones IV, V y VI; 178; 182 y 183, fracción I, y se adiciona una fracción VII al artículo 7o; todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 1o.- ...

...

Se considera de interés público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y



comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a **elevar la calidad de vida de la población rural, además de procurar la seguridad y soberanía alimentaria nacional,** según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución.

Artículo 7o.- ...

...

I. a III ...

IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina **e indígena, propiciar** el autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la población rural a la alimentación y los términos de intercambio;

V. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso;

VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población; y

VII. Fomentar la producción y distribución de semillas y sus recursos genéticos conforme a la Ley en la materia, para apoyar la producción de alimentos y que esta actividad se lleve a cabo prioritariamente por instituciones y organizaciones nacionales.

Artículo 178.- El Estado establecerá **políticas para fomentar y fortalecer** el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional **con apego al artículo 7 y demás disposiciones relativas de esta Ley**.

Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, **de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza,** impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.



Artículo 183.- ...

I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos y estratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación, **fomentando la producción en el país de acuerdo a las regiones productivas;**

II. a VIII. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 5 de octubre de 2017.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

La Comisión de Desarrollo Rural

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo
Presidente

Sen. Carmen Dorantes Martínez
Secretaria

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Secretaria

Sen. Esteban Albarrán Mendoza
Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez
Integrante

19



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1°, 7 FRACCIONES IV Y VII, 178, 182 Y 183 DE LA LEY DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



15. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 72, 104, 105 y 149 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que presentó la Senadora Luisa María Calderón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 29 de septiembre de 2016.

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las cuales se valoró integralmente la iniciativa, desechándose las reformas a los artículos improcedentes.

Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta el sentido del Dictamen.

1



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

I.- ANTECEDENTES

Con fecha de 29 de septiembre de 2016 se presentó en el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen.

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-1P2A.-1481. de la Mesa Directiva se recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del presente dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Entre los motivos que fundamentan la iniciativa, para sustentar las reformas que propone a algunos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la proponente señala lo siguiente:

- La proponente señala que, en los últimos lustros, el campo mexicano ha experimentado una fuerte competencia internacional por la apertura de nuestro mercado, especialmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta feroz competencia, puede ser llevadera para los grandes productores, que aprovechando economías de escala pueden lograr tener precios competitivos en el mercado nacional e internacional. Sin embargo, en el caso de los pequeños productores la cuestión es más complicada, ya que los pequeños productores, además de ser los más numerosos a escala mundial, suelen ser los más pobres del campo. En el caso de México, los agricultores a pequeña escala son más de 70 por ciento de los productores, es decir casi cuatro millones, y sus ingresos no superan la línea de pobreza. Además, producen 30 millones de toneladas de productos, aproximadamente 12 por ciento de la producción agrícola nacional.

- Por lo anterior la promovente menciona que se debe de invertir prioritariamente en el pequeño productor, para que cerca de cuatro millones de productores y sus familias, aumenten sus ingresos y superen la línea de pobreza. Aunque la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) ha emitido recomendaciones al respecto, el Gobierno Federal sigue brindando la mayor parte de los recursos a los grandes productores, ante esto los productores



del campo y organizaciones sociales han propuesto reorientar los apoyos del gobierno federal que se dan a los productores y empresas grandes hacia los pequeños agricultores, lo que representaría canalizar 35 mil millones de pesos (MDP) del presupuesto para 2017, en beneficio de este sector que aporta 40% de la producción nacional.

- La proponente establece que la importancia de los pequeños productores es evidente, ya que cita que los pequeños productores conforman 70% de las unidades de producción, cultivan el 16 por ciento de la superficie laborable del país y producen uno de cada siete alimentos. Además de que siete de cada diez productores de cinco hectáreas o menos, aportan 40% de la producción de granos básicos; generan seis de cada diez empleos contratados y todas las empresas agroindustriales trabajan con pequeños agricultores. A partir de estos números, la proponente da cuenta de la relevancia que tiene enfocar el gasto público del sector agropecuario a los pequeños productores, ya que al reorientar los recursos hacia éstos, se puede trabajar para que las y los pequeños productores puedan salir de la línea de pobreza, desarrollar capacidades, organizarse en cadenas de valor y tener una vida más digna, brindando además a nuestro campo mexicano la oportunidad de brindar seguridad y soberanía alimentaria para las y los mexicanos.

- La proponente define "cadena de valor"' en la agricultura como aquella que identifica al conjunto de actores y actividades que llevan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo final, agregándose valor al producto en cada etapa. Una cadena de valor puede ser vertical o una red entre varias organizaciones empresariales independientes, y puede incluir procesamiento, envasado, almacenamiento, transporte y distribución. Al respecto la proponente menciona que los términos "cadena de valor" y "cadena de suministro" suelen ser usados indistintamente. En general, las cadenas de valor agrícolas tradicionales están regidas a través de transacciones en el mercado al contado, involucrando una gran cantidad de pequeños productores y minoristas. Las cadenas de valor modernas se caracterizan por su coordinación vertical, la consolidación de la base de abastecimiento, el procesamiento agroindustrial y el uso de estándares a lo largo de la cadena. De esta forma, la promoción de cadenas de valor en los



pequeños productores, que representan el 70% de las unidades de producción, que significan alrededor de 4 millones de personas (y sus familias) y generan 6 de cada 10 empleos.

- La proponente menciona que el Gobierno Federal aparentemente comienza a tener esta orientación hacia los pequeños productores en las reglas de operación del 2016, en donde se promueve una mayor inclusión hacia ellos con dos programas especialmente diseñados para favorecer el desarrollo de los productores y las unidades productivas de menor tamaño (el Programa de Productividad Rural y el Programa de Apoyos a Pequeños Productores). Sin embargo, esta orientación puede ser temporal. ya que las reglas de operación son modificadas cada año, por lo que las modificaciones deben hacerse patentes en la Ley. Además de que los programas están enfocados en apoyar al pequeño productor, para que en un plazo determinado pueda duplicar su producción. Sin embargo, hace falta el esfuerzo de establecer cadenas de valor de pequeños productores, para que aprovechando las economías de escala se puedan competir en el mercado nacional e internacional.

- La proponente cita que la FAO en su documento "Hacia organizaciones de productores autosuficientes y orientadas al mercado" estipuló los siguientes puntos de relevancia: se espera que continúe el rápido crecimiento de la clase media de muchas regiones y países en desarrollo, impulsado por una mejora de la gobernanza y la política económica. Acompañado de políticas favorables a la actividad empresarial, el aumento de la población y la rápida urbanización dicho crecimiento sostenido de la demanda y el gasto de los consumidores significa que los mercados actuales ofrecen mejores oportunidades a los agricultores, entre ellos los pequeños agricultores. Sin embargo, a los pequeños productores les cuesta mantenerse al ritmo de las demandas de los nuevos mercados, que requieren mayor volumen, regularidad del suministro y mayor calidad, así que se encuentran en una situación de desventaja debido a sus altos costes de transacción y a su escaso poder de negociación. De esta forma, la FAO viene trabajando con una serie de organizaciones de productores a nivel de federaciones y países en las regiones de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), para elaborar



mecanismos institucionales que mejoren la participación equitativa de los pequeños productores en las cadenas de valor.

- La proponente cita también de dicho documento de la ONU, los siguientes aspectos:
  a) que los agronegocios se enfrentan a numerosos riesgos a la hora de adquirir productos de pequeños productores, que van desde la irregularidad de la calidad y la cantidad del suministro, a las ventas laterales y al riesgo para la reputación que conlleva la percepción pública de las explotaciones de pequeños productores, igualmente señala que las organizaciones de productores contribuyen a minimizar estos riesgos al permanecer en continuo diálogo con los compradores y orientar a los pequeños productores para responder a las necesidades del mercado

  b) La necesidad de un compromiso público a largo plazo con intervenciones a corto plazo considerando que las organizaciones de productores aprenden y crecen, a veces fracasan y a menudo necesitan mucho tiempo para madurar. Las organizaciones necesitan un compromiso a largo plazo del sector público, basado en intervenciones sostenibles a corto plazo con claras estrategias de retirada.

  c) La necesidad de apoyar la innovación en sentido amplio. Esto significa proporcionar refuerzo institucional a la provisión de servicios empresariales y agrícolas y situar los centros de innovación y de tecnología industrial lo más cerca posibles de las pequeñas y medianas empresas agrícolas y las organizaciones de productores.

- Considerando lo anterior, la proponente señala que se debe priorizar la promoción de cadenas de valor de pequeños productores para que la generación de economías de escala entre estos, les permitan elevar sus ingresos, la organización de manera horizontal y vertical les permitan tener mayor capacidad de negociación, surtiendo al mercado local, ofreciendo por tanto productos más frescos y económicos por la cercanía, (que productos del mercado internacional). De esta forma la promoción de cadenas de valor de pequeños productores, como un esfuerzo sostenido a largo plazo puede permitir el desarrollo de soluciones innovadoras para problemáticas antiguas.



Lo anterior puede permitir también, el mejoramiento de la calidad de vida de 4 millones de productores y sus familias, mayor cohesión y capital social e incluso de manera indirecta reducción de la inseguridad en algunas zonas rurales en dónde pueda darse la inseguridad por falta de acceso a trabajo y bajos ingresos. En consecuencia, la promoción de forma decidida de cadenas de valor de pequeños productores podría proveer a los comedores comunitarios de la Cruzada contra el Hambre de productos más frescos y nutritivos; ya que estos comedores, han sido ampliamente criticados por hacer uso de enlatados, altos en valor calórico y sales, que lejos de nutrir a las y los ciudadanos, únicamente les quitan el hambre y les engordan.

- Por lo anterior, se proponen reformas a la fracción IX del artículo 32, el párrafo tercero del artículo 36, la fracción I del artículo 37, el párrafo segundo del artículo 53, los artículos 62, 72, 104, la fracción II del artículo 105, la fracción III del artículo 149, así como el artículo 182, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de acuerdo con el Texto Normativo que se expone en el siguiente apartado.

III.- TEXTO NORMATIVO

A continuación, se presenta un Cuadro Comparativo sobre las reformas y adiciones propuestas a los artículos 32, 36, 37, 53, 62, 72, 104, 105, 149, 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Texto actual de la LDRS	Modificación propuesta
Artículo 32.- ...	**Artículo 32.-** ...
...	...
...	...
I. a VIII. ...	**I. a VIII.** ...
IX. El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas productivas, así como el desarrollo de la infraestructura industrial en el medio rural;	**IX.** El impulso a la industria, agroindustria y la integración de cadenas productivas, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores**, así como el desarrollo de la infraestructura industrial en el medio rural;



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

X. a **XIV.** ...	**X.** a **XIV.** ...
Artículo 36.- ... ... La Secretaría, a través de las dependencias correspondientes sancionará los convenios de cooperación para la investigación científico-tecnológica con las instituciones de investigación nacionales y con los organismos internacionales para la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y de desarrollo rural sustentable, relativos a los diferentes aspectos de las cadenas productivas del sector.	**Artículo 36.-** ... ... La Secretaría, a través de las dependencias correspondientes sancionará los convenios de cooperación para la investigación científico-tecnológica con las instituciones de investigación nacionales y con los organismos internacionales para la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y de desarrollo rural sustentable, relativos a los diferentes aspectos de las cadenas productivas del sector, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.**
Artículo 37.- ... I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural; II. a XVIII. ...	**Artículo 37.-** ... I. Atender las necesidades en materia de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no agropecuario que se desarrollan en el medio rural; **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores**. II. a XVIII. ...
Artículo 53.- ... El Gobierno Federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el	**Artículo 53.-** ... El Gobierno Federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores, individualmente u organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la diversificación de las cadenas productivas, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores,** generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el deterioro de los recursos naturales,

7



paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.	producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, así como prevenir los desastres naturales. El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables para su ejecución.
Artículo 62.- Los apoyos para la capitalización fomentarán el desarrollo de procesos tendientes a elevar la productividad de los factores de la producción, la rentabilidad, la conservación y el manejo de los recursos naturales de las unidades productivas. Además, el Gobierno Federal otorgará estímulos complementarios para la adopción de tecnologías apropiadas, reconversión de procesos, consolidación de la organización económica e integración de las cadenas productivas.	**Artículo 62.-** Los apoyos para la capitalización fomentarán el desarrollo de procesos tendientes a elevar la productividad de los factores de la producción, la rentabilidad, la conservación y el manejo de los recursos naturales de las unidades productivas. Además, el Gobierno Federal otorgará estímulos complementarios para la adopción de tecnologías apropiadas, reconversión de procesos, consolidación de la organización económica e integración de las cadenas productivas, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.**
Artículo 72.- Las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales para un ejercicio fiscal y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, el acceso a alimentos con menor precio, el mejoramiento de las tierras y los servicios ambientales y la reducción de las condiciones de desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su competitividad en el entorno de la globalización económica.	**Artículo 72.-** Las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales para un ejercicio fiscal y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores**, el acceso a alimentos con menor precio, el mejoramiento de las tierras y los servicios ambientales y la reducción de las condiciones de desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su competitividad en el entorno de la globalización económica.
Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las	**Artículo 104.-** Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.	regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores**, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.
Artículo 105.- ... I. ... II. Procurar una mayor articulación de la producción primaria con los procesos de comercialización y transformación, así como elevar la competitividad del sector rural y de las cadenas productivas del mismo; III. a X. ...	**Artículo 105**.- ... I. ... II. Procurar una mayor articulación de la producción primaria con los procesos de comercialización y transformación, así como elevar la competitividad del sector rural y de las cadenas productivas del mismo; **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.** III. a X. ...
Artículo 149.- La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas-Producto, como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto: I. a II. ...	**Artículo 149**.- La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas-Producto, como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto: I. a II. ...

9



III. Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada sistema; IV. a VI.	III. Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada sistema; **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños prioritarios.** IV. a VI. ... ...
Artículo 182.- Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.	**Artículo 182.-** Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes, impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos, **las cuales priorizarán la inclusión de pequeños productores.**

IV.- CONSIDERACIONES

De acuerdo con el análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que:

PRIMERO. Sobre "cadenas productivas", y de acuerdo con la fracción VIII del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que a la letra dice:

> *Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:*
> *I. a VII. ...*
>
> *VIII. Cadenas Productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de empresas que añaden valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico;*
>
> *IX. a XVIII. ...*



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente, en cuanto a la importancia que tiene favorecer y priorizar la inclusión de pequeños productores en el ámbito rural, no obstante es necesario destacar que el término cadenas productivas es el término al que hace referencia tanto la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cada uno de los artículos a los que se hace referencia en esta iniciativa de Ley y que dicho término está en armonía con la descripción de la fracción VIII del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ambas leyes no hacen referencia al término: cadenas de valor.

SEGUNDO. Considerando lo anterior, con respecto a la adición propuesta por la proponente al artículo 32 de la LDRS, cabe mencionar lo que señala el artículo 116 de la Ley en comento que a la letra dice:

> *Artículo 116.- La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas.*
>
> *Tendrán preferencia los pequeños productores y agentes económicos con bajos ingresos, las zonas del país con menor desarrollo económico y social, los proyectos productivos rentables o los que sean altamente generadores de empleo, así como la integración y fortalecimiento de la banca social. Serán reconocidas como parte de la banca social, todas aquellas instituciones financieras no públicas que, sin fines de lucro, busquen satisfacer las necesidades de servicios financieros de los agentes de la sociedad rural, en los términos de la legislación aplicable.*
>
> ...

En consecuencia, estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente en cuanto a la necesidad de priorizar la inclusión en términos sociales y económicos dentro del sector rural; sin embargo, considerando lo establecido en el artículo 116, estas Comisiones consideran innecesario y reiterativo señalar la priorización de inclusión de pequeños productores ya que el artículo 116 sobre políticas de financiamiento expresa en su segundo párrafo que tendrán prioridad los pequeños productores.

TERCERO. Al respecto de las adiciones sugeridas al artículo 36 en su último párrafo y en la fracción I del artículo 37 de la LDRS, estas Comisiones Unidas destacan que el artículo 41 de la LDRS, dice:



> ***Artículo 41.-*** *Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, mismas que se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y consolidación productiva y social. El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población rural y sus organizaciones.*
>
> *Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularán y ejecutarán bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a aquellos que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social.*

Al respecto, estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente en cuanto a los criterios de inclusión social en el ámbito rural; sin embargo considerando lo señalado en el artículo 41, la LDRS considera que la transferencia de tecnología derivada de acciones de investigación agropecuaria es sustentable e integral, considerando además criterios de inclusión y de participación de los actores sociales del campo mexicano, por lo que las adiciones sugeridas por la proponente al artículo 36 y 37 son innecesarias ya que la LDRS contempla dichos enfoques de inclusión.

CUARTO. Con respecto a la adición que considera priorizar la inclusión de pequeños productores en el segundo párrafo del artículo 53 de la LDRS, hay que señalar que el artículo 54 de la LDRS, a la letra dice:

> ***Artículo 54.-*** *El Estado creará los instrumentos de política que aseguren alternativas para las unidades de producción o las ramas del campo que vayan quedando rezagadas o excluidas del desarrollo. Para ello tendrán preferencia las actividades económicas que preserven el equilibrio de los agroecosistemas.*

En consecuencia, estas Comisiones Unidas consideran innecesaria la adición sugerida por la proponente, ya que el artículo 54 señala que el Estado debe crear instrumentos de política necesarias para evitar la exclusión de las unidades productivas.



QUINTO. Con respecto a la adición sugerida al artículo 62, relacionada con priorizar la inclusión de pequeños propietarios en cuanto a estímulos complementario en la integración de cadenas productivas; estas Comisiones Unidas consideran que es innecesaria debido a que el artículo 41 de la LDRS ya señala que las acciones en cuanto a capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se deberán ejecutar bajo criterios de inclusión y participación.

SEXTO. Con respecto a la adición en términos de priorizar la inclusión de pequeños propietarios en cadenas productivas que la proponente sugiere realizar en los artículos 72, 104, 105 y 149 de la LDRS, estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente en cuanto a que la estructura y/o integración dentro de las cadenas productivas para elevar la competitividad dentro del sector rural necesitan criterios de inclusión sobre pequeños productores, por lo que estas Comisiones Unidas están de acuerdo en cuanto a las reformas sugeridas por la proponente.

SEPTIMO. La proponente sugiere también una adición al artículo 182, en términos de que en acciones de soberanía y seguridad alimentaria de manera prioritaria se incluya a los pequeños productores. Al respecto estas Comisiones Unidas coinciden con la proponente en cuanto a la importancia y necesidad de que se adicione dicho párrafo en términos de inclusión de los pequeños productores. Sin embargo, es necesario considerar que mediante oficio número DGPL-1P2A.- 189 con fecha de 22 de febrero de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la República remitió Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el dictamen sobre dicha Minuta es, desechar la modificación propuesta por la Cámara revisora para quedar en los términos siguientes:

> ***Artículo 182.***- *Las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria deberán abarcar a todos los productores y agentes intervinientes,* ***de manera prioritaria a los pequeños productores en condiciones de pobreza,*** *impulsando la integración de las cadenas productivas de alimentos.*

Consecuentemente la adición sugerida por la proponente coincide con el dictamen de la reforma de la Minuta en comento; estando actualmente pendiente su aprobación para los trámites legales correspondientes.



V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 Y 149 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 72; 104; 105, fracción II, y 149, fracción III, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 72.- Las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales para un ejercicio fiscal y las proyectadas en un horizonte de mediano plazo, promoverán la producción de bienes y servicios que contribuyan a fortalecer la producción interna y la balanza comercial agroalimentaria, las adecuaciones estructurales a las cadenas productivas, **fomentando la inclusión de los pequeños productores**, el acceso a alimentos con menor precio, el mejoramiento de las tierras y los servicios ambientales y la reducción de las condiciones de desigualdad entre los productores, así como los mecanismos que permitan lograr su competitividad en el entorno de la globalización económica.

Artículo 104.- Se promoverá y apoyará la comercialización agropecuaria y demás bienes y servicios que se realicen en el ámbito de las regiones rurales, mediante esquemas que permitan coordinar los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades públicas, de los agentes de la sociedad rural y sus organizaciones económicas, con el fin de lograr una mejor integración de la producción primaria con los procesos de comercialización, acreditando la condición sanitaria, de calidad e inocuidad, el carácter orgánico o sustentable de los productos y procesos productivos y elevando la competitividad de las cadenas productivas, **fomentando la inclusión de pequeños productores**, así como impulsar la formación y consolidación de las empresas comercializadoras y de los mercados que a su vez permitan asegurar el abasto interno y aumentar la competitividad del sector, en concordancia con las normas y tratados internacionales aplicables en la materia.

Artículo 105.- ...

I. ...

II. Procurar una mayor articulación de la producción primaria con los procesos de comercialización y transformación, así como elevar la competitividad del sector



rural y de las cadenas productivas del mismo, **fomentando la inclusión de pequeños productores;**

III. a X. ...

Artículo 149.- ...

I. a II. ...

III. Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada sistema, **fomentando la inclusión de pequeños productores.**

IV. a VI. ...

...

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 5 de octubre de 2017.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

La Comisión de Desarrollo Rural

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo
Presidente

Sen. Carmen Dorantes Martínez
Secretaria

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Secretaria

Sen. Esteban Albarrán Mendoza
Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez
Integrante

16



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 72, 104, 105 FRACCIÓN II Y 149 FRACCIÓN III DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



16. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. El caso turnado corresponde a la resolución de la Cámara de Diputados donde se resuelve enviar a la Cámara de Senadores, para efectos de lo dispuesto por la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente que contiene la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Una vez recibida la misma por las comisiones, sus integrantes se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a la facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, encargadas de analizar y dictaminar la Minuta con Proyecto de Decreto, desarrollaron los siguientes trabajos conforme el siguiente procedimiento

I. En el capítulo "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

II. En el capítulo correspondiente a "Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió. Se analizan los argumentos vertidos por las comisiones dictaminadoras y el Pleno de la Cámara de Diputados para adecuar el texto del inciso h) del párrafo primero, del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

1



III. En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen; y

IV. Finalmente, el proyecto de Acuerdo que expresa el sentido del presente Dictamen.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO. En sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto de 2016, la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la Comisión Permanente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h del artículo 21 y se reforma la fracción I del Artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

SEGUNDO. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con fundamento en los artículos 21, fracción III y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Desarrollo Rural mediante el Oficio No. CP2R1A.-3803.

TERCERO. Con fecha de 28 de septiembre del año 2016, por acuerdo de la Mesa Directiva y en atención a la solicitud de este Órgano Legislativo, con fundamento en el artículo 183, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se concedió prórroga para su estudio y dictamen correspondiente.

CUARTO. La Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados emitió Dictamen a favor de la iniciativa el 6 de diciembre de 2016.

QUINTO. El 12 de diciembre de 2016, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emitió prevención para presentar entre otros, el dictamen correspondiente al asuntos turnado a la Comisión de Desarrollo Rural: la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h del artículo 21 y se reforma la fracción I del Artículo 48 de la Ley de



Desarrollo Rural Sustentable, presentada por la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, Expediente 3375, Tercera Edición.

SEXTO. El 27 de abril de 2017, los Diputados aprobaron en lo general y en lo particular, por 399 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismo que fue turnado a la Cámara de Senadores.

SÉPTIMO. Con fecha de 27 de abril, la Cámara de Diputados, mediante Oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-2280. remitió a Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales, el expediente No. 3375 con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con número CD-LXIII-II-2P-211.

OCTAVO. Con fecha de 5 de junio de 2017, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos mediante oficio DGPL-2R2A.-73 de la Mesa Directiva, a través de la Vicepresidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz, para los efectos constitucionales correspondientes. Igualmente, con fecha de 6 de diciembre de 2017, se recibió opinión sobre la Minuta en comento, de parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Oficio con No. 110.01.01.-3967/17, con números de registro 5874 y 5880.

II.- CONTENIDO DE LA MINUTA

PRIMERO. La Minuta del presente análisis, contiene el Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

SEGUNDO. La Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, en lo sucesivo la iniciante, señala que a partir del 2 de enero de 2013 la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), lo cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación en ese mismo



año. Igualmente citó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, actualizó lo antes expuesto en su artículo 26 quedando de la siguiente forma:

> *Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión*
> *contará con las siguientes dependencias:*
>
> *Secretaría de Gobernación*
> *Secretaría de Relaciones Exteriores*
> *Secretaría de la Defensa Nacional*
> *Secretaría de Marina*
> *Secretaría de Hacienda y Crédito Público*
> *Secretaría de Desarrollo Social*
> *Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales*
> *Secretaría de Energía*
> *Secretaría de Economía*
> *Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación*
> *Secretaría de Comunicaciones y Transportes*
> *Secretaría de Educación Pública*
> *Secretaría de Salud*
> *Secretaría del Trabajo y Previsión Social*
> *Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano*
> *Secretaría de Turismo*
> *Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal*

TERCERO. A su vez la iniciante argumenta que en el apartado de transitorios del Reglamento Interior de la SEDATU, en el artículo tercero se menciona que en términos del Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Reforma Agraria, así como las que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, planeación y regulación de los centros de población, vivienda y desarrollo regional y urbano se confiere a la Secretaría de Desarrollo Social, en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas se entenderán conferidas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

CUARTO. Considerando lo anterior, la iniciante señala que es importante igualar legalmente las disposiciones mencionadas y además enfatizar las atribuciones



cedidas de la anterior Reforma Agraria a la nueva Secretaría en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ya que aún se cita a la Reforma Agraria en los artículos 21 y 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que propone las reformas descritas en el siguiente Cuadro 1.

Texto actual en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable	Reforma propuesta
Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.	**Artículo 21.-** La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) a g) ... h) **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; i) a j) ... ...
Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por: I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y	**Artículo 48.-** El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por: I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Previsión Social; Desarrollo Social y Reforma Agraria; II. a IX. ...	Previsión Social; Desarrollo Social y **de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; II. a IX. ...

CUARTO. La Minuta con Proyecto de Decreto argumenta además de lo expuesto en los considerandos anteriores que las reformas planteadas por la Diputada Rosalinda Muñoz Sánchez se consideran procedentes a fin de que la SEDATU tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Agraria, la Ley General de Asentamientos Humanos y otras Leyes, Reglamentos y Decretos y disposiciones que emita el Presidente de la República.

QUINTO. Sin embargo, la Minuta considera también que por técnica legislativa, la propuesta en comento respecto a la reforma del párrafo tercero y la adición de un inciso al artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, resulta improcedente al no incluir texto alguno que reforme el párrafo tercero de dicho artículo, por lo que al adicionar un inciso y no reformar ya el contenido se rompería con el espíritu de la Iniciativa, el cual es armonizar las atribuciones que tenía la extinta Secretaría de Reforma Agraria con la ahora SEDATU.

SEXTO. Con base en lo anterior, los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados consideraron que de acuerdo con la técnica legislativa resulta viable subsanar la propuesta hecha por la iniciante en cuanto a la reforma del párrafo tercero y la adición de un inciso al artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que en Cámara de Diputados se aprobó la reforma con modificaciones, para quedar como sigue:

> **Artículo Único.**- Se reforman el inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
>
> **Artículo 21**.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la



presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

...

...

...

Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por:

I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y **de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**;

II. a IX. ...

Artículo Transitorio

Único.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III.- TEXTO NORMATIVO

Texto actual en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable	Reforma propuesta
Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos	**Artículo 21**.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.	Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. ... ...
Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por: I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y Reforma Agraria; II. a IX. ...	**Artículo 48.**- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por: I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y **de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; II. a IX. ...

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERO. Considerando que, debido a la reestructuración de los órganos de la administración pública federal en el año 2013, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 26 se reformó para incorporar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como parte de las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo Federal y que en el artículo 41 de la misma Ley se mencionan los asuntos que le competen como dependencia del Poder Ejecutivo.



SEGUNDO. En consecuencia, en la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, en su Décimo Transitorio se señala también que: "***Décimo.-*** *La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992.*"

TERCERO. Por lo mismo estas Comisiones Unidas coinciden con la Minuta recibida de la Cámara de Diputados, en cuanto a la necesidad de considerar por técnica y armonía legislativa la sustitución sugerida en el inciso h) del artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural, en lo concerniente a sustituir el nombre o denominación de la extinta secretaria de la Reforma Agraria por el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

CUARTO. Consecuentemente, aplicando el mismo el argumento de armonía legislativa al artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estas Comisiones Unidas coinciden también en la necesidad de sustituir el nombre o denominación de la extinta Secretaria de la Reforma Agraria por el de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la fracción I del artículo en comento.

En virtud de lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos emiten el siguiente:

V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.



DICTÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman al inciso h) del párrafo primero del artículo 21 y la fracción I del artículo 48 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de Desarrollo Social; h) **Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate.

...

...

...

Artículo 48.- El Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral estará dirigido por un consejo interno conformado por:

I. Los titulares de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Educación Pública; Trabajo y Previsión Social; Desarrollo Social y **Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano**;

II. a **IX.** ...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 1 de marzo de 2018.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

La Comisión de Desarrollo Rural

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo
Presidente

Sen. Carmen Dorantes Martínez
Secretaria

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Secretaria

Sen. Esteban Albarrán Mendoza
Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez
Integrante

11



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO H) DEL PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 21 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



17. De las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 15, 52, 164 y 173 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII al artículo 3, la fracción XIX al artículo 15 y la fracción V al artículo 52; además se reforman los artículos 20, 164 y 173 respectivamente, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para introducir los conceptos de restauración y restauración productiva, presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 14 de abril de 2016.

Una vez recibida la misma por las Comisiones, sus integrantes se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral 2; 117, 135, 177 numeral 1, 178 numerales 2 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de lo siguiente:

METODOLOGÍA

En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa referida.

En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA" se sintetiza el alcance de la propuesta que se estudió.

En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO" y régimen transitorio, se plantea el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En el capítulo de "CONSIDERACIONES" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones, por las cuales se valoró integralmente la iniciativa, desechándose las reformas a los artículos improcedentes.

1



Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVOS", previa fundamentación, se manifiesta el sentido del Dictamen.

I.- ANTECEDENTES

Con fecha de 14 de abril de 2016 el Senador Salvador López Brito presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa en cuestión para su respectivo análisis y dictamen.

En esa misma fecha mediante oficio No. DGPL-2P1A.-3231.de la Mesa Directiva se recibió en la Comisión de Desarrollo Rural la iniciativa motivo de análisis del presente dictamen.

II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el objeto de incorporar el término restauración, definida como la recuperación de áreas degradadas por actividades antropogénicas y/o perturbaciones naturales, a través de prácticas de manejo y de técnicas productivas a largo plazo, las cuales permitan restablecer las funciones de ecosistemas o partes de sus componentes, permitiendo que este sea económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible. Asimismo, busca también incorporar el término restauración productiva, para tipificar el proceso a través del cual se lleva a cabo la rehabilitación del paisaje por medio de la integración de usos de suelos.
Igualmente, establece como acción dentro del Programa Especial Concurrente el impulso a los programas que fomenten la restauración productiva. Además, que la restauración y la restauración productiva sean actividades susceptibles de asistencia técnica y capacitación constante, garantizando con ello que los productores tengan acceso a información que les permita la rehabilitación del paisaje a través de los diferentes usos del suelo, promoviendo la sustentabilidad.

Entre los motivos que fundamentan la Iniciativa, para sustentar las reformas propuestas a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el proponente señala lo siguiente:



- El proponente señala que el Estado Mexicano tiene como mandato constitucional garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable, lo anterior de acuerdo el articulo 25 de nuestra Carta Magna. Tal desarrollo, debe entre otros aspectos generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional; además de fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra", conforme a lo establecido en la fracción XX del artículo 27 constitucional. Tal desarrollo debe garantizar que todas las personas en el país vivan en un ambiente sano, conforme al texto del artículo cuarto de la Constitución. Para lograr todo lo anterior es necesario que el Estado empiece a diseñar políticas públicas bajo los principios del desarrollo sostenible, tal y como se marca en los recién firmados Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los cuáles proponen:
    - Empezar a diseñar el futuro en el cual queremos vivir, con la integración de gobiernos, sociedad civil y productores.
    - El equilibrio entre cuidado del ambiente
    - La competitividad del sector rural y el desarrollo de las comunidades del campo mexicano, exige de una visión integral y de atender a procesos internacionales que proponen soluciones para avanzar en la búsqueda de estos equilibrios.
- Igualmente, el proponente menciona que, para diseñar estrategias adecuadas, es necesario considerar que 27.4 millones de personas en México carecen de acceso a la alimentación, y su vulnerabilidad al cambio climático se deriva de una alta dependencia en recursos sensibles al clima y de una limitación económica y tecnológica. A lo anterior, el proponente añade que si bien la agricultura contribuye al cambio climático, a la vez, también se ve afectada por este fenómeno, dado que es altamente dependiente de las condiciones meteorológicas locales, se prevé que sea muy sensible a los cambios del clima en los próximos años. Las principales consecuencias se pueden derivar en una disminución de las propiedades nutricionales de algunos cultivos, así como en la capacidad de producir y cubrir la demanda de alimentos, lo que a largo plazo generará el severo encarecimiento de los mismos. Por mencionar algunos ejemplos, estas son las variaciones de precios que han tenido algunos productos en los últimos años como por ejemplo del huevo blanco, limón sin semilla y otros productos. En los casos anteriores, se puede comprobar que el incremento de los precios de mercado, es superior a los índices nacionales de



inflación, por lo que es urgente empezar a desarrollar métodos de control de abastecimiento de alimentos.

- Igualmente el proponente menciona que si bien es común señalar la alta dependencia que existe en el costo de los productos y el costo de los energéticos (petróleo). Sin embargo, tal hipótesis no es del todo funcional, pues el precio del petróleo ha roto el récord al precio más bajo y por su parte lo alimentos siguen incrementando su precio, la razón según el proponente, es entre otras, el cambio climático. Al respecto, el proponente menciona que existen iniciativas internacionales que forman vínculos de cooperación estrechos entre los sectores forestal, agrícola y pecuario. Uno de ellos es el Desafío de Bonn, bajo el cual, gobiernos, empresarios y expertos en medio ambiente y agricultura se comprometieron en 2011 a trabajar en favor de la restauración de 150 millones de hectáreas de paisajes destruidos para el año 2020. En 2014, Latinoamérica se sumó a estos esfuerzos con el lanzamiento de la Iniciativa 20x20 durante la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) en Lima, con el fin de revertir la degradación del paisaje rural en la región. En 2014, México se sumó al Desafío Bonn con el ambicioso compromiso de restaurar 8.5 millones de hectáreas deforestadas y degradadas para el año 2020. A nivel nacional, el compromiso fue adquirido por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) con un millón de hectáreas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) con 7.5 millones de hectáreas. El objetivo del Desafío de Bonn se basa en los principios de la Rehabilitación del Paisaje Forestal, que implica trabajar a través de un paisaje para el restablecimiento de las funciones del bosque a través de la participación activa, colaboración y negociación entre las partes interesadas. El compromiso es una extraordinaria oportunidad para que el Estado Mexicano introduzca como objetivo de política pública a la restauración productiva.

- El proponente define restauración productiva como un proceso a través del cual se lleva a cabo la rehabilitación del paisaje por medio de la integración de usos de suelos. Igualmente destaca que "El Desafío Bonn" no implica exclusivamente la reforestación de hectáreas, incluye también la coordinación y alineación de los sectores agropecuario y forestal, con el fin de que ambas actividades no sean excluyentes, sino que sean complementarias. Por lo que, la restauración productiva no tiene como fin desplazar al sector agropecuario,



por el contrario, busca fortalecerlo a través de una provisión integral de los servicios ambientales de bosques y selvas. De esta manera, el paisaje puede ser algo más que la producción de alimentos o de madera. Igualmente, el proponente, define a la restauración como la recuperación de áreas degradadas por actividades antropogénicas y/o perturbaciones naturales, a través de prácticas de manejo y técnicas productivas a largo plazo, que permitan restablecer las funciones del ecosistema o de partes de sus componentes, permitiendo que este sea económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible.

- El proponente destaca que un paisaje restaurado tiene el potencial de producir los alimentos necesarios dentro de los límites ecológicos sostenibles, con una provisión integral y constante de servicios ambientales forestales, empoderando a las comunidades al aumentar su participación dentro de las cadenas de valor de productos agropecuarios y forestales.
- Considerando lo anterior, el proponente menciona que la Ley vigente de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 11, que las acciones para el desarrollo rural sustentable se realizarán conforme a criterios de restauración y en el artículo 71 señala que se deberán destinar recursos para esa actividad, sin embargo, el ordenamiento omite mencionar y definir la restauración y sus respectivas actividades, razón por la cual la presente iniciativa busca complementar la ley y además alinear la legislación nacional a los compromisos internacionales que ha firmado México en los últimos años; así como también, coordinarse con otras leyes federales para trabajar en los mismos términos.
- Por lo tanto, el proponente propone que en el artículo 3° se incorporen los términos de restauración, entendida como la recuperación de áreas degradadas por actividades antropogénicas y/o perturbaciones naturales, a través de prácticas de manejo y técnicas productivas a largo plazo, que permitan restablecer las funciones del ecosistema o de partes de sus componentes, permitiendo que este sea económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible e igualmente sugiere la incorporación del término restauración productiva para tipificar el proceso a través del cual se lleva a cabo la rehabilitación del paisaje por medio de la integración de usos de suelos.
- Por otra parte, el proponente sugiere que para lograr que las actividades de restauración productiva se implementen en conjunto con los productores rurales, tales actividades de restauración se incorporen en el artículo 15, donde



se mencionan las actividades a realizar a través del Programa Especial Concurrente y como parte de los propósitos que debe perseguir la Comisión Intersecretarial en el artículo 20, ambos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Además, se propone que la restauración y la restauración productiva sean actividades candidatas de asistencia técnica y capacitación constante, garantizando así que los productores tengan acceso a información que les permita la rehabilitación del paisaje a través de la integración de los diferentes usos de suelo y promoviendo la sustentabilidad, objetivos planteados dentro de las modificaciones propuestas en los artículos 52, 164, y 173, también de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

III.- TEXTO NORMATIVO

A continuación, se presenta un Cuadro Comparativo sobre las reformas y adiciones propuestas a los artículos anteriormente mencionados de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Texto actual de la LDRS	Modificación propuesta
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. a XXVI. XXVII. Secretaría. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; XXVIII. Seguridad Alimentaria. El abasto oportuno, suficiente e incluyente de alimentos a la población; Fracción recorrida DOF 27-01-2011 XXIX. a XXXIII. ...	**Artículo 3o**.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. a XXVI. ... **XXVII.- Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.** **XXVIII.- Restauración Productiva: La recuperación de áreas degradadas por actividades antropogénicas y/o perturbaciones naturales, a través de prácticas de manejo y técnicas productivas a largo plazo, que permitan restablecer las funciones del ecosistema o de partes de sus componentes, permitiendo que éste sea económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible.** Se recorren las siguientes fracciones. XXIX.- ... XXXV.- ...
Artículo 15.- El Programa Especial	**Artículo 15.-** El Programa Especial



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: I. a XVIII. ... XIX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.	Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias: I.- XVIII. ... (Se adiciona una fracción.) **XIX.- Impulso a los programas que fomenten la restauración productiva.** Se recorren la siguiente fracción. XX.
Artículo 20.- La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente Ley.	**Artículo 20.**- La Comisión Intersecretarial será responsable de atender, difundir, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable **y la restauración productiva**. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar las acciones y la concertación de la asignación de responsabilidades a las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente Ley.
Artículo 52.- Serán materia de asistencia técnica y capacitación: **I.** a IV. ...	**Artículo 52.**- Serán materia de asistencia técnica y capacitación: I.- a IV.- ... **V.-La implementación de prácticas de manejo y técnicas productivas a largo plazo,** **que permitan restablecer las funciones del ecosistema o de partes de sus componentes, permitiendo que éste sea económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible.**
Artículo 164.- ... Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen la conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se	**Artículo 164.-** ... Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen **la restauración,** conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se

7



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado.	deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado.
Artículo 173.- En atención al criterio de sustentabilidad, el Estado promoverá la reestructuración de unidades de producción rural en el marco previsto por la legislación agraria, con objeto de que el tamaño de las unidades productivas resultantes permita una explotación rentable mediante la utilización de técnicas productivas adecuadas a la conservación y uso de los recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado. Los propietarios rurales que opten por realizar lo conducente para la reestructuración de la propiedad agraria y adicionalmente participen en los programas de desarrollo rural, recibirán de manera prioritaria los apoyos previstos en esta Ley dentro de los programas respectivos.	**Artículo 173.-** En atención al criterio de sustentabilidad, el Estado promoverá la reestructuración de unidades de producción rural en el marco previsto por la legislación agraria, con objeto de que el tamaño de las unidades productivas resultantes permita una explotación rentable mediante la utilización de técnicas productivas adecuadas a la conservación, **restauración, restauración productiva** y uso de los recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado. Los propietarios rurales que opten por realizar lo conducente para la reestructuración de la propiedad agraria y adicionalmente participen en los programas de desarrollo rural, **restauración y restauración productiva** recibirán de manera prioritaria los apoyos previstos en esta Ley dentro de los programas respectivos.

IV.- CONSIDERACIONES

De acuerdo al análisis pertinente de la presente iniciativa se considera que:

PRIMERO. De acuerdo a Carabias *et al.* (2007)[1], en nuestro país, la transformación, degradación o destrucción de los ecosistemas naturales es consecuencia del desarrollo urbano-industrial, de la implantación de programas agropecuarios de corte extensivo, de la tala ilegal, de los incendios forestales y de conflictos agrarios y colonizaciones por mencionar sólo los agentes de cambio más importantes. Por lo mismo, de acuerdo a Carabias *et al.* (2007) se requiere revertir las condiciones adversas en los ecosistemas, para ello los mismos autores (Carabias *et al.*, 2007) mencionan que se han propuesto diversas definiciones que intentan unificar, los conceptos relacionados con la recuperación de los sistemas ecológicos que han sufrido diversos grados de afectación antropogénica Carabias *et al.* (2007) sugiere la existencia de múltiples definiciones cada una con

[1] Carabias, J. V. Arriaga, y V. Cervantes (2007). "Las políticas públicas de la restauración ambiental en México: limitantes, avances, rezagos y retos," Boletín de la Sociedad Botánica de México, Núm. 80: 85-100.



particularidades que dependen del tipo de ecosistema y formación de los especialistas que se dedican al tema de la recuperación de sistemas ecológicos, sin embargo todas ellas tienen en común el que las actividades de restauración deben dar respuesta a diferentes tipos de afectación y escalas de aplicación, además de tener diversos grados de magnitud.

SEGUNDO. Considerando el término restauración, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define en su artículo 3 fracción XXXIV, el término restauración como: *Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.* Por su parte, la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 7, fracción XXXV define la restauración forestal como: *El conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su persistencia y evolución.* De esta forma la adición del término restauración propuesta en el artículo 3, fracción XXV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, está en armonía con ambas leyes.

TERCERO. Con respecto a la definición de restauración productiva, cabe señalar los siguientes aspectos. En México especialistas reconocidos en el tema de restauración como Carabias *et al.* (2007)[2] y Ceccon (2013)[3], abordan definiciones académicas que sirven de base para la comprensión del tema y su posible incorporación en el marco legal mexicano en la materia. Carabias et al. (2007), definen el término restauración ambiental como el conjunto de acciones planificadas dentro de una estrategia dirigida a mejorar las condiciones del sistema degradado e incrementar su calidad ambiental, lo anterior incluye diversas estrategias dependiendo de los objetivos que se persigan y hasta donde se pretende recuperar el sistema degradado. En consecuencia, Carabias *et al.* (2007) destacan que no siempre el objetivo de la restauración es devolver el sistema degradado a sus condiciones originales, sino sólo mitigar las disfunciones

[2] Carabias, J. V. Arriaga, y V. Cervantes (2007), "Las políticas públicas de la restauración ambiental en México: limitantes, avances, rezagos y retos," Boletín de la Sociedad Botánica de México, Núm. 80: 85-100
[3] Ceccon, E. (2013), Restauración en bosques tropicales: fundamentos ecológicos, prácticos y Sociales. UNAM, México, Ciudad de México.



ambientales, o mejorar sus condiciones e incrementar su capacidad productiva. En cuanto a restauración productiva Ceccon (2013) la define como la restauración de algunos elementos de la estructura y función del ecosistema original, junto con una productividad de la tierra de manera sustentable, utilizando técnicas agroforestales y agroecológicas con el objetivo de ofrecer productos que generen bienes económicos a la población local. Por su parte, Borda-Niño *et al.* (2016)[4], la restauración productiva es una estrategia adecuada para recuperar la productividad del suelo en beneficio de la población local, junto con algunos de los elementos de la estructura y función del ecosistema original.

CUARTO. Continuando lo anterior, el término restauración productiva se ha construido dentro de las ciencias ambientales y las ciencias forestales, dicha definición, está actualmente en discusión científico-académica desde diversas perspectivas teóricas. Por otra parte, a nivel de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y de recomendaciones de política pública, el término restauración productiva no es muy empleado en comparación con los términos de restauración ecológica, ambiental o de paisaje, esta última conocida en inglés como "*landscape restoration*", siendo este el término que emplea la FAO (2017)[5]. De hecho, la Iniciativa internacional de "El Desafío de Bonn" define el término de restauración como: "el enfoque de restauración del paisaje forestal, que tiene como objetivo restaurar la integridad ecológica al mismo tiempo que mejorar el bienestar humano a través de paisajes multifuncionales" (Bonn Challenge, 2017)[6].

QUINTO. Siguiendo con la discusión anterior, la Ley Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) considera en su artículo 11, la restauración bajo un enfoque integral de sustentabilidad, relacionando la actividad de restauración con el fomento de actividades productivas y de generación de bienes y servicios, tal como se cita a continuación:

---

[4] Borda-Niño, M., M. Carranza, D. Hernández-Muciño y M. Muciño-Muciño (2016), Restauración productiva en la práctica: el caso de las comunidades indígenas Me´ Phaa de La Montaña de Guerrero, México, en E. Ceccon y D. Pérez (coord.), Más allá de la ecología de la restauración : perspectivas sociales en América Latina y el Caribe, Argentina, Buenos Aires, 2016.

[5] FAO (2017), The Forest and Landscape Restoration Mechanism (FLRM), <http://www.fao.org/in-action/forest-landscape-restoration-mechanism/activities/national/rwanda/en/>. Consultado el 29 de marzo de 2017.

6 Bonn Challenge (2017), The Challenge. A global effort. <http://www.bonnchallenge.org/content/challenge>. Consultado el 29 de marzo de 2017.



Artículo 11.- Las acciones para el desarrollo rural sustentable mediante obras de infraestructura y de fomento de las actividades económicas y de generación de bienes y servicios dentro de todas las cadenas productivas en el medio rural, se realizarán conforme a criterios de preservación, restauración, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad, así como prevención y mitigación del impacto ambiental.

Considerando lo anterior estas Comisiones unidas coinciden con el proponente en cuanto a la importancia de la restauración de los ecosistemas naturales en el marco de las actividades del sector rural, sin embargo es necesario señalar que el término "restauración productiva" está aún en proceso de discusión académica y científica y por lo mismo a nivel de recomendación de política pública no hay un consenso internacional sobre lo qué es restauración productiva; en cambio términos como restauración del paisaje o restauración ecológica o ambiental están siendo empleados por organismo como la FAO. Por lo cual, es opinión de estas Comisiones Unidas que se requiere una mayor discusión y consenso en organismos nacionales e internacionales sobre lo que se debe entender como restauración productiva. Por otra parte, estas Comisiones Unidas consideran que el término restauración se liga ya al fomento de actividades económicas y de generación de bienes y servicios (artículo 11 de la LDRS), por lo que la adición de la definición sugerida como restauración productiva es reiterativa dentro de la actual LDRS.

SEXTO. Con respecto a la adición de una fracción XIX al artículo 15 de la LDRS, estas Comisiones Unidas coinciden con el proponente en cuanto a la adición del término "restauración" dirigido a impulsar programas que la fomenten. Sin embargo de acuerdo a los considerandos anteriores, estas Comisiones Unidas son de la opinión que se debe modificar esta adición, para dejarla en términos sólo de restauración; además considerando que la restauración es parte de las acciones del desarrollo rural sustentable tal como lo describe el artículo 11 de la LDRS, estas Comisiones unidas son de la opinión de no adicionar una fracción XIX sino de incluir el término restauración en la fracción IX del artículo en comento, excluyendo el término fomento, el cual es reiterativo, ya que el primer párrafo del artículo 15 ya señala que el Programa Especial Concurrente fomentará acciones.

SÉPTIMO. Con respecto a la reforma propuesta al artículo 20 de esta Ley, nuevamente estas Comisiones unidas coinciden con la preocupación que tiene el



proponente en cuanto a la restauración en ecosistemas naturales en el sector rural, sin embargo considerando los puntos anteriores mencionados, estas Comisiones Unidas son de la opinión que la adición del término "restauración productiva" es reiterativa de acuerdo a lo que señala el artículo 11, de acuerdo a este artículo: el desarrollo rural sustentable deberá comprender acciones de fomento de actividades económicas y de producción de bienes y servicios bajo criterios de restauración y de aprovechamiento sustentable. Al respecto de este último y de la restauración, la LGEEPA señala en su artículo 1 fracción XX lo siguiente:

> ***ARTÍCULO 1o.-*** *La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:*
>
> *I.- a V. ...*
>
> *V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;*
>
> *VI.- a X. ...*

Consecuentemente, estas Comisiones unidas son de la opinión de rechazar esta adición al artículo 20.

OCTAVO. Considerando lo anterior, en cuanto a la adición propuesta al artículo 52 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estas Comisiones unidas coinciden de manera parcial con el proponente en cuanto a la adición sugerida. No obstante, estas Comisiones unidas son de la opinión que la redacción respecto a: económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible tiene una relación confusa y reiterativa, ya lo que lo económicamente viable y lo socialmente justo se establecen como parte de la definición de desarrollo sustentable que proporciona la LGEEPA en su artículo 3 fracción XI: ***Desarrollo Sustentable****: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de*



manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Igualmente se debe considerar lo que señala sobre desarrollo rural sustentable la misma LDRS en su artículo 3 fracción XIV: ***Desarrollo Rural Sustentable**. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio.*

Considerando lo anterior estas Comisiones Unidas son de la opinión que se modifique el párrafo final propuesto de manera que se mencione que las prácticas y técnicas para restaurar funciones ecosistémicas se harán bajo un enfoque de desarrollo rural sustentable. En el párrafo anterior se sustituye el término restablecer por el término restaurar para estar en armonía jurídica con la definición y el término empleado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección y con la misma Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

NOVENO. En cuando a la adición del término restauración propuesto al artículo 164 estas Comisiones no tienen ninguna objeción u observación a la reforma propuesta. En cuanto a la adición propuesta al artículo 173 en su primer párrafo, y tomando en cuenta los considerandos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, estas Comisiones unidas son de la opinión de modificar la adición sugerida, limitándola sólo a la adición del término de "restauración", en el entendido de que el mismo artículo 173 señala que las acciones descritas se realizarán conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado.

DÉCIMO. Finalmente, estas Comisiones unidas, son de la opinión que la adición propuesta al segundo párrafo del artículo 173 de la LDRS, es inviable y reiterativa dentro de la misma Ley. Por una parte, en el artículo 11 de la actual LDRS se señala que las acciones del desarrollo rural sustentable deberán comprender entre otros aspectos criterios de restauración, además de criterios de preservación, aprovechamiento sustentable y de prevención y mitigación del impacto ambiental, los cuales también son importantes en un esquema técnico e integral de manejo sustentable de recursos naturales y de ecosistemas. Consecuentemente, darle prioridad a un criterio de los mencionados implica menoscabar los criterios restantes. A lo anterior hay que añadir que el artículo 57 de la LDRS, se establece



hacia donde se deberán dirigir los apoyos que induzcan a la aplicación de prácticas de restauración previo dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual se señala textualmente a continuación:

> *Artículo 57.- Los apoyos y la reconversión productiva se acompañarán de los estudios de factibilidad necesarios, procesos de capacitación, educación y fortalecimiento de las habilidades de gestión y organización de los actores sociales involucrados, con el propósito de contribuir en el cambio social y la concepción del uso y manejo sustentable de los recursos naturales.*
>
> *En las tierras dictaminadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales como frágiles y preferentemente forestales, de acuerdo con lo establecido en la Ley Forestal y demás ordenamientos aplicables, los apoyos para la reconversión productiva deberán inducir el uso forestal o agroforestal de las tierras o, en su caso, la aplicación de prácticas de restauración y conservación.*

DECIMO PRIMERO. Por lo anterior, estas Comisiones Unidas, consideramos aprobar esta Iniciativa de Ley, con modificaciones a algunas de las reformas y adiciones propuestas, ya mencionadas en los considerandos anteriores.
Por lo anterior las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos acuerdan el siguiente:

V. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3, 15, 52, 164 Y 173 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 15, fracción IX; 164, segundo párrafo; y 173, párrafo primero; y se adicionan una fracción XXVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes, al artículo 3; y una fracción V al artículo 52, todos ellos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXVI. ...



XXVII. Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.

XXVIII. Secretaría. ...

XXIX. Seguridad Alimentaria. ...

XXX. Servicio. ...

XXXI. Servicios Ambientales (sinónimo: beneficios ambientales). ...

XXXII. Sistema. ...

XXXIII. Sistema-Producto. ...

XXXIV. Soberanía Alimentaria. ...

Artículo 15.- El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a **VIII.** ...

IX. Cuidado al medio ambiente rural, **a la restauración**, la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo y a la producción de servicios ambientales para la sociedad;

X. a **XIX.** ...

Artículo 52.- Serán materia de asistencia técnica y capacitación:

I. y **II.** ...



III. El desarrollo de unidades de producción demostrativas como instrumentos de capacitación, inducción y administración de riesgos hacia el cambio tecnológico;

IV. La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas; y

V. Las prácticas de manejo y técnicas productivas, que permitan la restauración de las funciones del ecosistema o de sus componentes, bajo un enfoque de desarrollo rural sustentable.

Artículo 164.- ...

Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen **la restauración,** conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado

Artículo 173.- En atención al criterio de sustentabilidad, el Estado promoverá la reestructuración de unidades de producción rural en el marco previsto por la legislación agraria, con objeto de que el tamaño de las unidades productivas resultantes permita una explotación rentable mediante la utilización de técnicas productivas adecuadas a la conservación, **restauración** y uso de los recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado.

...



III. El desarrollo de unidades de producción demostrativas como instrumentos de capacitación, inducción y administración de riesgos hacia el cambio tecnológico;

IV. La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el caso de las comunidades indígenas; y

V. Las prácticas de manejo y técnicas productivas, que permitan la restauración de las funciones del ecosistema o de sus componentes, bajo un enfoque de desarrollo rural sustentable.

Artículo 164.- ...

Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas y cultivos que garanticen **la restauración,** conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado

Artículo 173.- En atención al criterio de sustentabilidad, el Estado promoverá la reestructuración de unidades de producción rural en el marco previsto por la legislación agraria, con objeto de que el tamaño de las unidades productivas resultantes permita una explotación rentable mediante la utilización de técnicas productivas adecuadas a la conservación, **restauración** y uso de los recursos naturales, conforme a la aptitud de los suelos y a consideraciones de mercado.

...

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 19 de abril de 2017.

16



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

La Comisión de Desarrollo Rural

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo
Presidente

Sen. Carmen Dorantes Martínez
Secretaria

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Secretaria

Sen. Esteban Albarrán Mendoza
Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

17



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO RURAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



LISTA DE ASISTENCIA A LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2017, A LAS 16:00 HRS. EN LA SALA 1 UBICADA EN EL PISO 14 DE LA TORRE DE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.



Sen. Fidel Demédicis Hidalgo



Sen. Carmen Dorantes Martínez



Sen. Luisa María Calderón Hinojosa



Sen. Esteban Albarrán Mendoza



Sen. Ricardo Barroso Agramont



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Trigésima Reunión Ordinaria

Lista de Asistencia

21 DE MARZO DE 2018

	SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA Presidente	
	SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS Secretario	
	SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Secretario	
	SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA Integrante	
	PAN Integrante	



18. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 08 de marzo de 2016, el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 192 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Dicha iniciativa propone fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha contra la erradicación, prevención y tratamiento de las adicciones a través de modificaciones a la Ley General de Salud para que se impulse el diseño y aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en el sector integrado por niñas, niños y adolescentes.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y de Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73,



de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general en la República, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido para tratar el tema de salud en México.

La salud, es un componente importante del desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. Hoy, el papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país. Es por ello la importancia del presente instrumento legislativo.

B. El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el desarrollo y la estabilidad social. Aunque en la actualidad toda la sociedad está expuesta a las drogas, hay grupos más vulnerables que otros a sufrir consecuencias negativas de su uso, como los niños y los jóvenes, quienes pueden truncar su posibilidad de desarrollo personal y de realizar proyectos positivos de vida.

El gobierno de México inició, desde la década de 1970, acciones para atender este problema, mucho antes de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones, por lo que contamos ya con una considerable experiencia acumulada.
Nuestro país ha realizado esfuerzos importantes por enfrentar este problema a través del desarrollo de un marco jurídico-normativo e institucional y de programas que, al mismo tiempo que dan seguimiento a los acuerdos que México ha firmado en el ámbito internacional, son apropiados a las características socioculturales específicas de nuestra nación.

C. Para el Sector Salud la reducción de la demanda de drogas incluye las iniciativas que buscan prevenir su consumo, disminuir progresivamente el número de usuarios, mitigar los daños a la salud que puede causar el abuso, y proveer de información y tratamiento a los consumidores problemáticos o adictos, con miras a su rehabilitación y reinserción social.

En esta tarea, la Secretaría de Salud, SSA como cabeza del Sector Salud, promueve un enfoque integral que incluye, además de las drogas ilegales, a todas las que producen adicción y problemas de salud pública, e incorpora en los programas a los diversos sectores públicos y sociales.

D. Es importante señalar que el sector de la población constituido por niñas, niños y adolescentes, existen cifras que denotan un creciente consumo de drogas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014, entre los adolescentes estudiantes de secundaria y bachillerato el 17.2% alguna vez ha consumido algún tipo de droga.

Otra cifra también alarmante, es el consumo de marihuana en niños de 12 años o menos, donde un 2.7% de esa población ha consumido alguna droga, indicador que aumentó a un 21.3% cuando cumplieron los 17 años de edad. Además de ello, se constató a través de este estudio que el 2.3% de niños que cursaban entre 5º y 6º año de primaria consumieron algún tipo de droga a nivel nacional, lo que implica una estadística preocupante para la sociedad y el bienestar de las generaciones venideras.

E. Cabe mencionar que el Estado mexicano ha pactado a través de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención de los Derecho del Niño en su artículo 33 establece:

"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y



para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias."

Lo que obliga a el Estado Mexicano a salvaguardar la integridad personal y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes mexicanos.

F. Por lo anterior, estas Comisiones codictaminadoras consideran indispensable fortalecer los mecanismos enfocados en la lucha contra la erradicación, prevención y tratamiento de las adicciones a través de modificaciones en la ley que impulsen el diseño y aplicación de políticas públicas enfocadas específicamente en el sector integrado por niñas, niños y adolescentes para poder garantizar sus derechosa la salud física y mental y a un desarrollo libre de adicciones.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 191 Y 192 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción I del párrafo primero del artículo 191 y la fracción I del párrafo cuarto del artículo 192, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 191.- **…**

I. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes, **con especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes;**

II. a III. …

…

Artículo 192.-…

…

…

…

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos, **con especial atención al sector conformado por niñas, niños y adolescentes; y**

II. …

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



19. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud en materia de OPTOMETRÍA.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 21 de octubre de 2014, los Senadores Maki Esther Ortiz Domínguez, Hilda Esthela Flores Escalera, Fernando Enrique Mayans Canabal, Armando Neyra Chávez, Arquímedes Oramas Vargas, Francisco Salvador López Brito, José María Martínez Martínez, Martha Elena García Gomez, Adolfo Romero Lainas y María Elena Barrera Tapia, presentaron Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud en materia de optometría.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa pretende lo siguiente:

Propone tomar en cuenta la participación de los técnicos y auxiliares optometristas que tengan sus debidos diplomas y certificados competentes, y con ello dar garantía que un usuario o paciente deba ser atendido por personas preparadas y debidamente certificadas.
Es por lo anterior que se pretende la siguiente propuesta:



LEY VIGENTE	**PROPUESTA DE INICIATIVA**
Artículo 79. Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes	**Artículo 79.** Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, **optometría,** ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, **optometría,** terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas**, constancias, reconocimientos oficiales o certificados técnicos de competencia laboral,** correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos hacen referencia al Derecho a la Protección de la Salud que gozan todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la Iniciativa posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y trascendente para la salud en México.

B. La visión forma parte esencial del sistema sensorial del ser humano, por lo que más de 80% de la información que recibimos es a través de este sentido.

La buena vista es uno de los elementos básicos que permite el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad, lo que se traduce en naciones prosperas, con alta productividad educacional, laboral y en constante desarrollo.

En términos mundiales la Organización Mundial de la Salud estima que 153 millones de personas tienen discapacidad visual por errores refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo) esta cifra no incluye a las



personas con presbicia no corregida, que según datos actualizados indican que existen 285 millones de personas con discapacidad visual de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan visión baja, que en la mayoría de los casos tendrían visión normal con anteojos; es decir, 80% del total de los problemas visuales se pueden evitar o curar.

C. La Optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y lentes oftálmicas.

El Consejo Mundial de Optometría menciona que; La optometría es una profesión de la salud que es autónoma, educada y regulada, y los optometristas son los profesionales del cuidado primario de la salud del ojo y del sistema visual, que proporcionan un cuidado integral del ojo y la visión, que incluye la refracción y dispensación, detección/diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en el ojo.

D. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud, OMS estipula que debe haber un optometrista por cada 10,000 habitantes. A ello hay que hacer mención que México cuenta una población de casi 120 millones de habitantes, por lo que requiere de 12,000 optometristas para satisfacer las necesidades de la población.

Según el Censo Económico del 2009, INEGI se registró 9,293 ópticas, adicionalmente contabilizó 614 consultorios de optometría. Es decir, en 2009 existían casi 10 mil ópticas y consultorios.

En 2013, el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), de la Secretaría de Educación Pública, tenía registrados 3,650 optometristas titulados desde los años 50´s.

Así mismo un dato importante es que hacen falta al menos 6,500 licenciados en optometría para satisfacer la demanda del sector.

E. Por su parte la discapacidad visual se refiere a la disminución que sufre una persona en su agudeza o capacidad visual. Este tipo de dificultad incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual.

En México hay 60 millones de personas que necesitan lentes o gafas, pero solo 15 millones las utilizan.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discapacidad visual es la segunda más numerosa en el país con el 27.2% de los 5 millones 739 mil 270 mexicanos que tienen alguna discapacidad.

Además, en México según el Censo de Población y Vivienda del INEGI del 2010, hay 112 millones 336 mil 538 habitantes en la República Mexicana, de los cuales se estima que 43.24 por ciento del total de la población, es decir alrededor de 48 millones de personas, requieren de servicios optométricos; de éstos el 54 por ciento corresponde a mayores de 45 años; 33 por ciento entre 15 y 44 años; 12 por ciento entre 5 y 14 años, y 1 por ciento de 0 a 4 años.

Del porcentaje de personas que tienen alguna afectación visuales, en su mayoría se refiere a individuos que desde su nacimiento sufren de este problema, pero también una parte considerable de dicha población sufren discapacidad visual por alguna negligencia médica.

F. Actividades que desarrollan los licenciados en optometría y los técnicos en optometría en las ópticas: el primero es una persona que tiene una carrera profesional y el segundo sólo tiene una carrera técnica.



- OPTOMETRISTA:

  Evaluación visual (Examen de la vista, y obtención de la graduación)
  Adaptación de lente de Contacto
  Detección de enfermedades y canalización a Especialista Oftalmólogo
  Labores de Administración en Óptica y Control Normativo
  Responsable del trato con proveedores

- TECNICO DE OPTOMETRIA:

  Evaluación visual (Examen de la vista, y obtención de la graduación)
  Adaptación de Lentes de Contacto
  Apoyo en arreglo de modular y administración de Óptica

G. Se coincide con el proponente en que debido a la gran cantidad de personas que sufren algún tipo de problema visual, ha crecido el mercado de servicios de optometría irregulares, esto lleva a que se presenten diversas situaciones en donde la atención visual puede ser proporcionada por dependientes sin preparación, situación agravada por la escasa cultura de salud que prevalece en el país, la auto-prescripción y el incompleto diagnóstico que pueden ofrecer los técnicos en optometría.

H. Sin embargo para tener una mejor redacción y que queden candados exactos como los documentos que se requieren para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares en diversas ramas, con ello se daría mayor claridad y se combatiría el mercado informal es por ello que estas comisiones realizan los siguientes cambios.

DICE:	**DEBE DECIR:**
Artículo 79. …	**Artículo 79.** …
Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas, **constancias, reconocimientos oficiales o certificados técnicos de competencia laboral,** correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.	Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas, **certificados técnicos, o reconocimientos oficiales de competencia laboral,** correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.



Es por todo lo anteriormente expresado, que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. …

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas, **certificados técnicos, o reconocimientos oficiales de competencia laboral** correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



20. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º fracción III; 168, fracciones II y V; 171 y 465, segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de adultos mayores.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de febrero de 2017, la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6º fracción III, 168 fracciones II y V, 171 primero y segundo párrafo, todos de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dichas Iniciativas fueran turnadas a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 6°, FRACCIÓN III; 168, FRACCIONES II Y V; 171, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS, Y 465, SEGUNDO PÁRRAFO, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se **reforman** los artículos 6°, fracción III; 168, fracciones II y V; 171, primero y segundo



párrafos, y 465, segundo párrafo; todos de la **Ley General de Salud,** para quedar como sigue:

Artículo 6°.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I.- y II. …

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estados de abandono, **adultos mayores** desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a XXVIII. …

Artículo 168.- Son actividades básicas de Asistencia Social:

I. …

II. La atención en establecimientos especializados a menores y **adultos mayores** en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. y IV. …

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, **adultos mayores** y personas con discapacidad;

VI. …

Artículo 171.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y **adultos mayores** sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y **adultos mayores**, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

Artículo 465.- …



Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, **adultos mayores**, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

III. CONSIDERACIONES

A. En México, en 2017 habitan 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 ciento son hombres, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población.

De las 656 mil defunciones registradas en 2015, 65 por ciento correspondieron a personas de 60 y más años, de acuerdo con las Estadísticas de mortalidad 2015.

El instituto destacó que la población adulta tiene una esperanza de vida de 75.3 años para 2017, por lo que el peso relativo de los adultos mayores adquiere una mayor relevancia en la estructura por edad.

B. Por su parte, el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores hace énfasis en "no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, así como trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia". Es un derecho de esta población recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de ellos reside al menos una persona de 60 y más años. El INEGI apuntó que en el país hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas y la mayoría son mujeres.

La ENIGH 2016, puntualiza que, del total de adultos mayores, 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento, donativos de otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2 por ciento cuenta con apoyos de programas gubernamentales.

Respecto a la tasa de participación económica, durante el primer trimestre de 2017, 33.9 por ciento corresponde a personas de 60 y más años, 50.9 por ciento son hombres, y 19.6 por ciento son mujeres. El 61.8 por ciento trabaja sin contrato laboral y casi la mitad, 47.7 por ciento, no cuenta con prestaciones, de hecho, 73.2 por ciento lo hace de manera informal.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en el país, residen 3.4 millones de personas de 60 y más años con discapacidad y 4.7 millones con limitación.

En el tema de pensiones, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) levantada en 2013, 6.1 por ciento de los adultos mayores se encuentran pensionados, 40.9 por ciento por jubilación, 33.9 por ciento por retiro o vejez, 17.5 por viudez y 3.6 por accidente o enfermedad de trabajo.

C. En 2030, los adultos mayores en el país van a ser 20.4 millones, en tono al 15 % de la población total. Esa es la tendencia a nivel mundial. La esperanza de vida ha crecido y lo seguirá haciendo en todo el mundo. Es, sobre todo, una conquista de la medicina.



La expectativa de vida en México en la década de los treinta y cuarenta era de entre 40 y 45 años. Ahora es de 75 años, que son entre 30 y 35 años más en un periodo de 70 años. Al final del siglo XXI podrá andar en torno a los 90 años. En los países más desarrollados en los 100 años.

Hoy en México una persona de 60 años se espera que viva por lo menos 22 años más. Para 2050, el promedio de vida será de 80 años. Ahora, por primera vez en la historia, en el país hay más personas mayores de 60 años que niños de menos de cinco años.

El proceso de envejecimiento es desigual en el país. Los estados con una población de adultos mayores más grandes son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Los que tienen población más joven son Baja California Sur, Colima y Campeche.

D. Derivado del análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6º fracción III, 168 fracciones II y V, 171 primero y segundo párrafo, y 465 segundo párrafo, de la Ley General de Salud, la cual tiene por objeto de sustituir el término "anciano" por el de "adulto mayor", se estima que la Iniciativa resulta viable, atendiendo a las modificaciones siguientes:

Artículo 6º.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. y II. …

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en **estado** de abandono, **personas adultas mayores** desamparadas y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a XII. …

Artículo 168.- Son actividades básicas de Asistencia Social:

I. …

II. La atención en establecimientos especializados a menores y **personas adultas mayores** en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. y IV. …

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, **personas adultas mayores** y personas con discapacidad **sin recursos;**

VI. a IX. …

Artículo 171.- Los Integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y **personas adultas mayores** sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y **personas adultas mayores**, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

Artículo 465.- …

Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, **personas adultas mayores**, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

Lo anterior, a efecto de hacerlo acorde con el término establecido en el artículo 3º fracción I de la Ley de los



Derechos de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, resulta oportuno hacer notar que la iniciativa de mérito presenta errores en la transcripción del texto vigente de los numerales que se reforman, por lo que los mismos se resaltan con negrillas y se redactan de manera correcta en el texto propuesto anteriormente mencionado.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6o, FRACCIÓN III; 168, FRACCIONES II Y V; 171 Y 465, SEGUNDO PÁRRAFO; TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Único. Se **reforman** los artículos 6o, fracción III; 168, fracciones II y V; 171 y 465, segundo párrafo; todos de la **Ley General de Salud,** para quedar como sigue:

Artículo 6o.- …

I. y II. …

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en **estado** de abandono, **personas adultas mayores** desamparadas y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. a XII. …

Artículo 168.- …

I. …

II. La atención en establecimientos especializados a menores y **personas adultas mayores** en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos;

III. y IV. …

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, **personas adultas mayores** y personas con discapacidad **sin recursos;**

VI. a IX. …

Artículo 171.- Los Integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y **personas adultas mayores** sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y **personas adultas mayores**, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.



Artículo 465.- …

Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, **personas adultas mayores**, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



21. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 134 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 46, la fracción III del artículo 133, las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se adicionan la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LAS INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de la propuesta de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de agosto de 2017, la Senadora Lilia Guadalupe Meriodio Reza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, presento iniciativa por el que se reforman el artículo 46, la fracción III del artículo 133, las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se adicionan la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Dicha Iniciativa propone definir en la Ley General de Salud a las “Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud”, las cuales se entenderán como aquellas contraídas por el paciente durante su tratamiento o por los trabajadores de los servicios de salud, en un hospital u otro centro de atención a la salud.



III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las IAAS, también denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso, la prevalencia de las IAAS en países desarrollados es de 7.6 infecciones por cada 100 pacientes; en tanto, las naciones en desarrollo se sitúan en 15.5 infecciones por cada 100.

Según los datos de varios países, se calcula que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven afectados por IAAS. La carga de IAAS es varias veces superior en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos.

Cada día, las IAAS provocan la prolongación de las estancias hospitalarias, discapacidad a largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, enormes costos adicionales para los sistemas de salud, elevados costos para los pacientes y sus familias, y muertes innecesarias.

C. Se estima que en nuestro país la frecuencia de infecciones en unidades hospitalarias varía **de 2.1 a 15.8 por ciento**, constituyendo las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) donde más casos se presentan, ya que de 895 pacientes**, 23.2 por ciento** mostró una infección nosocomial.

Las más comunes son las infecciones de neumonía con 39.7 por ciento, seguida de inoculaciones urinarias, **20.5 por ciento**, heridas quirúrgicas, **13.3 por ciento** y las del torrente sanguíneo, con 7.3 por ciento.

D. Los factores de riesgos de las IAAS, son:

Los pacientes están expuestos al riesgo de contraer una IAAS solo por el hecho de recibir atención en un centro hospitalario, particularmente cuando requieren tratamientos o procedimientos invasivos.

Los factores de riesgo para la presencia de IAAS se encuentran en función de las características del paciente y los factores dependientes de las prácticas de atención y del ambiente.

Factores del huésped son aquellos que afectan la respuesta de las personas ante la exposición y su resistencia a la infección. Los factores que aumentan la probabilidad de contraer una IAAS incluyen: edad avanzada, nacimiento prematuro, inmunodeficiencia, quemaduras graves, desnutrición severa, diabetes mellitus. Factores del ambiente Los factores ambientales relativos a las IAAS incluyen el ambiente animado e inanimado que rodea al paciente.

El ambiente animado se refiere al personal de atención en salud (incluye técnicas de diagnóstico y maniobras terapéuticas empleadas), otros pacientes en la misma unidad, familia y visitas.

El ambiente inanimado incluye el instrumental y equipos médicos, así como las superficies ambientales. Otros factores de riesgo asociados al ambiente de atención en salud son las condiciones de salubridad, limpieza de la unidad, temperatura y humedad.



Figura 1. Factores de riesgo por sitio de infección

	Factores relacionados con las prácticas de atención	Factores relacionados con el dispositivo	Factores del huésped
Neumonía asociada a la ventilación mecánica	Administración de antibióticos de amplio espectro Uso de antiácidos Exposición a equipos contaminados Inadecuada higiene de manos Duración de la ventilación mecánica ≥5 días Reintubación Posición decúbito	Intubación traqueal Ventilación mecánica continua. Sonda oro o nasogástrica Intubación de emergencia. Traqueostomía Broncoscopia Alimentación enteral	Edad >65 años Antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas Sedación Coma Estancia prolongada Estancia en UCI
Infección del torrente sanguíneo asociada a catéter	Técnica de colocación Inadecuada higiene de manos Manipulación Exposición a dispositivos contaminados Exposición a fluidos contaminados Falta de cuidado del catéter	Tipo y material del catéter Número de lúmenes Sitio de instalación	Edades extremas Integridad de la piel Enfermedades de base Inmunosupresión Estancias hospitalarias prolongadas
Infección de las vías urinarias asociada a catéter urinario	Contaminación del material de instrumentación o drenaje Inadecuada higiene de manos Tiempo que permanece colocado el catéter Manejo del sistema de recolección.	Tipo y material del catéter urinario	Sexo femenino Antecedente de diabetes mellitus 2 Edad avanzada
Infección de herida quirúrgica	Inadecuada higiene de manos Agua de mala calidad Cloración insuficiente Contaminación del material empleado en el acto quirúrgico Afeitado preoperatorio Profilaxis antibiótica inadecuada	Antiséptico inadecuado, a granel o de mala calidad	Antecedente de diabetes mellitus 2 Edad avanzada Malnutrición Inmunosupresión

En los últimos años, en diversos países se han desarrollado y en ocasiones implementado medidas adicionales a la higiene de manos para reducir las IAAS, entre los ejemplos que podemos citar se 6 encuentran: El uso de un robot que desinfecta quirófanos con una luz más intensa que la solar.[3]

[3] Dirección General de Epidemiología, Informe Anual 2015, México 2016



Principales agentes causales y el número de muertes asociadas a IAAS.

Agentes causales	Total (N=35,088)
Escherichia coli	6,550
Pseudomonas aeruginosa	4,342
Klebsiella pneumoniae	3,310
Staphylococcus aureus	2,459
Acinetobacter baumannii	2,296
Staphylococcus epidermidis	2,191
Candida albicans	1,830
Enterococcus faecalis	1,312
Enterobacter cloacae	1,122
Staphylococcus hemolyticus	895
Stenotrophomonas maltophilia	492
Enterococcus faecium	393
Candida tropicalis	393
*Clostridium difficile***	377
Serratia marcecens	362
Klebsiella oxytoca	332
Proteus mirabilis	263
Candida glabrata	203
Enterobacter aerogenes	191
Candida parapsilosis	186
Citrobacter freundii	185
Morganella morganii	115
Candida krusei	107
Burkholderia cepacia	106
Otros*	5,076

*Otros (139 agentes): *Pseudomonas putida, Acinetobacter iwoffi, Staphylococcus albus, Staphylococcus capitis, Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus gallinarum, Achromobacter xylosoxidans Staphylococcus warneri, Achromobacter xylosoxidans, etc.*
**Identificación de toxina

	n
Defunciones asociadas a IAAS	3,629

D. La vigilancia de las IAAS en México está a cargo de la Red de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (RHOVE), este sistema de vigilancia centinela se estableció formalmente en 1997, y es responsable de unificar los criterios para la recopilación dinámica, sistemática y continúa de la información generada por cada unidad de atención médica hospitalaria afiliada a la RHOVE mediante la NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia, prevención y control de las Infecciones Nosocomiales, y el manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica. Con el objetivo de generar información de calidad de uso clínico y epidemiológico. El envío de la información se hace a través de un sistema informático en línea, que permite la conexión remota y concurrente de diferentes equipos en la red a la base de datos del sistema, proporciona información en tiempo real y facilita la gestión de los datos recopilados.

Sin embargo, en el año 2015, los hospitales adscritos a la RHOVE eran solamente 3856; es decir, solamente el 8.7 % de los hospitales en México forman parte de la Red, por lo cual la información que maneja es parcial, aunado a que la información está sujeta a fallas durante su captura. En el mismo año, el número de IAAS reportadas mediante la RHOVE a nivel nacional fue de 61,988 casos y, el número de defunciones asociadas a las IAAS fue de 3,629.



Número de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) registradas en el 2015, a nivel federal y estatal de todas las unidades de atención médica asociadas a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).

	Número de IAAS
Nacional	61,988
Aguascalientes	1,029
Baja California	2,009
Baja California Sur	212
Campeche	401
Chiapas	1,787
Chihuahua	1,899
Coahuila	191
Colima	659
Distrito Federal	10,825
Durango	212
Guanajuato	4,120
Guerrero	928
Hidalgo	859
Jalisco	5,759
México	6,586
Michoacán	1,403
Morelos	887
Nayarit	194
Nuevo León	2,148
Oaxaca	1,609
Puebla	2,122
Querétaro	994
Quintana Roo	386
San Luis Potosí	1,643
Sinaloa	2,041
Sonora	1,602
Tabasco	1,581
Tamaulipas	1,245
Tlaxcala	631
Veracruz	3,600
Yucatán	1,760
Zacatecas	666

Lo que nos muestra la tabla anterior, considerando que el 8.7% de los hospitales presentaron 61,988 casos de IAAS durante el año 2015, podemos anticipar que de conocer las cifras reales, éstas serían alarmantes.[4]

E. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud muchas medidas de prevención y control de las infecciones, podrían ser como:

- La higiene de las manos, son simples, baratas y eficaces, aunque requieren una mayor responsabilización y un cambio de conducta por parte del personal.
- Identificar los determinantes locales de la carga de IAAS.
- Mejorar los sistemas de notificación y vigilancia a nivel nacional.
- Garantizar unos requisitos mínimos en lo que respecta a los establecimientos y los recursos disponibles destinados a la vigilancia de las IAAS a nivel institucional, incluida la capacidad de los laboratorios de microbiología.
- Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del control de las infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atención sanitaria.
- Aplicar las medidas generales de prevención, en particular las prácticas óptimas de higiene de las manos a la cabecera del paciente.
- Mejorar la educación y la responsabilización del personal.
- Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en función de las circunstancias de los países en desarrollo.
- Realizar investigaciones sobre la posible participación de los pacientes y sus familias en la notificación y el control de las IAAS.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que

[4] Dirección General de Epidemiología, Informe Anual 2015, México 2016



les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 Y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 134 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XIV al artículo 134, recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 134.- …

I. a XII. …

XIII. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA);

XIV. **Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, contraídas por el paciente durante su tratamiento o por el personal de salud, en una unidad médica, y**

XV. …

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. **Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo.**

Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.



22. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud en materia de edulcorantes.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de la propuesta de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de marzo de 2017, el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud en materia de edulcorantes.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La propuesta está compuesta de la siguiente manera:

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: I a XI...



XII. Expedir los lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas bajos en calorías, elaborados con ingredientes seguros para el consumo humano, que cumplan con lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, a fin de evitar la comercialización de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales y puedan ser un riesgo a la salud de los mexicanos.

III. CONSIDERACIONES

A. Se le llama edulcorante a cualquier **sustancia**, natural o artificial, que edulcora, es decir, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tiene sabor amargo o desagradable. Dentro de los edulcorantes encontramos los de alto valor calórico, como el **azúcar**o la **miel** por mencionar algunos, y los de bajo valor calórico, que se emplean como sustitutos del azúcar. En ambos tipos encontramos edulcorantes naturales y artificiales. Pero la mayoría de los edulcorantes bajos en calorías son de origen artificial. A los sustitutos del azúcar en general se refiere este artículo.

Una clase importante de sustitutos del azúcar son conocidos como edulcorantes de alta intensidad. Estos tienen una dulzura varias veces superior a la del azúcar común de mesa. Como resultado, mucho menos edulcorante es requerido y la contribución y energía es a menudo insignificante. La sensación de dulzor causada por estos componentes es a veces notablemente diferente de la **sacarosa**, de manera que frecuentemente éstos son usados con mezclas complejas que alcanzan una sensación de dulzor más natural.

B. Hay diversas razones principales por las cuales los individuos usan un sustituto del azúcar:

- Para ayudar en la pérdida de peso: algunas personas escogen limitar su ingesta energía reemplazando azúcar de alta energía o jarabe de maíz por edulcorantes que aportan poca o ninguna energía. Esto les permite consumir los mismos alimentos que normalmente consumían, mientras se pierde peso y evitan otros problemas asociados con el consumo excesivo de calorías. Sin embargo, un estudio realizado por el centro de ciencias de la salud en la **Universidad de Texas** en **San Antonio** mostró que, más que promover la pérdida de peso, las bebidas dietéticas fueron un marcador para el incremento en la ganancia de peso y la obesidad. Estudios epidemiológicos más recientes indican que no hay datos convincentes que asocien el consumo de edulcorantes no nutritivos con el aumento de peso corporal (Fernstrom 2015).
- Cuidado dental: los sustitutos del azúcar no son dañinos para los dientes, puesto que no son fermentados por la microflora de la placa dental.
- **Diabetes mellitus**: las personas con diabetes tienen dificultad para regular sus niveles de azúcar en **sangre**. Limitando el consumo de azúcar con edulcorantes artificiales, pueden disfrutar de una dieta variada mientras controlan su consumo de azúcar.
- **Hipoglicemia** reactiva: los individuos con hipoglicemia reactiva produce un exceso de **insulina** que es la absorción rápida de **glucosa** a la corriente sanguínea. Esto causa que sus niveles de glucosa sanguínea, caigan por debajo de la cantidad necesitada para la función adecuada del organismo y el **cerebro**. Como resultado, al igual que los diabéticos, estos pacientes deben evitar el consumo de alimentos que aumenten la glicemia tales como el pan blanco y frecuentemente escogen edulcorantes artificiales como una alternativa.
- Evitar alimentos procesados: algunos individuos pueden optar por sustituir el azúcar blanco refinado por un azúcar menos refinado, tal como jugo de frutas o jarabe de arce.



C. Cabe hacer mención que la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, "Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus" define a los edulcorantes no nutritivos como endulzantes potentes, cuyo aporte energético es mínimo y no afectan los niveles de insulina o glucosa sérica, por ejemplo: sacarina, aspartame, acesulfame de potasio y sucralosa.

La propia norma señala que "Se recomienda reducir o evitar el consumo de azúcares simples (miel, jaleas, dulces y bebidas azucaradas), permitiéndose el uso de edulcorantes no nutritivos, como aspartame, acesulfame de potasio, sucralosa, sacarina ylos permitidos por la Secretaría de Salud". Esto quiere decir que las Normas técnicas de nuestro país reconocen en los edulcorantes artificiales una alternativa para quienes debido a la diabetes necesitan moderar su consumo de azúcar. Asimismo, información publicada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología A.C. menciona que los edulcorantes bajos en calorías no causan cáncer, no crean adicción o ansiedad, tampoco provocan daño cerebral ni afectan a personas con otras enfermedades.

Los alimentos y bebidas con bajos contenidos calóricos contribuyen al combate de la obesidad y sobrepeso. El adecuado uso de estos productos, siempre que hayan sido aprobados por los órganos y autoridades de riesgos sanitarios de nuestro país, así como el fomento de la actividad física puede contribuir a los mexicanos a reducir sus niveles de sobrepeso y obesidad.

Por último, estas comisiones están de acuerdo con la propuesta, sin embargo, por técnica Legislativa se sugiere una mejor redacción omitiendo el cumplimiento en la norma y el fin que persigue ya que ello está de facto, por el simple hecho que la ley y las Normas competentes prevén sanciones con el fin de no poner en riesgo la salud de todos los mexicanos.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XII al artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 115.- …

I a IX...

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo**, y**

XII. Expedir los lineamientos generales para el expendio y distribución de los alimentos y bebidas bajos y sin calorías.

TRANSITORIO.

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



23. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del párrafo primero del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136; 137, numeral 2; 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado, que ha sido formulado al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de febrero de 2017, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican los artículos 28 Bis y 79 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La presente Iniciativa tiene como propósito incorporar en la Ley General de Salud, que los profesionales que podrán prescribir medicamentos son los Médicos Homeópatas, Asimismo, se añade que para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención prehospitalaria, medicina, odontología, homeopatía, veterinaria, enfermería, laboratorios clínicos, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo



social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

III. CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas dictaminadoras de Salud y Estudios Legislativos, hacen referencia al derecho a la protección de la salud que poseen todos los mexicanos acorde con el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a su vez faculta, a través de la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a emitir leyes sobre salubridad general, por lo que el ámbito de competencia de esta Soberanía se encuentra previamente establecido y reconocido conforme lo anterior.

B. La homeopatía es un modelo médico clínico terapéutico que cuenta con más de 200 años de existencia y que utiliza sustancias obtenidas de vegetales, animales y minerales principalmente, en concentraciones muy pequeñas disueltas en agua y alcohol (también se pueden preparar por trituración en lactosa), agitadas de una forma específica. Frente al paradigma terapéutico occidental de eliminar o luchar contra la enfermedad, sus síntomas y sus agentes etiológicos; la homeopatía propone una terapéutica basada en el principio hipocrático en que lo semejante se cura con lo semejante, fortaleciendo al cuerpo para que se sane a sí mismo.

C. La Homeopatía fue incorporada oficialmente al sistema de salud por un decreto expedido por el presidente Gral. Porfirio Díaz en 1896 y ratificado por el gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles en 1928. En 1896 se funda el Hospital Nacional Homeopático que en 1943 fue incorporado a los Hospitales Federales fundadores de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. El Dr. Higinio G. Pérez, decide fundar la Escuela Libre de Homeopatía de México el 12 de octubre de 1912. Obtuvo su reconocimiento oficial el 18 de enero de 1930, cuando el Presidente Lic. Emilio Portes Gil, expidió un decreto por el cual concede a la Escuela Libre de Homeopatía de México el reconocimiento y privilegio a que se refiere la ley reglamentaria de las escuelas libres que hasta la fecha opera asimismo el Hospital anexo Higinio G. Pérez. En 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional, incorporándose la Escuela Nacional de Medicina Homeopática como escuela fundadora. En 1982, abrió su sección de postgrado, impartiendo el primer curso de especialización en terapéutica homeopática, con el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública.

No obstante, desde 1960 se impartió el primer curso a nivel de postgrado en Homeopatía de México, A.C. La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía responde a su trayectoria histórica consolidándose como una escuela pública y nacional que forma profesionales con conocimientos amplios de la medicina y de la homeopatía a nivel licenciatura y en postgrado para médicos no homeópatas y estomatólogos.

D. La enseñanza de la homeopatía en otros países se realiza fundamentalmente mediante cursos de postgrado a profesionales médicos. En Francia y México se reconoce como especialidad y en este último existe también la enseñanza de la homeopatía a nivel de licenciatura en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN y en la Escuela Libre de Homeopatía de México.

Actualmente en México, la homeopatía se imparte a título de especialidad en las siguientes instituciones:

- La Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional.



- La Escuela Libre de Homeopatía A.C.

- La Escuela de Postgrado de Homeopatía de México.

E. Las ventajas de incorporar la medicina alternativa a los servicios de salud.

- Se amplía el modelo de oferta de servicios y la cobertura de la población, favoreciendo el derecho de los usuarios a la libre elección.
- Se favorece una atención integrada en los servicios de la unidad de salud, otorgando referencia y contrarreferencia institucional.
- Se brinda una atención integral especializada y personalizada, que favorece una adecuada relación médico-paciente.
- Disminuye el costo de la atención.
- Es fácil de instrumentalizar. Implementación sencilla y de bajo costo.
- Se amplía la cobertura a la población, en los diversos niveles de atención.
- No requiere de material y equipo sofisticado.
- Se facilita la validación de los resultados al contar con equipo biomédico actualizado.
- Capacidad de adaptación y crecimiento a las necesidades y demandas del servicio.

F. En la Ley General de Salud se reconoce desde el 7 de mayo de 1997 la existencia de medicamentos alopáticos, homeopáticos y herbolarios (Articulo 224). Esto se plasma en el Reglamento de Insumos para la Salud, en el cual se regula la definición, registro, elaboración, envasado, publicidad y establecimientos de los medicamentos alopáticos, homeopáticos, herbolarios y remedios herbolarios: (Artículos: 63. 64, 65, 168, 173 y175 en el caso de la homeopatía).

En 1983 el Senado de la República ratificó la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos y en 1998 la Secretaría de Salud, publicó la primera actualización de la Farmacopea siendo actualizada en 2007, y reeditada en su 3ª edición en 2015.

Desde 1997 la Ley General de Salud reconoce los medicamentos homeopáticos, herbolarios y los remedios herbolarios.

En 2006 se incorpora al modelo de unidades médicas del Plan Maestro de Infraestructura en Salud y se difunde la cartilla para la prestación de servicios con homeopatía.

G. Sin embargo derivado del análisis de la iniciativa, por lo que se refiere al numeral 1, del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, con el objeto de establecer que los médicos cirujanos serían los profesionales que podrían prescribir medicamentos resulta **inviable, toda vez que no todas las especialidades médicas tienen formación en cirugía,** por lo tanto no resulta conveniente delimitar la prescripción solo a los médicos cirujanos, pues se imposibilitaría a los médicos a los médicos especialistas no quirúrgicos, para realizarla.

H. Por lo que respecta al a la reforma al numeral 2, del artículo 28 Bis, el cual pretende establecer que los médicos serán profesionales que podrán prescribir, estas codictaminadoras **estiman viable** siempre y cuando se atienda a la propuesta de modificación siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD VIGENTE	PROPUESTA INICIATIVA	PROPUESTA CODICTAMINADORAS



Artículo 28 Bis Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 1. Médicos; 2. Homeópatas; 3.Cirujanos Dentistas 4.Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud**.**	**Artículo 28 Bis** Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 1. Médicos **cirujanos**; 2. **Médicos Homeópatas;** 3. Cirujanos Dentistas; 4. Médicos Veterinarios en el área de su competencia, y 5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determina la Secretaría de Salud. Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional	**Artículo 28 Bis** Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: 1. Médicos ; 2. **Médicos** Homeópatas**;** 3. a 5 …



	expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.	

Ya que toda vez que lo profesionales dedicados a la homeopatía existen muchos que no cuentan con formación en medicina, por lo que a efecto de que la prescripción de medicamentos pueda llevarse a cabo sin peligro para la población, resulta necesario clarificar que los médicos homeópatas son los que cuentan con la capacidad técnica y base científica para prescribir medicamentos, conforme a su formación y preparación académica.

I. Finalmente, respecto a la reforma del **Artículo 79** de la Ley General de Salud, con el fin de incluir a la homeopatía dentro de las actividades técnicas y auxiliares requieren de diploma expedido por las autoridades educativas competentes, se estima que la misma **resulta inviable,** toda vez que la homeopatía queda comprendida en las actividades profesionales en el campo de la medicina que para su ejercicio requieren de títulos profesionales y certificados lo cual comprende a los profesionales en homeopatía que no tengan formación médica pero que cuentan con documentos expedidos por autoridades educativas competentes que avalan su formación profesional en dicho ramo u especialidad.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:



PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se modifica el numeral dos del párrafo primero del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis.- …

1. …

2. **Médicos** Homeópatas;

3. a 5. …

…

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



24. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.

Una vez recibida por las Comisiones dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA MINUTA"**, se sintetiza el alcance de la proposición de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la Minuta y los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de febrero de 2016 la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud en materia de Hemodiálisis.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, turnó la Iniciativa en comento a la Comisión de Salud de dicha Cámara para su análisis y discusión.

2. Con fecha 15 de diciembre de 2016, se votó y aprobó, ante la Asamblea de la H. Cámara de Diputados, el Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud con 393 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

3. Con fecha 02 de febrero de 2017, se comunicó ante el Pleno del Senado, que se recibió de la Cámara de Diputados, la Minuta con Proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud en materia de Hemodiálisis.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictaminación correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo principal de la Minuta, consiste en reformar la fracción V el Artículo 198 de la Ley General de



Salud, a fin de que los establecimientos que presten servicios de hemodiálisis requieran autorización sanitaria, como refiere el siguiente cuadro:

Minuta
Artículo 198.- Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: I. a IV. … V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos **y los que presten servicios de hemodiálisis.** VI. … … … **Transitorio** **Único.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CONSIDERACIONES

A. Las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, hacen mención del Derecho a la Protección de la Salud, y a un medio ambiente sano que tienen todos los mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se especifica a continuación:

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley."

B. La hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones principales del riñón, haciendo pasar la sangre a través de un filtro (funcionando como riñón artificial) donde se realiza su depuración, retornando nuevamente al paciente libre de impurezas.

La duración depende de las necesidades de diálisis de cada paciente, pero como la sangre tiene que pasar varias veces a través del filtro, la media es de 4 horas, tres veces por semana. Hay que tener en cuenta que el riñón sano realiza este trabajo las 24 horas del día y todos los días de la semana.

Mediante la hemodiálisis se extrae la sangre al paciente, la cual es conducida a una máquina especialmente diseñada para depurarla, eliminando de ella lo que el riñón no puede, y devolverla al paciente en unas condiciones adecuadas.

Para poder ser dializado se precisa de un acceso vascular (catéter o fístula arterio-venosa) con dos sentidos de circulación de la sangre. A través de un sentido se envía sangre a la máquina para limpiarse, y a través del



otro regresa ya depurada.

Dentro del dializador ocurren dos procesos diferentes:

- El dializador elimina de la sangre elementos que debería filtrar el riñón mediante procesos de difusión. Tales elementos como la urea y el potasio, si no fuesen depurados, producirían graves daños en el organismo. La membrana del dializador hace de filtro de estas partículas pasando de la alta concentración de las mismas en la sangre, a ser desechadas al otro lado de la membrana donde la concentración es menor para que pueda existir este intercambio.

- También a través de una presión osmótica artificial que ejerce la máquina de diálisis se produce la ultrafiltración. Mediante esta técnica se elimina el exceso de líquido que hay en el cuerpo del paciente debido a que el riñón pierde progresivamente la capacidad de extraer la orina. Por esta razón un paciente pierde peso cada vez que asiste a una sesión de hemodiálisis. Pero hay que destacar que el paciente no está perdiendo grasa, sino líquido acumulado en sangre.

C. En México existen entre 8 y 9 millones de personas con insuficiencia renal. Entre 100 mil y 130 mil requieren diálisis y destinan promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantenerse sin mayores complicaciones.

La **NORMA Oficial Mexicana NOM-171-SSA1-1998, Para la práctica de hemodiálisis,** establece los requisitos mínimos que deberá reunir el personal de salud y los establecimientos médicos, para la aplicación de la hemodiálisis, así como los criterios científicos y tecnológicos obligatorios a que deberá sujetarse dicha aplicación.

Por su parte, el proceso para certificar Unidades de Hemodiálisis está compuesto por 3 fases, a través de las cuales el Consejo de Salubridad General evalúa la implementación del Modelo para la Atención en salud con calidad y Seguridad. Dichas fases son:

1. Inscripción y Autoevaluación.
2. Auditoría.
3. Dictamen.

La Comisión de Salud del Senado de la República, estima que la Iniciativa de mérito en viable, más se hacen las siguientes recomendaciones:

Texto vigente	**Propuesta de la Legisladora**	**Propuesta de la Comisión de Salud del Senado de la República**
Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: I. a III. … IV. La utilización de fuentes de radiación para fines médicos o de diagnóstico, y	**Artículo 198. …** I. a III. … IV. … V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos **y los**	**Artículo 198. …** I. a III. … IV. … V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos **y los**



V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos. VI. Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales y medicamentosas.	**que prestan servicios de hemodiálisis.** VI. …	**que prestan servicios de hemodiálisis, y** VI. …

Finalmente, con base en lo anteriormente señalado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, estiman que la materia de la Minuta en comento es viable, por lo que con fundamento en las atribuciones que les otorgan los artículos 85, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. – Se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 198. Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

I. a IV. …

V. Los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos **y los que presten servicios de hemodiálisis.p**

VI. …

…

…

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



25. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 58 y se adiciona un artículo 160 Bis de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen, tres Iniciativas que reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de muerte súbita.

Una vez recibidas por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de las referidas Iniciativas y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS"**, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de las Iniciativas y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 25 de octubre del 2016, los Senadores Fernando Enrique Mayans Canabal y Francisco Salvador López Brito y, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se adiciona el 55 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con fecha 08 de noviembre de 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 160 Bis a la Ley General de Salud.

3. Con fecha 28 de noviembre de 2017 el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 159 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para



su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS.

La ***primera*** propuesta está compuesta de la siguiente manera:

Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 55, 58 y 112 y se adiciona el 55 bis., todos de la Ley General de Salud.

ÚNICO: Se reforman los artículos 55, la fracción IV del 58 y 112 y se adiciona el 55 bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 55.- Las personas o instituciones públicas o privadas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de servicios de salud, cuidarán, por los medios a su alcance, que los mismos sean trasladados a los establecimientos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remisión a otras instituciones.

En el caso de que una persona preste la atención inmediata a aquella que presente riesgo inminente de vida, no tendrá repercusión legal por las consecuencias de dicho acto y conducta solidaria.

Artículo 55 Bis. En todo centro de trabajo, instituciones educativas, centros recreativos, terminales de transporte, espacios públicos, así como aquellos que por su naturaleza de creación representen riesgos cardiovasculares, en los cuales se generen flujos de más de 600 personas estáticas o dinámicas, deberán contar con la certificación correspondiente que emita la secretaria de salud, la cual, deberá tener como mínimo un programa de acceso público a la desfibrilación que contará con la disponibilidad de desfibriladores externos automáticos y capacitación en atención cardiovascular de emergencia.

Artículo 58.- La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones:

I. a III...

IV. Notificación de la existencia de personas que requieran de servicios de salud, cuando éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;

Para ello, el operador telefónico del número local de emergencias, deberá reconocer el nivel de riesgo de vida en el que se encuentre el paciente, y con base en ello, proporcionará la información, indicación o instrucción necesaria para mejorar las posibilidades de supervivencia, y

V a VII...

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. a II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, activación física para la salud,salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades, así como la prevención, diagnóstico y control de las enfermedades cardiovasculares **y el reconocimiento y laatención de eventos de**



emergencia cardiaca.

La ***segunda*** Iniciativa se compone de la siguiente manera:

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un artículo 160 BIS a la Ley General de Salud, en materia de emergencias cardiovasculares.

Artículo 160 BIS. Los establecimientos que prestan los servicios de salud a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 34 de la ley en comento, prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia y gratuidad a los pacientes que presenten padecimiento cardiovascular, solicitados de manera directa o por referencia de otra unidad médica y con capacidad de atención a este tipo de emergencias.

La ***tercera*** Iniciativa se compone de la siguiente manera:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE MUERTE SÚBITA.

Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. a VI. ...

VII. La detección y atención de enfermedades cardiovasculares, así como la prevención de la muerte súbita cardiaca desde la infancia hasta la vejez.

III. CONSIDERACIONES

A. La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de una parada cardiaca en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado.

Existe una definición más formal, que es la utilizada en los estudios médicos: "muerte súbita es el fallecimiento que se produce en la primera hora desde el inicio de los síntomas o el fallecimiento inesperado de una persona aparentemente sana que vive sola y se encontraba bien en plazo de las 24 horas previas".

Su principal causa es una arritmia cardiaca llamada **fibrilación ventricular**, que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de muerte súbita pierde en primer lugar el pulso, y en pocos segundos, pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos.

Las medidas de **reanimación cardiopulmonar** pueden conseguir en muchos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere. Si por fortuna sucede esto, estaremos ante una muerte súbita reanimada.

B. La muerte súbita se debe habitualmente a una arritmia cardiaca maligna: la fibrilación ventricular. Esta arritmia produce una actividad eléctrica cardiaca caótica que no es capaz de generar latido cardiaco efectivo,



por tanto el corazón deja de bombear la sangre, la presión arterial cae a cero y se anula el riego sanguíneo del cerebro y del resto del cuerpo. Cuando se detiene la circulación, el oxígeno y los nutrientes dejan de llegar a los órganos, que rápidamente empiezan a sufrir. Es importante saber que el órgano más vulnerable es el cerebro. Unos pocos minutos de parada cardiaca pueden ser la causa de lesiones cerebrales graves; de hecho, estas son las principales secuelas en los pacientes que son reanimados.

La fibrilación ventricular es muy rara en corazones sanos. En personas mayores de 35 años, la causa más frecuente es el **infarto agudo de miocardio**. En las personas jóvenes suele estar relacionada con enfermedades cardiacas previas que pueden afectar tanto al músculo del corazón (miocardiopatías, entre ellas la más frecuentemente asociada es la miocardiopatía hipertrófica), como a la activiadad eléctrica del mismo (canalopatía, como el síndrome de Brugada o el síndrome de QT largo).

C. Las víctimas de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados, y en seguida, dejan de respirar. Sin atención, el color de la piel pierde rápidamente el tono rosado habitual y se torna azul violáceo.

Existe una medida de tratamiento eficaz: la desfibrilación. Consiste en administrar al corazón una descarga eléctrica controlada con un dispositivo que se conoce como desfibrilador. Básicamente, lo que hace este dispositivo es descargar la actividad eléctrica de todas las células del corazón a la vez. Lo habitual es que al reiniciar 'desde cero' la actividad del corazón, este recupere su ritmo habitual normal.

D. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:

- la cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco;
- las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;
- las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores;
- la cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;
- las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y
- las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 58, Y SE ADICIONA UN



ARTÍCULO 160 BIS, DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 58, y se adiciona un artículo 160 BIS, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 58.- …

I. a III…

IV. Notificación de la existencia de personas que requieran de servicios de salud, cuando éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;

Para ello, el operador telefónico del número local de emergencias, deberá reconocer el nivel de riesgo de vida en el que se encuentre el paciente y, con base en ello, proporcionará la información, indicación o instrucción necesaria para mejorar las posibilidades de supervivencia;

V. a VII. …

Artículo 160 BIS. Los establecimientos que prestan los servicios de salud a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 34 de la ley, prestarán atención expedita con criterios de calidad y eficacia a los pacientes que presenten emergencias cardiovasculares.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 160 Bis la Secretaría de Salud deberá de establecer el protocolo para el manejo de pacientes con infarto agudo al miocardio, que brinde la mejor terapia con el objetivo de reducir sus complicaciones y mortalidad.

TERCERO. La Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el ejercicio fiscal que corresponda al momento de la entrada en vigor del presente Decreto- y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo.

Así mismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

ADENDA

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CARDIOVASCULARES.

LEY GENERAL DE SALUD	LEY GENERAL DE SALUD
DICTAMEN FINAL Dice:	ADENDA DE COMISIONES Debe decir:
TRANSITORIOS	TRANSITORIOS ... ... CUARTO: Las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, podrán firmar convenios de colaboración entre ellas y con las instituciones privadas para el acuerdo y oportuno tratamiento del infarto agudo al miocardio.

1



ADENDA

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CARDIOVASCULARES.

Sen. Francisco Salvador López Brito
Presidente
Comisión de Salud

Sen. Miguel Romo Medina
Comisión de Estudios Legislativos

2





ADENDA

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CARDIOVASCULARES.

LEY GENERAL DE SALUD	LEY GENERAL DE SALUD
DICTAMEN FINAL Dice:	ADENDA DE COMISIONES Debe decir:
TRANSITORIOS	TRANSITORIOS ... ... **CUARTO:** Las instituciones públicas que conforman el Sistema Nacional de Salud, podrán firmar convenios de colaboración entre ellas y con las instituciones privadas para el adecuado y oportuno tratamiento del infarto agudo al miocardio.

0003221
CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
2018 ABR 12 PM 2 31
RECIBIDO

ADENDA

PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE CARDIOVASCULARES.

Sen. Francisco Salvador López Brito
Presidente
Comisión de Salud

Sen. Miguel Romo Medina
Comisión de Estudios Legislativos

2





26. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 73 de la Ley General de Salud.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de adultos mayores.

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 fracción I, 136, 137 numeral 2, 182, 186, 188, 190, 191, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Iniciativa y de los trabajos previos de la Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA INICIATIVA"**, se sintetiza el alcance de las proposiciones de mérito.

III. En el capítulo de "**CONSIDERACIONES"**, las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

2. Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Senador Félix González Canto, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversas fracciones del artículo 73 de la Ley General de Salud en materia de adultos mayores.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La propuesta está compuesta de la siguiente manera:



PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII, se adiciona una fracción IX, recorriéndose en su orden subsiguiente la actual fracción IX del artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 73.-

I. a VII. .-

VIII.- La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños, adolescentes **y Personas Adultas Mayores**;

IX.-El desarrollo de programas para la atención de la depresión, del deterioro cognoscitivo y de la demencia en las Personas Adultas Mayores, y

X.-Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

III. CONSIDERACIONES

A. En México, en 2017 habitan 12 millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 ciento son hombres, de acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Población.

De las 656 mil defunciones registradas en 2015, 65 por ciento correspondieron a personas de 60 y más años, de acuerdo con las Estadísticas de mortalidad 2015.

El instituto destacó que la población adulta tiene una esperanza de vida de 75.3 años para 2017, por lo que el peso relativo de los adultos mayores adquiere una mayor relevancia en la estructura por edad.

B. Por su parte, el Programa Iberoamericano de Cooperación sobre Adultos Mayores hace énfasis en "no escatimar esfuerzos para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas mayores, así como trabajar en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia". Es un derecho de esta población recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de ellos reside al menos una persona de 60 y más años. El INEGI apuntó que en el país hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas y la mayoría son mujeres.

La ENIGH 2016, puntualiza que, del total de adultos mayores, 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento, donativos de otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2 por ciento cuenta con apoyos de programas gubernamentales.

Respecto a la tasa de participación económica, durante el primer trimestre de 2017, 33.9 por ciento corresponde a personas de 60 y más años, 50.9 por ciento son hombres, y 19.6 por ciento son mujeres. El 61.8 por ciento trabaja sin contrato laboral y casi la mitad, 47.7 por ciento, no cuenta con prestaciones, de hecho, 73.2 por ciento lo hace de manera informal.



De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, en el país, residen 3.4 millones de personas de 60 y más años con discapacidad y 4.7 millones con limitación.

En el tema de pensiones, conforme a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) levantada en 2013, 6.1 por ciento de los adultos mayores se encuentran pensionados, 40.9 por ciento por jubilación, 33.9 por ciento por retiro o vejez, 17.5 por viudez y 3.6 por accidente o enfermedad de trabajo.

C. En 2030, los adultos mayores en el país van a ser 20.4 millones, en tono al 15 % de la población total. Esa es la tendencia a nivel mundial. La esperanza de vida ha crecido y lo seguirá haciendo en todo el mundo. Es, sobre todo, una conquista de la medicina.

La expectativa de vida en México en la década de los treinta y cuarenta era de entre 40 y 45 años. Ahora es de 75 años, que son entre 30 y 35 años más en un periodo de 70 años. Al final del siglo XXI podrá andar en torno a los 90 años. En los países más desarrollados en los 100 años.

Hoy en México una persona de 60 años se espera que viva por lo menos 22 años más. Para 2050, el promedio de vida será de 80 años. Ahora, por primera vez en la historia, en el país hay más personas mayores de 60 años que niños de menos de cinco años.

El proceso de envejecimiento es desigual en el país. Los estados con una población de adultos mayores más grandes son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Los que tienen población más joven son Baja California Sur, Colima y Campeche.

Por ello es importante la salud mental de los adultos mayores, en ese tenor de ideas es que estas comisiones dictaminadoras hacen ver que la propuesta es viable.

Por lo antes expresado, las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con las atribuciones que les otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 188 y 212 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta H. Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción VIII, del artículo 73 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 73.- …

I. a VII.- ….

VIII.- La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños, adolescentes y **personas adultas mayores**;

IX**.-** …

TRANSITORIOS.

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



27. De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Los Integrantes de las Comisiones referidas, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, 188 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de «Antecedentes» se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la Minuta referida;

II. En el capítulo correspondiente al «Contenido» se exponen los motivos y alcance de la Minuta de mérito;

III. En el capítulo de «Consideraciones» las Comisiones dictaminadoras expresan los argumentos de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Dictaminadoras.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 16 de noviembre de 2017, la Diputada Fabiola Rosas Cautle, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó Iniciativa materia del presente dictamen.

2. Mediante oficio D.G.P.L. 63-II-4-2685, del 16 de noviembre de 2017, con número de expediente 8532, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó

1



la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional de dicha Cámara para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En Sesión del Pleno de fecha 12 de diciembre de 2017, la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, aprobó Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

4. En Sesión Ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, recibió el expediente referido en el párrafo anterior y la Mesa Directiva, dispuso el turno a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO

La Minuta objeto del presente Dictamen, tiene como finalidad actualizar en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos las denominaciones de las instituciones castrenses que fueron establecidas en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016[1].

Así, en las consideraciones del dictamen elaborado por la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, se señala que de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Secretarías de Estado tienen la facultad para administrar los asuntos de su competencia, y de acuerdo a la fracción I del numeral 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde el despacho de organizar, administrar y preparar al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos.

En ese sentido, también se señala que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, tienen la primordial misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación, garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas, así como de brindar apoyo en caso de desastres, coadyuvar con las autoridades civiles para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y bienes, así como para la reconstrucción de las zonas afectadas. Dichas acciones con el objeto de defender la

[1] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437363&fecha=16/05/2016



integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Asimismo, que le corresponde al Estado Mexicano garantizar el sostenimiento del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, en congruencia con los objetivos nacionales permanentes y coyunturales que se proyectan a alcanzar.

De ese modo, se menciona que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y la primera Meta Nacional: «México en Paz», la misión de las Fuerzas Armadas, es emplear el poder militar de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; una de las estrategias es preservar la paz, independencia y soberanía de la Nación, mediante diversas líneas de acción, dentro de las que destaca: impulsar la creación de instrumentos jurídicos que fortalezcan la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de defensa exterior y seguridad interior y en particular:

- Promover reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
- Crear normas legales y reglamentarias tendientes a fortalecer el desarrollo, la operación y los beneficios para las Fuerzas Armadas.
- Actualizar el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por ello refiere que la propuesta de reforma de mérito, resulta coincidente con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución militar, y hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano al promover reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De esa forma, se menciona que el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, en su Objetivo 1, refiere: «ante el desafío coyuntural actual, surge de manera natural la necesidad de impulsar el marco legal que atienda la realidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de la coordinación, la cooperación y la colaboración interinstitucional entre los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de Gobierno y la sociedad en general, es en sí misma una estrategia para lograr los objetivos del Estado Mexicano», y en su estrategia 1.6. «Fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar», contempla la línea de acción 1.6.3. «Promover reformas a la Ley



Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos» y en su línea de acción 1.6.7. «Coordinar e impulsar reformas legales y reglamentarias que fortalezcan el desarrollo, operación y beneficios para las Fuerzas Armadas».

Finalmente, señala que se estima conveniente reformar diversos artículos a la ley objeto del presente dictamen, y no se considera conveniente reformar los artículos 21 fracción III, 68 fracción IX, 74, 120, 161 segundo párrafo, 174 primer párrafo, fracción III en relación al término de Fuero de Guerra a Fuero Militar y de adicionar el término Militar al Servicio de Justicia, toda vez que cambiar el término de Fuero de Guerra por Fuero Militar contraviene lo que dispone el artículo 13 constitucional, que prevé dicha denominación, al establecer que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército, no obstante es claro que ambos conceptos, (fuero de guerra y fuero militar) se refieren a la Jurisdicción Militar, objeto de Justicia Militar.

En esa virtud, la H. Cámara de Diputados remitió al H. Senado de la República para los efectos constitucionales del artículo 72, el siguiente proyecto de Decreto:

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14, fracción II; 27; 28; 29; 30; 92, primer párrafo y fracción I; 109, fracción VI, inciso B; 144; 174, fracción III; 199, fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14. ...

I. ...

II. Nombrar al Subsecretario; al Oficial Mayor; al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al **Fiscal** General de Justicia Militar y al Presidente así como a los Magistrados del Tribunal **Superior** Militar;

III. a **IX.** ...

ARTÍCULO 27. Los Órganos del Fuero de Guerra conocerán de los delitos en los términos que establecen el código de Justicia Militar **y el Código Militar de Procedimientos Penales.**

ARTÍCULO 28. Los Órganos del Fuero de Guerra son:



I. Tribunal **Superior** Militar;

II. **Fiscalía** General de Justicia Militar; y

III. **Defensoría** de Oficio **Militar**.

ARTÍCULO 29. La organización y funcionamiento del **Tribunal Superior Militar, Fiscalía General de Justicia Militar y Defensoría de Oficio Militar,** quedan establecidos en el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 30. Los cargos que desempeña el personal que integra las Dependencias del Tribunal **Superior** Militar, son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Dependencias de los Gobiernos: Federal, Estatales y Municipales.

ARTÍCULO 92. El Servicio de Justicia tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por los delitos del fuero de guerra y vigilar **la ejecución** de las penas impuestas por las Dependencias encargadas de administrar la justicia; el asesoramiento a la Secretaría de la Defensa Nacional en asuntos técnico jurídicos; y además realizará las actividades siguientes:

I. Llevar a cabo la administración del personal del Servicio **de Justicia**;

II. a **VII**. ...

ARTÍCULO 109. ...

I. a **V**. ...

VI. ...

A. ...

B. Auxiliar a la Policía Ministerial Militar.

ARTÍCULO 144. Los Cabos en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea, serán seleccionados de entre los Soldados y propuestos al Secretario de la Defensa Nacional por los Comandantes de las mismas, en los términos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea **Mexicanos**, para cubrir las vacantes existentes en sus plantillas orgánicas.

ARTÍCULO 174. ...

I. a **II**. ...

III. Desempeñar actividades o empleos civiles en Dependencias del Ejecutivo **Federal**, de los Gobiernos de las **Entidades Federativas**, de los Municipios, en organismos descentralizados o empresas de



participación Estatal y otras Dependencias Públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las Armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos.

...

...

ARTÍCULO 199. ...

I. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de escalafón y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas del **Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos**, y

II. ...

ARTÍCULO 207. La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo anterior, debiendo observarse las normas contenidas en la **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el reglamento de ésta**, o los Ordenamientos que los substituyan.

ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas y Aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las Unidades y el establecimiento de Dependencias, Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares **de Control**, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, Polígonos de Tiro, así como los destinados al adiestramiento, experimentación, pruebas y Unidades Habitacionales y demás necesarios para sus fines.

Transitorio

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Establecido el objeto y contenido de la minuta, estas Comisiones Unidas formulan las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La reforma constitucional en materia de justicia que fue publicada en el Diario



Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008[2], contemplaba en su artículo segundo transitorio, la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio en un plazo que no debía exceder de ocho años, contados a partir del día siguiente de la publicación del citado decreto. Por ello, tanto el Poder Legislativo Federal, como el Local, aprobaron diversas legislaciones materia de la reforma al citado sistema de justicia a fin de cumplir con lo previsto por las disposiciones transitorias del decreto del 18 de junio referido.

En ese sentido, dicha reforma tuvo como objetivo: implantar un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, regido por los principios de **publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad**; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos[3].

SEGUNDA.- En ese tenor, se presentaron en el Congreso de la Unión diversas iniciativas con la finalidad adecuar el Código de Justicia Militar y expedir un nuevo ordenamiento para transitar al Sistema Penal Acusatorio, ajustando la estructura orgánica de los operadores del Sistema de Justicia Penal Militar y derogando el procedimiento previsto en el anterior Código.

En consecuencia, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, en materia del nuevo sistema de justicia y se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016[4].

Los cambios anteriores, implicaron, entre otras cosas:

- La supresión de los Consejos de Guerra.

---

[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008
[3] http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/60/2008/feb/20080221-IV.html#Dictamenes
[4] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5437363&fecha=16/05/2016



- La creación de Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral.
- La transformación de la Procuraduría General de Justicia Militar en Fiscalía General de Justicia Militar.
- La transformación del Cuerpo en Defensores de Oficio en Defensoría de Oficio Militar.
- La creación de la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses[5].

Bajo ese contexto, los Senadores que integramos las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, estimamos pertinentes las propuestas de reforma aprobadas por la Cámara de Diputados, las cuales tienen como finalidad actualizar en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos las denominaciones de las instituciones castrenses que fueron establecidas en las citadas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2016.

TERCERA.- Como lo señala la Colegisladora, de acuerdo al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Secretarías de Estado tienen la facultad para administrar los asuntos de su competencia, y de acuerdo a la fracción I del numeral 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde el despacho de organizar, administrar y preparar al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos.

En ese sentido, de conformidad con el artículo 1º de su Ley Orgánica, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tienen como misiones generales: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior; auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

De ese modo, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018[6] y al Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018[7], es necesaria la creación de instrumentos

[5] http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160421-IV.pdf
[6] http://pnd.gob.mx/
[7] http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326566&fecha=13/12/2013



jurídicos que fortalezcan la actuación de las Fuerzas Armadas en actividades de defensa exterior y seguridad interior.

Por lo tanto, los Senadores que integramos las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos coincidimos con la Colegisladora en que la propuesta de reforma motivo del presente dictamen, resulta coincidente con los objetivos del Gobierno Federal para fortalecer el marco legal de las Fuerzas Armadas y la jurisdicción militar, con la finalidad de aprovechar las fortalezas de la institución militar, y hacer más eficiente y eficaz su desempeño para contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberanía del Estado Mexicano al promover reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 135, 150, 178, 182, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14, fracción II; 27; 28; 29; 30; 92, primer párrafo y fracción I; 109, fracción VI, inciso B; 144; 174, fracción III; 199, fracción I; 207 y 209 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 14. ...

I. ...

II. Nombrar al Subsecretario; al Oficial Mayor; al Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea; al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al **Fiscal** General de Justicia Militar y al Presidente así como a los Magistrados del Tribunal **Superior** Militar;



III. a **IX.** ...

ARTÍCULO 27. Los Órganos del Fuero de Guerra conocerán de los delitos en los términos que establecen el Código de Justicia Militar **y el Código Militar de Procedimientos Penales**.

ARTÍCULO 28. Los Órganos del Fuero de Guerra son:

I. Tribunal **Superior** Militar;

II. Fiscalía General de Justicia Militar; y

III. Defensoría de Oficio **Militar.**

ARTÍCULO 29. La organización y funcionamiento del **Tribunal Superior Militar, Fiscalía General de Justicia Militar y Defensoría de Oficio Militar,** quedan establecidos en el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 30. Los cargos que desempeña el personal que integra las Dependencias del Tribunal **Superior** Militar, son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en Dependencias de los Gobiernos: Federal, Estatales y Municipales.

ARTÍCULO 92. El Servicio de Justicia tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por los delitos del fuero de guerra y vigilar **la ejecución** de las penas impuestas por las Dependencias encargadas de administrar la justicia; el asesoramiento a la Secretaría de la Defensa Nacional en asuntos técnico jurídicos; y además realizará las actividades siguientes:

I. Llevar a cabo la administración del personal del Servicio **de Justicia**;

II. a **VII.** ...

ARTÍCULO 109. ...



I.a V. ...

VI. ...

A. ...

B. Auxiliar a la Policía Ministerial Militar.

ARTÍCULO 144. Los Cabos en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea, serán seleccionados de entre los Soldados y propuestos al Secretario de la Defensa Nacional por los Comandantes de las mismas, en los términos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea **Mexicanos**, para cubrir las vacantes existentes en sus planillas orgánicas.

ARTÍCULO 174. ...

I. y **II.** ...

III. Desempeñar actividades o empleos civiles en Dependencias del Ejecutivo **Federal**, de los Gobiernos de las **Entidades Federativas**, de los Municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación Estatal y otras Dependencias Públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las Armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos.

...

...

ARTÍCULO 199. ...

I. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de escalafón y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas del **Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos**, y

II. ...



ARTÍCULO 207. La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las misiones generales que tienen encomendadas, dichas previsiones deberán incluir también los recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el Artículo anterior, debiendo observarse las normas contenidas en la **Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el reglamento de ésta**, o los Ordenamientos que los substituyan.

ARTÍCULO 209. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente o transitorio y comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, Campos Militares, Bases Aéreas y Aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las Unidades y el establecimiento de Dependencias, Cuarteles, Oficinas, Almacenes, Parques, Talleres, Prisiones y Juzgados Militares **de Control**, Hospitales, Escuelas, Criaderos de Ganado, Polígonos de Tiro, así como los destinados al adiestramiento, experimentación, pruebas y Unidades Habitacionales y demás necesarios para sus fines.

Transitorio

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, 7 de febrero de 2018.

COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO
PRESIDENTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

SEN. JOEL AYALA ALMEIDA
SECRETARIO

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA
SECRETARIO

SEN. CARLOS ROMERO DESCHAMPS
SECRETARIO

SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA
INTEGRANTE

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA
INTEGRANTE

SEN. SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO
INTEGRANTE

13



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA
INTEGRANTE

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO
INTEGRANTE

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

14



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



28. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 323 Ter del Código Civil Federal y se reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la *Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.*

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente

Página **1** de **28**



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado "**ANTECEDENTES**", se da constancia del trámite legislativo dado a la Iniciativa objeto del presente dictamen.
II. En el apartado titulado "**CONTENIDO DE LA INICIATIVA**" se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.
III. En la parte de "**CONSIDERACIONES**", las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y argumentos con los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 23 de agosto de 2017, la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente *Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinó turnarla —mediante oficio no. CP2R2A.-5922—, a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su análisis y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos, la iniciadora señala que los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la protección especial de los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

En la Declaración Universal de los Derechos para las niñas y niños, asevera, se reconocen diez principios: derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; derecho a la protección y consideración del interés superior de la niñez; derecho al nombre y a la nacionalidad; derecho a la salud, alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos; derecho del niño impedido física y mentalmente a recibir atención especial; derecho a la vinculación



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

afectiva y a no separarse de sus padres; derecho a la educación, al juego y recreaciones; derecho a la prioridad en protección y socorro; protección contra abandono, crueldad y explotación; protección en contra de la discriminación.

Afirma que la Asamblea General de la ONU aprobó en su resolución 44/25, la Convención sobre los Derechos del Niño, que México ratificó en 1990. Que tal Convención constituye el referente para el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos en todos los aspectos de la vida.

Igualmente, que el 12 de octubre de 2011 se concretó una reforma constitucional trascendente que plasmó la observancia del interés superior de la niñez, en todas las decisiones que adopte el Estado.

Señala que otro avance trascendental lo fue la publicación y entrada en vigor, en 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Que gracias a ello, se cuenta con el Sistema Nacional de Protección Integral como ente coordinador de las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno a fin de promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. También, que la norma contempla los requerimientos para que los centros de asistencia social cuenten con servicios de calidad, medidas de



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

protección especial, medidas para combatir el acoso escolar y la violencia mediante protocolos de actuación, entre otros.

Que la Ley General contempla el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, por lo que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, y a no ser utilizados en conflictos armados o violentos.

Por lo que toca al derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, la Ley establece que tienen derecho a que se les resguarde su integridad a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad, por lo que las autoridades competentes están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de afectación de derechos.

Advierte que, luego de la presentación de los Informes Cuarto y Quinto Consolidados acerca de la situación de la niñez, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) recomendó al Estado mexicano:

> ***32.*** *A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe:*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

> ***(a)*** *Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia;*
> ***(b)*** *Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el "derecho a corregir" sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños;*
> *(...)*

Que, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el *Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes* reconoció la gravedad y seriedad de esta práctica señaló que:

> *La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, definió el castigo "corporal" o "físico" como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante"*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Que al respecto la CIDH propone medidas legislativas que deben adoptar los Estados:

> ***A. Medidas legislativas***
>
> ***95.*** *Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo corporal, la Comisión comprende tanto la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a personas menores de 18 años; como la eliminación de criterios de "corrección moderada" que aún en muchos países forman parte de las regulaciones correspondientes a la institución de la patria potestad; así como la adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.*

Que la CIDH exige la acción integral del Éstado, que incluye tomar medidas legislativas y educativas, en materia de salud, justicia y seguridad interna, entre otras.

Que cualitativamente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENAMIN 2015), 44 por ciento de niñas y niños menores de 14 años sufrió algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se aplicó mediante agresión psicológica, en tanto que sólo 14 por ciento de los entrevistados fue educado sin violencia.

Que la misma encuesta refleja que 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes de uno a catorce años de edad, ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por parte de miembros del hogar; esto es, asevera, seis de cada diez experimentaron algún tipo de disciplina violenta. Asimismo, 8



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables.

Que el Estado mexicano se sumó, en junio de 2016, a la "Alianza Global para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes" —promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la cual busca sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre el impacto de la violencia en la vida de la niñez, a fin de adoptar acciones prioritarias por parte de todos los sectores sociales.

De esta manera, detalla, a fines del mismo año, dentro del Sistema Nacional de Protección Integral se instaló la Comisión para poner fin a toda forma de violencia (COMPREVNNA), luego de ser aprobada su creación en agosto de 2016.

Señala, que el objetivo de dicha comisión es el de articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y respuesta a la violencia, así como atender las obligaciones y compromisos nacionales e internacionales contraídos por el Estado mexicano.

Que a partir de marzo del presente año, se iniciaron los trabajos para elaborar el Plan de Acción para prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y donde se abordan grandes temáticas como entornos seguros, apoyo a padres y cuidadores, ingresos y fortalecimiento económico, normas y valores,



educación y aptitudes para la vida, servicios de respuesta y apoyo, así como aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes.

Finalmente, informa, el pasado 28 de junio la COMPREVNNA aprobó en lo general el Plan de Acción de México, que tiene como misión prevenir, atender y responder a todas las formas de violencia, contándose con la colaboración integral y multisectorial de los tres órdenes de gobierno y de los actores sociales y privados.

Así, al Congreso le corresponden las siguientes tareas:

- Elaborar la ruta crítica que facilite el seguimiento o propuestas de reformas legislativas a favor de la prevención y atención integral.
- Armonización legislativa estatal que incluya los temas de prohibición explícita del castigo corporal en todos los ámbitos y del matrimonio infantil.

Afirma la iniciadora que dadas las observaciones del Comité de los Derechos del Niño y para dar cumplimento a las tareas que se desprenden del Plan de Acción para prevenir la violencia, y en atención a las peticiones y opiniones vertidas en el Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México, propone las enmiendas legislativas que prohíban explícitamente el castigo corporal y humillante, tanto en el Código Civil Federal como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En consecuencia, plantea:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

- Reformar el primer párrafo del artículo 323 Ter, del Código Civil Federal
- Reformar la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por ello, propone el siguiente

Proyecto de Decreto:

LEGISLACIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
	Artículo Primero. Que reforma el primer párrafo del artículo 323 ter, del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Código Civil Federal	
TITULO SEXTO Del Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar (...) CAPITULO III De la Violencia Familiar (...)	
Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.	**Artículo 323 ter.-** Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. **Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes.**



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.	(...)
	Artículo Segundo. Que reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las obligaciones siguientes:	**Artículo 105** (...)
I a III (...)	I a III (...)



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.	IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten cualquier tipo de violencia en su contra, en particular **queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.**
	Transitorios
	Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.
	Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, son competentes para emitir el dictamen correspondiente a la *Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.*

SEGUNDA. La **Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes** (LGDNNA) establece, entre otros, en el Título Segundo, que



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, esto en el artículo 13.

Ya en el capítulo octavo, desarrolla tal derecho en consonancia con la prevalencia del interés superior de la niñez, que constituye uno de los principios rectores de la Ley General.

En ese tenor, en el artículo 46 se estipula que *tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.*

Más aún, en el subsiguiente artículo se establece que las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno *están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el* descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; la trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables; el tráfico de menores, entre otros.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El mismo artículo, 47, prevé en su penúltimo párrafo, que *las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.*
Enseguida, en el artículo 48, dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar *medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.*

TERCERA. El Título Sexto, Del Parentesco, de los Alimentos y de la Violencia Familiar —del Libro Primero—, del **Código Civil Federal** contiene un capítulo específico denominado de la violencia familiar, la cual define como *el uso de la*

fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas (...)

CAPITULO III
De la Violencia Familiar

Artículo 323 bis.- *Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y*



participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 323 ter.- *Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.*

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

CUARTA. El **Código Penal Federal** vigente contempla un capítulo en torno a la violencia familiar, dentro del Título Decimonoveno, Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.

En él, se establece que *comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica*, disponiendo que *se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión*, lo anterior en el artículo 343 Bis.

Igualmente, el artículo 343 Ter, establece la misma sanción para quienes realicen cualquiera de los actos señalados en el precedente, *en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

CAPITULO OCTAVO
Violencia familiar

Artículo 343 Bis*. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.*

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Artículo 343 Ter. *Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la*

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.

Artículo 343 Quáter.- *En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

QUINTA. Por su parte, la **Convención sobre los Derechos del Niño**, dispuso en sus artículos 19, 28 y 37 que los Estados Partes han de adoptar las medidas apropiadas de orden legislativo, administrativo, social o educativo, para proteger al niño contra toda forma de violencia

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Concretamente, en el ámbito escolar se debe vigilar porque la disciplina administrada sea compatible con la dignidad humana:

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

> *2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.*

Más aún, los Estados Partes deben velar porque *ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad* (inciso a del artículo 37)

Como lo asegura la iniciadora, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) —a raíz del análisis de los *Informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño*, de junio de 2015—, vertió una serie de recomendaciones al Estado mexicano, en lo referente al derecho a una vida libre de violencia, expresando sin embargo su preocupación por la impunidad prevaleciente frente a los casos registrados.

Para el Comité, resulta preocupante *la elevada incidencia de castigo corporal de niñas y niños, la violencia doméstica y la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas,* por lo que instó a *asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el "derecho a corregir" sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños;

D. Violencia contra niñas y niños (arts. 19, 24, párr.3, 28, párr.2, 34, 37 (a) y 39)
(...)
Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia

31. *Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la LGDNNA en relación con la aprobación de legislación y políticas en los niveles federal y estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra niñas y niños, le preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la prevalencia de la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en el país. Además, el Comité está preocupado de manera particular por:*

(a) La prevalencia de la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes o castigo de niñas y niños, en particular contra la niñez en situación de migración, contra la niñez en situación de calle, y contra los niños y niñas en bajo custodia policial o detención por las autoridades policiales;
(b) La elevada incidencia de castigo corporal de niñas y niños, la violencia doméstica y la violencia de género y la falta de acceso a la justicia para niñas y niños víctimas;
(c) La creciente violencia, incluida la violencia sexual, el acoso escolar, y la alta tasa de adolescentes abusados a través de Internet;
(d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos a la violencia de las corridas de toros.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe:

(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia;
(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y estatal y que el "derecho a corregir" sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños;
(...)

SEXTA. Efectivamente, como lo afirma la iniciadora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó la definición de castigo corporal —propuesta por el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General número 8—, ello en el párrafo 14 del *Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes*, de 2009, precisando a la par la existencia de castigos no físicos pero igualmente crueles y degradantes.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes

B. Castigo Corporal

14. La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General N° 8 adoptada en el 2006, definió el castigo "corporal" o "físico" como "todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto -azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante". La definición planteada por el Comité de los Derechos del Niño contiene dos elementos que permiten distinguir claramente el castigo corporal del maltrato o los malos tratos. En tal sentido, se observan dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero consiste en la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de la niña, niño o adolescente. El segundo elemento de carácter objetivo se configura con el uso de la fuerza física. La convergencia de estos dos elementos configuran al castigo corporal como una práctica que vulnera los derechos humanos de los niños.

15. Adicionalmente, el Comité observó que hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo,

Página **21** de **28**



los castigos en que se "menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño". Sobre la Observación General N° 8 del Comité de Derechos del Niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que esta tiene "el objetivo de orientar a los Estados acerca de la interpretación de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de eliminar la violencia contra los niños. En este sentido, definió los conceptos de "castigo corporal" y "otras formas de castigos crueles o degradantes, indicando que ambos son incompatibles con dicha Convención, ya sea que éstos se ejerciten en el hogar, la familia o cualquier otro entorno".

Más adelante, en el mismo documento, la CIDH señaló que *el cumplimiento de las obligaciones de respetar y de garantizar asumidas por los Estados para la protección de las niñas, niños y adolescentes contra el castigo corporal, exige medidas de toda índole, cuyo objetivo debe ser la erradicación absoluta de esta práctica*, precisando que *puede percibirse que existe un consenso en la comunidad internacional respecto al carácter imperioso que tiene la prohibición legal del castigo corporal contra los niños.*

En ese tenor, sugiere, en el párrafo 95, la adopción de normas que explícitamente prohíban el castigo corporal.

En el párrafo 97 valora que *si bien en muchos países de la región existen leyes que protegen a las niñas, niños y adolescentes contra la violencia física y el maltrato infantil, tales normas no garantizan un ámbito de protección adecuada para que los niños no sean víctimas de castigos corporales.*



Para la Comisión Interamericana *no es posible admitir que frente a la aceptación social generalizada respecto a la permisibilidad del castigo corporal, los Estados permanezcan incólumes y pretendan justificar el castigo corporal como una necesidad y como una medida disciplinaria que responde a fines positivos dado que su aplicación es considerada beneficiosa para la niña, el niño y el adolescente.*

Asimismo, la Comisión expone dos razones —en el párrafo 98—, para prohibir el castigo corporal, los de visibilizar tal práctica y ser un referente para los operadores jurídicos:

> *(...) Uno porque visibiliza el reconocimiento de la práctica de castigo corporal como una forma de violencia y una violación de derechos humanos, la cual tiene un efecto absoluto en la conducta de los agentes públicos y segundo porque sin bien* ***el objetivo de la prohibición no es penalizar la conducta*** *de los padres en el ámbito privado; lo importante es reconocer que la prohibición legislativa constituye un referente para la actuación de los operadores jurídicos encargados de implementar el derecho interno a fin de asegurar protección cuando se trata de casos de personas menores de 18 años que alegan ser víctimas de castigo (...)*

No obstante, asevera la Comisión Interamericana que *complementariamente la adopción de medidas legislativas requiere para ser efectiva que los Estados provean lineamientos orientadores para su aplicación como son por ejemplo la*



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

difusión de las normas y la promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes (párrafo 99)

SÉPTIMA. En este contexto, las Comisiones Dictaminadoras estiman que las enmiendas propuestas por la iniciadora, a los artículos 323 Ter del Código Civil Federal, y al artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, complementan, refuerzan y armonizan la normativa en la materia, y porque atienden puntualmente una de las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano por parte del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.

Empero, estas Comisiones Dictaminadoras tienen a bien formular una adecuación a la enmienda del primer párrafo del artículo 323 Ter del Código Civil Federal a efecto de no *reformarlo propiamente*, sino de adicionar el enunciado propuesto como un párrafo tercero del mismo artículo; ello, con el propósito de no restar continuidad y congruencia en los primeros párrafos que aluden explícitamente a la violencia familiar y su definición, y al hecho que está claramente tipificada como delito en el Código Penal Federal. Y para que la prohibición que pretende instituir quede diferenciada de aquella por cuanto no se busca penalizarla, atendiendo lo que dicta la CIDH en el párrafo 98 del Informe previamente citado.

De modo que, el artículo 323 Ter quedaría de la siguiente manera:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar.

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que atente contra su integridad física, psíquica o ambas independientemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.

Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes.

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, someten a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Artículo Primero.-Se **adiciona** el párrafo tercero al artículo 323 Ter del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 323 Ter.- ...

...

Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes.

Artículo Segundo.- Se **reforma** la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 105. ...

I. a III. ...

IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten cualquier tipo de violencia en su contra, en particular **queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.**



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Así se acordó y votó en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, realizada en el Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de 2017.

Sen. Martha Elena García Gómez
Presidenta

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Secretaria

Sen. Yolanda de la Torre Valdez
Secretaria



Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



29. De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 13; se adiciona el capítulo vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 101 BIS, 101 BIS 1 Y 101 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 101 BIS, 101 BIS 1 Y 101 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

HONORABLE ASAMBLEA

A las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la Honorable Cámara de Senadores, de la LXIII Legislatura, les fue turnada para su análisis y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo, y los artículos 101 bis, 101 bis 1 y 101 bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Página **1** de **20**



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 101 BIS, 101 BIS 1 Y 101 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Las Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente

METODOLOGÍA

Las Comisiones responsables del análisis y dictamen de la Minuta que nos ocupa, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe

I. En el capítulo denominado "**ANTECEDENTES**", se da constancia del trámite legislativo dado a la Minuta referida.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

II. En el apartado titulado "**CONTENIDO DE LA MINUTA**" se hace una breve referencia de las motivaciones y alcances de la misma.

III. En la parte de "**CONSIDERACIONES**", las y los integrantes de las Comisiones Unidas expresan los argumentos y razones con los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 6 de octubre del 2016, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. El 07 de noviembre de 2017, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Iniciativa referida en el numeral que antecede, siendo remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos Constitucionales, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-2834, expediente número 3984.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

3. Con fecha 09 de noviembre de 2017, en sesión plenaria del Senado de la República, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio con el que se remite la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo, y los artículos 101 bis, 101 bis 1 y 101 bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, para su estudio y resolución.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Señala la Colegisladora que el artículo Cuarto de la Carta Magna establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado mexicano se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos; por lo que guiará la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Afirma también que se reconoce la importancia de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, ya que éstas les seguirán permitiendo integrarse y desarrollarse en la sociedad del conocimiento lo que contribuye a su aprendizaje y desarrollo de habilidades diversas.

Que la igualdad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación contribuye a conformar una sociedad más justa, porque facilita las comunicaciones globales, permite el conocimiento de la información, y a reconocer la diversidad cultural.

Advierte que la Constitución General establece, por un lado, que el Estado debe garantizar el acceso de toda la población a las tecnologías de la información y comunicación, y por otro, las condiciones en que deben ser prestados los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Por ello, asegura, es necesario fortalecer la normatividad en la materia para que esta cumpla con los objetivos elementales de toda ley.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Expresa que ningún derecho humano es más importante que otro, por lo que en razón del principio de interdependencia, los derechos humanos están conectados entre sí, y para que uno de ellos se ejerza es indispensable la realización de otros derechos.

Por tanto, sostiene, cobra relevancia que el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esté inserto en el Capítulo I denominado De los Derechos Humanos y sus Garantías, del Título Primero, lo cual significa que el Estado mexicano, al publicar la reforma en materia de Telecomunicaciones en 2013, suscribió el compromiso de garantizar a toda persona el derecho de acceso a las tecnologías de la comunicación y la información, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

Que en la Constitución General se enuncia de manera general la referida garantía y, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se debe expresar en un capítulo específico las medidas necesarias que han de tomar las autoridades para que las personas



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

menores de edad puedan acceder a tal derecho, tal y como sucede con cada uno de los derechos de la infancia.

Que para resolver el sentido y contenido de la Minuta fue considerada la opinión técnica que sobre la iniciativa de origen vertió el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo anterior, se propone la siguiente enmienda legislativa:

- Reformar la fracción XX del artículo 13; adicionar el Capítulo Vigésimo al Título Segundo, y los artículos 101 bis, 101 bis 1 y 101 bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

LEGISLACIÓN VIGENTE	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	
	Artículo Único. Se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona el Capítulo Vigésimo, denominado "Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación", al Título Segundo, que comprende los artículos 101 bis, 101 bis 1 y 101 bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

	quedar como sigue:
TÍTULO SEGUNDO **De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**	
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:	
I a XIX (...)	
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.	**XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.**
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición.	...



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

(...)	
	Capítulo Vigésimo
	Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
(Sin Correlativo)	**Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.**
(Sin Correlativo)	**Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3º Constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.**
(Sin Correlativo)	**Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al**



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

	acceso y uso seguro del internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.
	Transitorios
	Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*, —sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente. **Segundo**. Los plazos para el cumplimiento efectivo de las obligaciones referidas en el presente Decreto serán los establecidos en el "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el *Diario Oficial de la federación* el 14 de julio de 2014.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos —de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 135, 136, 137, 178, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento del Senado de la República— , son competentes para emitir el dictamen correspondiente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona el Capítulo Vigésimo al Título Segundo, y los artículos 101 bis, 101 bis 1 y 101 bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

SEGUNDA. Las Comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora cuando afirma que el principio del interés superior de la niñez, de rango Constitucional, debe guiar el diseño, ejecución,



seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

De la misma manera, cuando señala que se reconoce la importancia de garantizar el acceso de este sector de la población a las tecnologías de la información y comunicación, en virtud de que estas les permitirán integrarse y desarrollarse en la sociedad del conocimiento, lo que contribuirá a su aprendizaje y mejora de habilidades sociales, científicas y tecnológicas.

Más aún, cuando destaca que la Constitución General misma, establece que *el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios*, lo anterior en el artículo 6º.

Precisando que en el apartado B del citado artículo Constitucional se estipula que en lo concerniente a la materia de radiodifusión y telecomunicaciones:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

- *El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales* (fracción I, apartado B del artículo 6º Constitucional)
- *Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias* (fracción II, apartado B del artículo 6º Constitucional)
- *La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3º de esta Constitución* (fracción III, apartado B del artículo 6º Constitucional)



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

En este tenor, es factible afirmar como lo hace la Colegisladora que las reformas y adiciones formuladas se orientan a fortalecer los mandatos constitucionales vigentes, en una óptica armónica y transversal —agregan estas Comisiones dictaminadoras—, que garanticen el ejercicio pleno de un importante derecho.

Por añadidura, en la Cuarta Consideración de la Minuta, la Colegisladora manifiesta —al argumentar la necesaria adición del Capítulo Vigésimo— que el citado artículo sexto está comprendido en el Título Primero, Capítulo I, denominado De los Derechos Humanos y sus Garantías, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que el Estado mexicano adoptó el compromiso de garantizar "a toda persona" el derecho de acceso a las tecnologías de la comunicación y la información, y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido la banda ancha e internet.

TERCERA. Es de subrayarse el hecho de que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a petición expresa, haya emitido la opinión respectiva sobre la iniciativa de origen; siendo los puntos clave los siguientes:



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

a) El acceso a las tecnologías de tecnologías de la comunicación y la información (TIC) debe ser acorde a los fines de la educación.

b) Las TIC garantizan el derecho a la información desde los criterios de asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.

c) La materia de las telecomunicaciones corresponde de manera exclusiva a la Federación, en coadyuvancia con las entidades federativas y municipales.

d) Mencionar cómo la garantía al derecho de las TIC se vincula con otros derechos.

e) Garantizar el derecho a las TIC de las personas menores de edad (sic) con discapacidad.

De ese modo, según se desprende de la quinta Consideración de la Minuta, las observaciones del Sistema Nacional de Protección Integral fueron *tomadas en cuenta para mejorar y fortalecer* la resolución adoptada por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 7 de noviembre de 2017.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

En suma, estas Comisiones Dictaminadoras expresan su opinión favorable a los argumentos vertidos por la Colegisladora misma que sustentan el sentido de la Minuta en comento, toda vez que las enmiendas propuestas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes apuntan a armonizarla con la reforma Constitucional y la normativa secundaria en la materia; esto es, primordialmente con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En razón de lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, sin objeción alguna respecto a la Minuta analizada, someten a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores, la siguiente

MINUTA

PROYECTO DE

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XX, SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO Y LOS ARTÍCULOS 101 BIS, 101 BIS 1 Y 101 BIS 2 A LA LEY



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo Único.- Se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona un Capítulo Vigésimo denominado "Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación" al Título Segundo que comprende los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

I. a **XIX. ...**

XX. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.

...

Capítulo Vigésimo
Derecho de Acceso a las Tecnologías
de la Información y Comunicación



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional, mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo. Los plazos para el cumplimiento efectivo de las obligaciones referidas en el presente Decreto serán los establecidos en el "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.



COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

Así lo acordaron y votaron en sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios Legislativos, realizada en el Senado de la República, a los 21 días del mes de febrero de 2018.

Sen. Martha Elena García Gómez
Presidenta

Sen. Yolanda de la Torre Valdez
Secretaria

Sen. Angélica de la Peña Gómez
Secretaria

Página **20** de **20**



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE SE FORMULA EN RELACIÓN CON LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIGÉSIMO AL TÍTULO SEGUNDO, Y LOS ARTÍCULOS 101 BIS, 101 BIS 1 Y 101 BIS 2 A LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



30. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la siguiente Minuta con Proyecto de Decreto:

- Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

Así, los integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 72 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 150, 166, 182, 183 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de turno, para el Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto;

II. En el capítulo de "OBJETIVO", se sintetiza la propuesta de reforma en estudio;

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos de valoración, así como los motivos que

1



sustentan la decisión de aprobar el Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen.

IV. En el Capítulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO", se plantea el Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de octubre de 2017, el Diputado Oscar García Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Reforma Agraria para la formulación del Dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Reforma Agraria, en su estudio y dictamen, realizó ciertas modificaciones a la Iniciativa del Diputado iniciante respecto a la redacción de la misma.

4. El 12 de diciembre de 2017, en sesión ordinaria de la H. Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria con 370 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.



5. En sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2017, la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura, recibió el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto en la que se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria.

6. La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha, turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos dicha Minuta con Proyecto de Decreto para los efectos correspondiente del artículo 72 Constitucional.

7. A fin de realizar el adecuado estudio de la minuta, los integrantes de las suscritas Comisiones Unidas realizaron diversos intercambios de impresiones, conducentes al presente Dictamen.

8. A su vez, los integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones dictaminadoras instruyeron a sus respectivas Secretarías Técnicas en torno a la elaboración del anteproyecto de dictamen correspondiente, contemplándose la atención de la propuesta remitida por la H. Cámara de Diputados.

II. OBJETIVO

La presente Minuta tiene como finalidad adecuar la legislación agraria en defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros respecto a su propiedad, el goce de sus frutos y sus justas ganancias económicas.



Así, la Minuta pretende garantizar una mayor seguridad jurídica con la implementación de acciones concretas que se traducen en la **elaboración obligatoria de un convenio de ocupación previa,** si es voluntad del ejidatario o de la asamblea, en el que se exprese su consentimiento y autorización ante la inminente expropiación que habrán de sufrir en su perjuicio.

De esta manera, y para la formalización del convenio anteriormente señalado, será la Procuraduría Agraria quien lo lleve a cabo; solicitando además su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con lo expuesto en el Dictamen elaborado por la Comisión de Reforma Agraria de la H. Cámara de Diputados, avalado por el Pleno de la H. Colegisladora, en cuanto a la necesidad de reformar el artículo 95 de la Ley Agraria para garantizar una mayor seguridad jurídica en la defensa de los derechos de los ejidatarios y comuneros sobre su propiedad.

SEGUNDA.- Si bien es cierto que la propia Ley Agraria, en su artículo 94, establece que la ocupación de los bienes expropiados procede después de haberse realizado el pago correspondiente a la indemnización; la misma Ley Agraria, en su artículo 95, dispone la posibilidad de ocupación previa de las tierras al existir la voluntad de la asamblea o de los ejidatarios propietarios.

TERCERA.- Actualmente los ejidos y comunidades se enfrentan a una compleja problemática que acaba por dejar a los integrantes de los mismos en un completo estado de inseguridad jurídica. Dicha inseguridad, se desprende del hecho de que en ocasiones la ocupación previa de tierras, bajo el pretexto de que se está



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA.

tramitando la respectiva expropiación, que puede llevar años e inclusive décadas, obliga a los ejidatarios y comuneros a abandonar sus tierras y su trabajo debido a que materialmente no pueden seguir ocupándolas. Esto ha provocado una especie de "zona gris" que de manera injusta aprovechan las compañías y las grandes corporaciones.

CUARTA.- Para los comuneros y ejidatarios existe una gran dependencia sobre las tierras expropiadas, pues son estas las que les permiten obtener los recursos necesarios para subsistir. Resultando por ello necesario que se actualice la legislación agraria y se establezca un mecanismo idóneo que asegure que los ejidatarios y comuneros perjudicados puedan seguir obteniendo los recursos necesarios para subsistir y evitar así dejarlos en un estado de indefensión mientras esperan la correspondiente indemnización, derivada de la expropiación llevada a cabo en su prejuicio.

QUINTA.- Así, y en aras de la defensa de los derechos agrarios de los ejidatarios o comuneros, se requiere del consentimiento expreso, mediante un convenio de ocupación previa, por parte del órgano de representación ejidal o comunal, o del ejidatario o comunero individual tratándose de tierras parceladas, para lograr con ello una mayor seguridad jurídica en beneficio de los mismos.

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 72 de



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA.

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162, 163, 166, 176, 177, 178, 182, 186, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente proyecto:

D E C R E T O

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA

Artículo Único.- Se reforma el artículo 95 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 95.- Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación, **para lo cual deberá mediar convenio en el que se plasmen los acuerdos y compromisos a que habrán de obligarse ambas partes.**

Para la formalización del convenio aludido en el párrafo anterior, deberá intervenir la Procuraduría Agraria, quien además solicitará su inscripción en el Registro Agrario Nacional.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, en el mes de febrero de 2018.

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Presidenta

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu
Secretaria

Sen. Martha Palafox Gutiérrez
Secretaria

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo
Integrante

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Integrante

7



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACIÓN CON LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY AGRARIA.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



31. De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14, 57, 80 y 108 de la Ley Agraria.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14, 57, 80 y 108 DE LA LEY AGRARIA

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Ley Agraria.

Así, los Integrantes de estas Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 72 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 113, 117, 135 numeral 1, fracción I, 150, 182, 183 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente Dictamen conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, en su trámite y recibo de turno para el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto;

II. En el capítulo de "OBJETIVO", se sintetizan las propuestas de reforma en estudio;

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", las Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos de valoración, así como los

1



motivos que sustentan la decisión de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto, materia del presente Dictamen.

IV. En el Capitulo relativo al "TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO", se plantea el Decreto por el que se reforma el articulo 14 de la Ley Agraria.

I.ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de abril de 2014 los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. Del Rocio Pineda Gochi, Gerardo Sánchez García y Manuel Humberto Cota Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, presentaron iniciativa por el que se modifica el articulo 14 de la Ley Agraria.

2. La Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de estudios Legislativos, la Iniciativa Proyecto de Decreto para su análisis y dictamen correspondiente.

II. O B J E T I V O

La iniciativa pretende resolver las problemáticas que se presentan cuando por distintos motivos, el ejidatario varón titular del ejido no se encuentre en el lugar que se encuentra este o bien se desconozca su paradero; entre ellos el más recurrente por el fenómeno de migración, un importante número de ejidatarios no puedan acceder a los programas gubernamentales, y con ello miles de mujeres se quedan sin la oportunidad de obtener los beneficios de estos.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14, 57, 80 y 108 DE LA LEY AGRARIA

Ante esta problemática, se pretende reformar el artículo 14 de la Ley Agraria, a fin de establecer, que corresponde a las y los ejidatarios el acceso a los recursos y subsidios establecidos en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria. Puntualizando que en ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios en su caso, asi como los hijos, que acrediten relación alguna con el ejidatario, podrán acceder a los subsidios y recursos presupuestales establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para ello las dependencias y entidades gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de distribución, operación y administración que se otorguen, cumplan con el principio de acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Estas comisiones que dictamen coinciden con el objeto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Agraria, en materia de derecho de los familiares de los ejidatarios para acceder a los recursos y subsidios del gobierno federal.

SEGUNDA.- El articulo 1º Constitucional, establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De igual modo, prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente



contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su artículo 2° que son principios rectores: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17 de esta Ley, contenido en el Título III, Capitulo Primero titulado "De la Política Nacional en materia de igualdad", señala que la política nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá establecer acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural; así como fomentar la participación y representación política equilibrada entre hombres y mujeres.

También debemos atender lo expuesto por el artículo 4° constitucional que atiende a la importancia de la igualdad de género en el seno familiar y al desarrollo de la familia en todos sus aspectos:

> "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia..."

En este sentido, la obligación del Estado se encuentra bajo las posibilidades fácticas y constitucionales. Es el Estado pues, deberá hacer todo lo fáctica y constitucionalmente posible, para proteger el derecho en cuestión, en este caso legislar para proteger el desarrollo y la organización de la familia.[1]

TERCERA.- Para estas Comisiones Unidas que dictaminan es fundamental legislar en pro de la erradicación de toda forma de discriminación por motivos de raza, religión, condición social, preferencias sexuales, género, etc. Es por eso que reconocemos el esfuerzo de los Legisladores autores de la iniciativa de mérito, la cual busca establecer precedentes para la eliminar la discriminación en contra de la mujer en su vida privada, pública y productiva. Ello es así toda vez que al ser la

[1] (Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, 2017)



mujer la que administra la tierra en ausencia del titular de derechos, no puede acceder a programas de gobierno o cultivar la parcela por no ser la titular de los derechos ejidales y estar sujeta en su caso a la presunción de ausencia.

CUARTA.- Estas Comisiones Unidas que dictaminan consideran necesario ser congruentes con los Tratados Internacionales de los cuales México es parte y atienden a la urgencia de inclusión de la mujer en todos los aspectos pertinentes de su vida social, privada y productiva, uno de dichos tratados es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer, disposición que hace especial énfasis en el artículo 14 sobre las necesidades especiales de la mujer en el ámbito rural que deben ser atendidas por los gobiernos, ordenamiento que a la letra dice:

"Articulo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:



a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo en todos los niveles;...

...e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;..."Los senadores integrantes de esta Comisión coincidimos en que para la creación de una economía más fuerte es necesario mejorar la calidad de vida de las mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental también, empoderar a las mujeres, en particular a las mujeres rurales, sin excluir a las indígenas, para que participen en la vida económica en todos sus sectores, debe modernizarse y reforzarse los sistemas de producción para que sean inclusivos y sensibles a la situación de las mujeres rurales, lo anterior con el fin de alcanzar los Objetivos del Milenio y de la sostenibilidad convenidos internacionalmente.

QUINTA.- Resulta urgente atender la problemática planteada por las y los senadores iniciantes ya que como bien lo refieren, conforme a la información de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, en México existen 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales el 25.8% son mujeres. Un millón 269 mil mujeres son ejidatarias o comuneras, esto significa que tienen derechos agrarios reconocidos; tienen una edad promedio de 53 años y muchas de ellas son madres.

De igual forma los senadores iniciantes puntualizan que las entidades con un mayor número de mujeres con derechos agrarios son Veracruz con 140 mil 626; el Estado



de México con 98 mil 146; Guerrero con 91 mil 250; Oaxaca con 84 mil 808 y Chiapas con 82 mil 95. Es

Es por ello que los senadores integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con las y los senadores iniciantes que de cara al inminente crecimiento de participación de las mujeres en el campo, se requiere que la ley respalde su labor sobre todo en el contexto actual en el que, por diversos motivos, es muy recurrente la ausencia del hombre de la casa, quien regularmente es el ejidatario, comunero o posesionario, quienes migran dentro o fuera del País con el fin de buscar mejores oportunidades ante la escasez de créditos que se adapten a sus necesidades, aunando a las pocas oportunidades de empleo. Solo se considera necesario por lo expuesto en la consideración primera incorporar que corresponde "a las y los ejidatarios", de igual forma se incorporará la palabra "hijas"

SEXTA.- A continuación se presenta un cuadro comparativo entre la propuesta de esta iniciativa y el texto vigente del artículo 14 de la Ley Agraria:

Texto vigente	Propuesta
Artículo 14.- Corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.	**Artículo 14.**- Corresponde a las y los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan; **así como el acceso a los recursos y subsidios establecidos en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria.** **En ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios en su caso, así como los hijos o hijas, que acrediten relación alguna con la o el ejidatario, podrán acceder a los subsidios y**



	recursos presupuestales establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. **Para ello las dependencias y entidades gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de distribución, operación y administración que se otorguen, cumplan con el principio de acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros.**

Cabe señalar que las mujeres rurales desempeñan una función clave de apoyo a sus hogares y comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, puesto que generan ingresos y mejoran los medios de subsistencia y el bienestar general en el medio rural, también es relevante mantener y proteger el desarrollo familiar.

Sin embargo a pesar de los apoyos, aún hay mujeres que no pueden acceder a los programas establecidos por el gobierno ya que no cuentan con certificado parcelario y/o título de propiedad con los que puedan comprobar la titularidad. Pero al existir un vínculo con el propietario crean derechos y obligaciones; pero los derechos no llegan, de tal manera que los derechos son pocos para las esposas y las concubinas.

En la práctica sólo los ejidatarios, comuneros o posesionarios pueden acceder a un programa de apoyo, la iniciativa que se dictamina tiene el objetivo de que tanto las esposas, concubinas, hijos o hijas que puedan comprobar alguna relación con el titular de certificado parcelario y/o título de propiedad de las establecidas en la Ley Agraria, accedan y reciban los beneficios a los que tiene derecho el ejidatario titular



que por alguna u otra razón se ausenta de su ejido es por esto que estas Comisiones Unidas coincidan las y los Legisladores iniciantes para dictaminar de manera procedente este Proyecto de Decreto.

SEPTIMA.- A fin de armonizar la Ley Agraria con lo anteriormente propuesto, estas Comisiones Unidas consideran necesaria la inclusión de la palabra "hijas" a la modificación propuesta por los senadores iniciantes y de igual forma en los artículos 57, 72, 80 y 108, los cuales quedarían de la siguiente manera:

Texto vigente	Propuesta
Artículo 57.- ... III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y	Artículo 57.- ... III. Hijos **o hijas** de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y
Artículo 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma.	Artículo 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos **o hijas** de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14, 57, 80 y 108 DE LA LEY AGRARIA

...	...
Artículo 80. ... b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y	Artículo 80. ... b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos **o hijas** del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y ... ...
Artículo 108.- .... Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar	Artículo 108.- ... ... Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar

10



ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.	ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos **o hijas** de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.

V.TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Estudios Legislativos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 162; 163, 166, 176, 177, 178, 182, 1.86, 190, 191, 192, 193, 194 Y. demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente proyecto:

PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 14, 57, 80 Y 108 DE LA LEY AGRARIA

Artículo Único.- Se reforman los artículos 14; 57 Fracción III; 72 párrafo primero; 80 párrafo segundo, inciso b); y 108, párrafo sexto, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Corresponde a **las y** los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan; **así como el acceso a los recursos y subsidios establecidos en los programas de las dependencias y entidades de la administración pública federal en materia agraria.**

En ausencia del titular, los cónyuges, concubinas o concubinarios en su caso, así como los hijos o hijas que acrediten relación alguna con la o el ejidatario,



podrán acceder a los subsidios y recursos presupuestales establecidos en los programas gubernamentales, sujetándose a los lineamientos de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. Para ello las dependencias y entidades gubernamentales deberán procurar que los mecanismos de distribución, operación y administración que se otorguen, cumplan con el principio de acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros.

Artículo 57.-...

I ...

II...

III. Hijos **o hijas** de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y

IV...

Artículo 72.- En cada ejido y comunidad podrá destinarse una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, donde se realizarán actividades sociales, económicas, culturales, de salud y de capacitación, tendientes a procurar que los hijos **o hijas** de ejidatarios, comuneros y avecindados mayores de catorce y menores de veintinueve años logren una inserción sana, plena y productiva en el desarrollo del campo. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma.

...

Artículo 80.- ...

...



a) ...

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos **o hijas** del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y

c)...

...

Artículo 108.-...

...

...

...

...

Los ejidos y comunidades, de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. En ellas podrán participar ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos **o hijas** de ejidatarios, comuneros, avecindados y pequeños productores.

....

....

Artículo Transitorio

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14, 57, 80 y 108 DE LA LEY AGRARIA

COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA

Sen. Luisa María Calderón Hinojosa
Presidenta

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu
Secretario

Sen. Adolfo Romero Lainas
Secretario

Sen. José Marco Antonio Olvera Acevedo
Integrante

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz
Integrante



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EN RELACION CON LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 14, 57, 80 y 108 DE LA LEY AGRARIA

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma



32. De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (Dictamen en sentido negativo)

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las y los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 113, 117, 135, 177, 178, 182, 188, 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores el siguiente dictamen relativo a **LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES** derivado de la Iniciativa presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a la reforma planteada, con el propósito de emitir el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el apartado de **"ANTECEDENTES"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción y turno de la iniciativa para la elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas.

II. En el apartado relativo al **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA"** se sintetiza la propuesta de reforma materia de estudio.

1



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

III. En el apartado de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas dan cuenta de los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan su resolución.

I. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En la sesión ordinaria celebrada el 15 de octubre de 2015, la diputada María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SEGUNDO.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó mediante oficio No. DGPL 63-II-3-92 el expediente 570, con la iniciativa en comento, a las Comisiones Unidas de Justicia y Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

TERCERO.- El 27 de abril de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, en Sesión Ordinaria, conoció el Dictamen correspondiente, siendo aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, con 393 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La Mesa Directiva, en consecuencia, remitió el expediente a este Senado para los efectos de ley.

CUARTO.- Recibida la Minuta respectiva en esta Cámara, se ordenó asignar turno directo del referido proyecto para dictamen a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos con el oficio No. DGPL-2R2A.-55.

QUINTO.- A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las suscritas Comisiones Unidas realizamos diversos intercambios de impresiones, conducentes al presente dictamen.

Derivado de ese intercambio de impresiones, las juntas directivas de las Comisiones Unidas instruyeron a sus respectivas secretarías técnicas para que se procediera a la elaboración del proyecto de dictamen.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Hernández Madrid contiene las siguientes valoraciones:

La Proponente en su "Exposición de Motivos" refiere que el reconocimiento de un derecho mediante su inclusión descriptiva en un texto jurídico normativo, es la forma en que los Poderes constituidos de un gobierno nacional, concretizan la voluntad del pueblo que representan; de esta forma, una prerrogativa social y pre jurídica, pasa en muchos de los casos, de un derecho natural a un derecho formal y materialmente jurídico, reconocido por el Estado, con esto surge un derecho fundamental y fundamentalmente humano cuyo ejercicio no se agota con su inclusión en el texto de la ley, debe contar además, con mecanismos para garantizar su ejercicio, con medios para hacerlo exigible y sanciones ante su inobservancia.

La proponente señala que, en nuestro país, el artículo segundo constitucional se ha convertido en la vía para afirmar jurídicamente, que tenemos socialmente, una conformación pluricultural derivada de la existencia de pueblos indígenas, descendientes de otros que habitaban el territorio actual del país al iniciarse el proceso de aculturación histórico denominado colonización.

La legisladora señala que esta disposición con rango de Ley Suprema establece que los pueblos indígenas conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. No obstante el contenido especial de la norma, su objetivo no es excluir a los integrantes de los pueblos indígenas de la interacción natural y necesaria con el resto de los habitantes del país o sus instituciones y forma de gobierno, sino para obligar a éste a que cada una de sus actividades contemple la forma y vía en que, sin afectar el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, los vincule exitosamente con el desarrollo nacional; por lo tanto, el artículo segundo constitucional, por una parte reconoce jurídicamente a los pueblos y comunidades indígenas así como a sus derechos y, por el otro, impone la obligación a las autoridades del Estado mexicano a velar porque estos derechos, en el ámbito de sus competencias y



bajo el amparo del artículo primero de la misma Ley fundamental se promuevan, respetan, protejan y garanticen.

En ese contexto, la que suscribe hace mención que el apartado A, fracción VIII, de la Constitución Nacional, dispone como mecanismo de acceso a la jurisdicción del Estado para los integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el que todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, tendrán en todo tiempo **el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura** ; en el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas abunda y amplía en el derecho descrito al establecer que, el Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas **el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes.**

Hasta este punto, la legisladora dice que es indudable que, el Estado mexicano, reconoce su pluriculturalidad social y el respeto a los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a su conformación, desarrollo y organización interna, sin embargo, cuando individual o colectivamente deban vincularse con las autoridades del Estado, específicamente en materia de acceso a la justicia, éstas deberán desarrollar sus procedimientos en la lengua indígena nacional o bien en español con la asistencia de intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura de la persona indígena a la que asisten o defienden.

Por otra parte, continua la diputada, cuando nos referimos al proceso penal, el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que, **las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indigena y cultura.**

La diputada Hernández Madrid menciona que cuando hablamos del proceso penal, este tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger



al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, empero, con la entrada en vigor del sistema procesal penal acusatorio, todos esos elementos que integran el objeto del proceso penal pueden actualizarse a través de diferentes mecanismos dentro del mismo proceso, pero todos sin excepción regidos por una vía de desahogo, **la oralidad.**

Asimismo, señala la proponente que la enorme importancia de la oralidad como vía de acceso a la justicia penal cuando debe atenderse un conflicto que involucra personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas queda manifiesta cuando un testigo, una víctima u ofendido o bien el propio imputado, que no hablan o no entienden el español, deban ser entrevistados o rendir declaración ante el órgano jurisdiccional, o bien les deba ser explicada alguna actuación como la formulación de imputación, el ejecución de una orden de aprehensión que conlleva la lectura de derechos que asiste al detenido por parte de la policía aprehensora, la imposición de una medida cautelar, la prisión preventiva, para la incorporación de prueba cuando deba reconocer previa a su incorporación a juicio, documentos, objetos u otros elementos de convicción, incluso la explicación del contenido y alcance de la sentencia dictada por la autoridad judicial.

Continua exponiendo que, Las actividades procesales señaladas, deben contar con tres características so pena de nulidad o bien de violación a los derechos fundamentales de las personas indígenas; la primera es que la persona integrante del pueblo o comunidad indígena vinculada bajo cualquier supuesto al proceso penal, pueda expresarse en su lengua indígena nacional; la segunda es, que la autoridad que desarrolla la actividad o acto procesal, comprenda lo que la persona indígena expresa y, la tercera, que la persona indígena comprenda con total claridad el acto que se desarrolla.

Para garantizar la utilización y llamamiento al proceso penal de intérpretes o traductores de lenguas indígenas, además de las leyes enunciadas en la presente iniciativa, deben agregarse como especiales al proceso penal, los artículos 45, 46, 109, fracción XI, 110, párrafo segundo y 113 fracción XII del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los artículos 7, fracción XXXI, y 168 de la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Ley General de Víctimas, como puede apreciarse, el derecho de las personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas a contar con intérpretes o traductores en materia penal, cuando por cualquier circunstancia están vinculadas a éste, se encuentra suficientemente establecido y reconocido jurídicamente así pues, la consecuencia de su inobservancia sería una violación al derecho de defensa adecuada, al acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial; a la tutela judicial efectiva, a los derechos de las víctimas en el proceso penal, e incluso a su derecho a la no discriminación en términos de los artículos 15 Quáter fracción V, 15 Octavus párrafo segundo de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en suma puede decirse que, la ausencia de intérpretes o traductores de leguas indígenas en el proceso penal puede configurar una violación al debido proceso que generaría la nulidad del proceso penal o de una de sus etapas y con ello generar una agravio social de mayor alcance como es la inobservancia del objeto del proceso penal en general, es decir, que los hechos investigados no sean esclarecidos, que no se proteja al inocente, que el culpable quede impune o que los daños causados por el delito no se reparen.

Al respecto señala la legisladora que una circunstancia que corre aparejada con el derecho a contar con intérpretes o traductores de lenguas indígenas en el proceso penal, tanto para víctimas u ofendidos como imputados e incluso testigos, e igualmente delicada en su inobservancia, ha quedado de lado o bien ha sido relegada en importancia, de tal suerte que, en la actualidad, el nivel pericia y la calidad adecuada de traducciones con relevancia o contenido jurídico en el proceso penal, **no se encuentra regulada** y, en consecuencia, esta suficiencia en pericia es determinada por el Ministerio Público o bien por la autoridad judicial u Órganos jurisdiccionales que dicho sea de paso, difícilmente podrán determinar nivel de pericia sobre algo que desconocen, como lo es el contenido fónico, morfológico y cultural de las expresiones en lengua indígena; traducciones que no sólo importan la traslación de palabras de la lengua indígena al español y viceversa sino que deben ser además, imparciales, conocedoras de los términos jurídicos que se utilicen y confiables para la autoridad respecto de lo que manifieste la persona indígena de que se trate, dicho lo anterior, se puede



afirmar que en el conjunto de leyes mexicanas de aplicación penal, **no existe una sola disposición que determine para este proceso, quien es o puede ser un intérprete o traductor de lenguas indígenas con el suficiente grado de pericia para hacer comprender a la autoridad respecto a la persona indígena y para hacer comprender a ésta respecto de la autoridad**, una deficiencia así cuando tenemos un proceso penal con prevalencia en la oralidad de actuaciones no es sólo ausencia de certeza y certidumbre jurídica, es en términos de derechos humanos, inaceptable dadas las consecuencias que puede acarrear la imposición de una sanción penal como es la pérdida de la libertad.

Para evidenciar aún más la problemática abordada en esta iniciativa, continua exponiendo la diputada que es necesario citar que:

I. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, nuestro país cuenta con 11 familias lingüísticas indoamericanas, que son definidas como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común y la categoría "familia lingüística" es la más inclusiva de los niveles de catalogación y cada una de ellas se encuentra representada en México con al menos una de sus lenguas. Dichas familias, son las siguientes: 1. Álgica. 2. Yuto-nahua. 3. Cochimí-yumana. 4. Seri. 5. Oto-mangue. 6. Maya. 7. Totonaco-tepehua. 8. Tarasca. 9. Mixe-zoque. 10. Chontal de Oaxaca. Y 11. Huave;

II. La población indígena en México en el año 2010 fue de **11 millones 132 mil 552** personas y, por tanto, que hablan alguna variante de las 11 familias lingüísticas señaladas;

III. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; reveló que, en el año 2010 en México se contaba con 64 mil 172 localidades indígenas de las cuales 34, 263 tenían un población indígena mayor o igual al 40 por ciento de su población total y 2 mil 118 contaban con una densidad poblacional de menos del 40 por ciento de población indígena; así pues, en el año que se refiere,



cuando la población total de nuestro país era de 112 millones 336 mil 538 habitantes; el 9.9 por ciento de la población pertenecía a algún pueblo o comunidad indígena.

IV. En el mes de febrero del año 2015, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informó que en México existen más de ocho mil indígenas recluidos en alguna cárcel del país, el 96 por ciento son hombres y la mayoría se encuentran privados de su libertad por delitos del fuero común, pero de acuerdo al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas únicamente se cuenta con **575** intérpretes/traductores acreditados/certificados por esa institución.

En este sentido, señala la legisladora proponente que con los datos expuestos obtenemos una realidad preocupante para el desarrollo óptimo y apegado a la legalidad del proceso penal en México cuando están involucradas personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el número de personas recluidas en algún centro penitenciario es muy superior a la capacidad de intérpretes avalados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y que, eventualmente podrían fungir como intérpretes o traductores cumpliendo con el requisito mínimo de pericia, certeza, certidumbre e imparcialidad en su ejercicio traductor, no necesariamente con el jurídico.

Además de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para el caso específico del imputado que "... **la autoridad ministerial o judicial que conozca del caso deberá constatar que el intérprete efectivamente conoce la lengua y cultura del imputado** ..." dejando constancia, que es la propia autoridad quien debe constatar la pericia del intérprete o traductor pero sin delimitar parámetros de certeza por las razones ya apuntadas, y aún más que el intérprete o traductor podrá ser "...respaldado por la comunidad indígena o certificado por las instituciones correspondientes.." desde luego sin señalar como ya se dijo, que instituciones son **las correspondientes** .



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Ahora bien, respecto del defensor refiere que, para acreditar sus conocimientos en la lengua y cultura indígena de su defendido, "...deberá exhibir la constancia que lo avale, cuya autoridad competente para expedir dicha certificación puede ser la defensoría pública federal o estatal, o el **Instituto Nacional de Lenguas Indígenas."**

El artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que, corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la ley, y en particular:

- Fracción XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

- Fracción XII. Garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimientos de las lenguas indígenas nacionales requeridas en sus respectivos territorios.

Con lo expuesto y, derivado de las obligaciones impuestas al Estado por la Ley en comento y su correlación con la que se desprende del citado artículo 10 del mismo ordenamiento respecto a las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, para proveer lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura, vinculando además al Código Nacional de Procedimientos Penales como cuerpo normativo de aplicación en los fueros federal y estatal, ante la problemática desarrollada en esta iniciativa y para garantizar el cúmulo de derechos señalados en general y en lo particular para el proceso penal cuando en éste intervienen personas integrantes de pueblos o comunidades indígenas que no hablan o entienden el español, es necesario reformar el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales así como, el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas sea a partir de la entrada en vigencia de

9



la iniciativa que nos ocupa, la Institución oficial encargada de la formación, capacitación, certificación y registro en el padrón nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas, del personal de las instituciones de procuración e impartición de justicia en los fueros federal y estatal que intervendrán en el proceso penal cuando en éste intervenga alguna persona(s) integrante(s) de algún pueblo o comunidad indígena de nuestro país.

La diputada señala que la presente modificación tiene como objetivos:

1. Que los intérpretes o traductores de lenguas indígenas que deban actuar en el proceso penal cuenten con el aval de una institución pública como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que determine la suficiencia de sus conocimientos del lenguaje, de los usos y costumbres de la cultura indígena que se trate así como del proceso penal;

2. Impone como obligación a las autoridades de procuración e impartición de justicia en los fueros federal y estatal, que tengan personal capacitado, certificado y empadronado para actuar válidamente como intérpretes o traductores de lenguas indígenas;

3. Brindar certidumbre y certeza jurídica a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas para que, cuando estén vinculadas al proceso penal en cualquiera de sus formas, las autoridades les brinden el apoyo y asesoría técnicas en su lengua indígena y con ello favorecer el debido proceso penal.

Como medida adicional y, considerando que las lenguas indígenas son válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública y que la federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios según lo dispone el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas así como el hecho de que la Comisión Nacional para el desarrollo de



los pueblos indígenas tiene dentro de su objeto coordinar, promover, apoyar, fomentar y dar seguimiento a proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas dentro de los que se encuentra el acceso a la justicia y con la finalidad de que se conozca y difunda el Código Nacional de Procedimientos Penales en los pueblos y comunidades indígenas del país toda vez que a partir del mes de junio del año 2016 será el rija los procesos penales de toda la República, es de la mayor importancia que en conjunto realicen la traducción, publicación y difusión del Código Nacional de Procedimientos Penales, del español a las lenguas indígenas que determinen, sin que puedan ser inferiores a las familias lingüísticas indoamericanas contenidas en el documento denominado Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Derivado de ello, es que el Diputado Luis de León Martínez propone que se reforme el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para quedar de la siguiente manera:

Primero. *Se reforma el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera:*

Artículo 45. ...

...

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado, la víctima, o el ofendido, no hablen o entiendan el idioma español, deberán ser asistidos por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor o asesor, según corresponda, o con las autoridades.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta.

En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan.

El órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera.

Cuando el imputado, la víctima o el ofendido, nombren intérprete o traductor, para apoyo del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, podrán solicitar la intervención de intérprete o traductor.

Las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales, de la federación, de los estados de la república y del Distrito Federal, contarán con peritos intérpretes y traductores en lenguas indígenas acreditados e inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas quienes intervendrán durante todo el proceso.

Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.

Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.

12



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.

Segundo. *Se reforman el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar de la siguiente manera:*

Artículo 10. *...*

...

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales, de la federación, de los estados de la república y del Distrito Federal.

Transitorios

Primero. *El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.*

Segundo. *En un plazo de seis meses contados a partir del día en que inicie su vigencia el presente decreto, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de los estados de la república y del Distrito Federal deberán realizar el convenio de colaboración o instrumento jurídico necesario para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se capacite, certifique e incluya en el padrón nacional de intérpretes o traductores de lenguas indígenas con que cuenta dicho Instituto, al personal que, de dichas instituciones fungirá como peritos intérpretes o traductores de lenguas indígenas.*

Tercero. *En un plazo de cuatro meses, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas realizarán la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales, del español a las lenguas indígenas que determinen, sin que puedan ser inferiores a las familias lingüísticas indoamericanas contenidas en el documento denominado Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus*

13



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

autodenominaciones y referencias geoestadísticias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008.

Ahora bien, en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas de la colegisladora se destaca el análisis realizado sobre la procedencia de la iniciativa en cuestión.

Se establece que las Comisiones, conforme al artículo 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX, 79, 80 numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, tienen competencia para dictaminar la Iniciativa con Proyecto descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

Respecto al análisis del fondo de la iniciativa, las comisiones unidas de la colegisladora coinciden en el espíritu de la Iniciativa, sin embargo, realizaron una serie de precisiones técnicas que modifican la misma conforme a los siguientes argumentos:

Mediante la presente propuesta, la legisladora pretendía reformar el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
Texto vigente	**Iniciativa**
Artículo 45. Idioma Los actos procesales deberán realizarse en idioma español.	Artículo 45. ... ...

14



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado no hable o entienda el idioma español deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su Defensor en las entrevistas que con él mantenga. El imputado podrá nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta.	Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado, **la víctima, o el ofendido,** no hablen o entiendan el idioma español, deberán ser asistidos por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor **o asesor**, según corresponda, o con las autoridades.
No existe correlativo	**El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta.**
Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el	***(Se reubica, pasando a formar un antepenúltimo párrafo)***

15



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.	
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.	***(Se reubica, pasando a formar un penúltimo párrafo)***
Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.	***(Se reubica, pasando a formar un último párrafo)***
En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan.	...
El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera.	...

16



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

No existe correlativo	**Cuando el imputado, la víctima o el ofendido, nombren intérprete o traductor, para apoyo del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, podrán solicitar la intervención de intérprete o traductor.**
No existe correlativo	**Las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales, de la federación, de los estados de la república y del Distrito Federal, contarán con peritos intérpretes y traductores en lenguas indígenas acreditados e inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas quienes intervendrán durante todo el proceso.** Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.

17



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

	Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	
Texto vigente	**Iniciativa**
ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán	**Artículo 10.** ...

18



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.	...
En los términos del artículo 5o., en las entidades federativas y en los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en las instancias que se requieran.	**El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales, de la federación, de los estados de la república y del Distrito Federal** *(sic)*.

En el dictamen se destaca que, con el objeto de hacer asequibles los derechos de toda víctima u ofendido consignados a nivel constitucional, es indispensable consignar en la Ley que además del imputado, también la víctima u ofendido en caso de no hablar o entender el idioma español, deberán ser asistidos por



traductor o intérprete para comunicarse con su asesor jurídico o con las autoridades.

En este sentido, se considera acertado fortalecer las disposiciones procedimentales, al contemplar en el tercer párrafo del artículo 45 del CNPP la posibilidad para que el imputado, la víctima o el ofendido, puedan nombrar traductor o intérprete de su confianza y por su cuenta, no obstante se sugiere la siguiente redacción:

"El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar por su cuenta traductor o intérprete de su confianza"

Ahora bien, las comisiones unidas de la colegisladora, señalan en su dictamen que en cuanto al quinto párrafo, donde la diputada promovente propone que: *"cuando el imputado, la víctima o el ofendido, nombre intérprete o traductor, para apoyo del Ministerio Público o del Órgano Jurisdiccional, podrán solicitar la intervención de intérprete o traductor"*, cabe señalar que en primer instancia el texto carece de claridad y ello podría ser objeto de interpretaciones incorrectas.

Al respecto, asientan que la aprobación de esta iniciativa no exime al Ministerio Público o al órgano jurisdiccional de su obligación de proporcionarle a la víctima u ofendido y al imputado un traductor o intérprete en los casos en que alguno de ellos pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, no conozca o entienda el idioma español; en virtud que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 y 113 del CNPP establece esta obligación del Estado.

Lo anterior, toda vez que esta obligatoriedad no pueda estar supeditada a que la víctima u ofendido nombren o no un traductor de su confianza; ello considerando que esta reforma solamente faculta a la víctima u ofendido y el imputado, para que puedan nombrar por su cuenta a un traductor, sin eximir de su obligación al Estado de proporcionárselo con independencia de si alguna de las partes ejerza o no ese derecho, obligatoriedad impuesta por la Constitución.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Por lo que, las comisiones unidas que dictaminaron la iniciativa consideraron que resulta improcedente adicionar el párrafo quinto propuesto por la diputada proponente, en virtud que con independencia de que las partes (imputado, víctima u ofendido) nombren por su cuenta a un traductor o intérprete de su confianza, el Ministerio Público u órgano jurisdiccional tienen la obligación de designarle uno, si se encuentra en los supuesto previstos.

Asimismo, en las consideraciones del dictamen se señala que por lo que refiere al sexto párrafo que se propone adicionar, se considera que esta redacción es inadecuada, ya que las procuradurías, fiscalías y poderes judiciales de la federación, de los estados de la República y de la Ciudad de México, no pueden quedar obligadas a contar con este tipo de requisito para sus peritos, sino que podrá bastar con que los intérpretes y traductores en lenguas indígenas que deseen llevar a cabo esa actividad se encuentren acreditados e inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y en su caso las procuradurías, fiscalías y poderes judiciales, de la federación, de los estados de la República y de la Ciudad de México podrán, de manera optativa, contar con personal que ostente tal calidad.

En conclusión, las comisiones unidas de la Cámara de Diputados encargadas de elaborar el dictamen correspondiente, coincidieron en que es inadecuada la propuesta de la Diputada proponente de adición de los párrafos quinto y sexto del artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ahora bien, por lo que respecta a la propuesta para que el INALI esté a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten la procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales de la Federación y de los estados y de la Ciudad de México, la colegisladora consideró adecuada la medida, ya que actualmente la Ley es poco precisa al indicar que en las entidades federativas y en los municipios de las comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere la Ley en las instancias que se requieran, convirtiendo esta disposición en inefectiva debido a su ambigüedad.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

En este sentido, la comisión dictaminadora de la colegisladora señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema, en el sentido de considerar necesario que exista una defensa adecuada, por lo cual ha referido que el defensor de una persona indígena debe contar con conocimientos idóneos para explicarle la diferencia entre su cultura y la existente fuera de su área de desarrollo y convivencia diaria.

Al respecto, cita la siguiente tesis aislada:

Época: Novena Época

Registro: 163180

Instancia Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Constitucional

Tesis: XIII. P.A. 22 P

Página:3175

DEFENSA ADECUADA DE INDÍGENAS MONOLINGÜES. SI DESDE SU DECLARACIÓN PREPARATORIA NO SE NOMBRA UN INTÉRPRETE Y UN DEFENSOR QUE CONOZCAN SU LENGUA Y CULTURA PARA QUE LOS ASISTAN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO PENAL, SE VIOLA EN SU PERJUICIO EL ARTÍCULO 2º., APARTADO A, FRACCIÓN VIII, PRIMER PÁRRAFO, ÚLTIMO SUPUESTO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y SE ACTUALIZA UNA INFRACCIÓN AL PROCEDIMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES II Y IV, DE LA LEY DE

22



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

AMPARO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).

Asimismo, refieren la comisiones unidas que, la Procuraduría General de la República, cuenta con un Convenio de Colaboración para el Acceso y Uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), firmado el 01 de junio de 2015, cuyo objeto es que el "INALI" otorgue el acceso y uso del PANITLI a la PGR, con el fin de que víctimas y ofendidos cuenten con una adecuada representación que les permita acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Y en este sentido, señalan que, elevar a rango de ley esta obligación, no solo para la federación sino para hacerla efectiva en las entidades federativas, resulta por demás adecuada.

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados consideran viable con modificaciones la Iniciativa presentada por la Diputada María Gloria Hernández Madrid, como a continuación se señala:

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES	
EL DICTAMEN DICE:	**DEBE DECIR:**
Artículo 45. Idioma	Artículo 45. Idioma
Los actos procesales deberán realizarse en idioma español.	Los actos procesales deberán realizarse en idioma español.
Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a	Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

entender. En el caso de que el imputado, **la víctima, o el ofendido,** no hablen o entienda el idioma español deberá ser asistido por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor **o asesor**, según corresponda, o con las autoridades.	entender. En el caso de que el imputado, **la víctima, o el ofendido,** no hablen o entiendan el idioma español, deberán ser asistidos por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor **o asesor jurídico**, según corresponda, o con las autoridades.
El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar traductor o intérprete de su confianza, por su cuenta.	**El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar por su cuenta traductor o intérprete de su confianza.**
Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.	En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así los solicitan. El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera.
SIN CORRELATIVO	**Las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, podrán contar con**



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

	traductores o intérpretes en lenguas indígenas, en términos de los artículos 109 y 113 de este Código, los cuales deberán estar acreditados e inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas quienes, a petición del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional, intervendrán durante todo el proceso.
Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.	Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.
Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones	Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la

25



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen. En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así lo solicitan. El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera.	persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones. Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	
EL DICTAMEN DICE:	**DEBE DECIR:**
ARTÍCULO 10. El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los	**Artículo 10.** El Estado garantizará el derecho de los pueblos y comunidades indígenas el acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional de que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.	Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las procuradurías, fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación y de las Entidades Federativas.	**El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación, certificación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México.**

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura, sometieron a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

27



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo Primero.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

...

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación, certificación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México.

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales Recorriendo los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 45. Idioma

Los actos procesales deberán realizarse en idioma español.

Cuando las personas no hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengua o idioma, al igual que las personas que tengan algún impedimento para darse a entender. En el caso de que el imputado, **la víctima, o el ofendido,** no hablen o entiendan el idioma español, deberán ser asistidos por traductor o intérprete para comunicarse con su defensor **o asesor jurídico**, según corresponda, o con las autoridades.

El imputado, la víctima, o el ofendido, podrán nombrar por su cuenta traductor o intérprete de su confianza.

28



En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun cuando hablen el español, si así los solicitan.

El Órgano jurisdiccional garantizará el acceso a traductores e intérpretes que coadyuvarán en el proceso según se requiera.

Las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, podrán contar con traductores o intérpretes en lenguas indígenas, en términos de los artículos 109 y 113 de este Código, los cuales deberán estar acreditados e inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas quienes, a petición del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional, intervendrán durante todo el proceso.

Si se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, tiene derecho a que se le facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que le permitan obtener de forma comprensible la información solicitada o, a falta de éstos, a alguien que sepa comunicarse con ella. En los actos de comunicación, los Órganos jurisdiccionales deberán tener certeza de que la persona con discapacidad ha sido informada de las decisiones judiciales que deba conocer y de que comprende su alcance. Para ello deberá utilizarse el medio que, según el caso, garantice que tal comprensión exista.

Cuando a solicitud fundada de la persona con discapacidad, o a juicio de la autoridad competente, sea necesario adoptar otras medidas para salvaguardar su derecho a ser debidamente asistida, la persona con discapacidad podrá recibir asistencia en materia de estenografía proyectada, en los términos de la ley de la materia, por un intérprete de lengua de señas o a través de cualquier otro medio que permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.



Los medios de prueba cuyo contenido se encuentra en un idioma distinto al español deberán ser traducidos y, a fin de dar certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen.

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III.- CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La proponente se encuentra plenamente legitimada para presentarla, habida cuenta de lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional.

SEGUNDA.- Quienes integramos estas comisiones unidas coincidimos plenamente en la intención de la diputada María Gloria Hernández Madrid para que todos aquellos que conforman nuestro pueblos y comunidades indígenas tengan la certeza plena de que serán asistidos jurídicamente pero del mismo modo que tengan la posibilidad de contar con algún interprete o traductor que les permita comprender a cabalidad la situación por la que están pasando cuando se ven envueltos en algún proceso judicial, ya sea que intervengan como victima, ofendido o inculpado.

TERCERA.- En este sentido, debemos destacar que lo señalado en la exposición de motivos de la Iniciativa como en las consideraciones vertidas por las comisiones unidas de la colegisladora, es de suma importancia y trascendencia, ya que en concordancia con lo establecido en el apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dispone como mecanismo de acceso a la jurisdicción del Estado para los integrantes de pueblos o comunidades indígenas, el que todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, tendrán en todo tiempo **el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.**



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

CUARTA.-Ahora bien, a pesar de todo lo desarrollado con anterioridad también es función de estas comisiones unidas hacer notar que consideramos que la presente iniciativa que se analiza resulta inviable por las razones que a continuación se destacan.

En relación a la reforma del tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que propone:

Artículo 10. ...

...

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas estará a cargo de la capacitación, acreditación, certificación e inscripción en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas de las personas que soliciten las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México.

Al respecto, cabe mencionar que, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 13 establece la distribución, concurrencia y coordinación de competencias y el artículo 14 indica el objeto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las atribuciones que le corresponden.

En este sentido, es necesario hacer notar que en el ámbito de las facultades concurrentes la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y al español.

ARTÍCULO 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

I. a la X. ...

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

...

Ahora bien, el inciso d) del artículo 14 de la citada Ley, establece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene la atribución de formular programas para certificar y acreditar a técnicos bilingües; en ese sentido, el INALI cumple con las atribuciones concurrentes como directas, en virtud de que interinstitucionalmente ha llevado a cabo diversas acciones con el fin de cumplimentar las atribuciones que le marca la Ley. Así, estas comisiones tenemos conocimiento que el INALI ha llevado a cabo la realización de diplomados de formación de intérpretes en materia de acceso a la justicia, además a certificado a interpretes mediante estándares de competencia; bajo estos dos mecanismos se acreditan y certifican a intérpretes y traductores de lenguas indígenas, cuyos datos personales se encuentran registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI).

QUINTA.- Por lo anteriormente descrito, estas comisiones unidas consideramos que la iniciativa de reforma del artículo 10 de la Ley es contraria al objeto del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que promueve el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas necesarias en la materia; en este sentido, la capacitación, acreditación y certificación derivan de la competencia concurrente y directa señalada en los citados artículos 13 y 14 de la Ley.

El registro de los datos de intérpretes acreditados y certificados en el PANITLI fungen como puente de comunicación entre las personas hablantes de alguna lengua indígena, las autoridades que requieren el servicio de interpretación y los



sujetos que intervienen en algún asunto de carácter jurisdiccional o administrativo.

Ahora bien, es necesario señalar que, asimismo, la forma en la que está redactada la propuesta de reforma, el INALI no capacita, ni acredita y no inscribe en el PANITLI a las personas que soliciten las Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación de los estados de la República y del Distrito Federal, en virtud de que el personal adscrito a dichas instituciones deben reunir determinado perfil para llevar a cabo las funciones que les corresponden, y no así los intérpretes y traductores en lenguas indígenas, que se acreditan mediante la formación de diplomados de acceso a la justicia y se certifican bajo los siguientes estándares:

1.- Atención de la lengua materna a población hablante de lengua indígena en programas sociales.
Prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia.
3.- Interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia.
4.- Promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lengua indígena.
5.- Apoyo a la incorporación y desarrollo de las figuras solidarias e institucionales en lengua indígena y español como segunda lengua.

Funciones que el INALI lleva a cabo de manera institucional y con la participación de los hablantes de lenguas indígenas.

En este sentido, para tener acceso al PANITLI, las entidades de la Administración Pública o el Poder Judicial deberán suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

SEXTA.- Ahora bien, es necesario hacer notar que al pretender derogar el actual párrafo 3 del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Indígenas, se estaría dejando al margen la participación del estado en sus tres niveles de gobierno, ya que ni las entidades federativas ni los municipios adoptarían e instrumentarían lo necesario para proveer en los juicios donde están involucradas personas indígenas, para que sean asistidas gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Por último, cabe mencionar que el ampliar las facultades al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sería necesario incluir dentro del presupuesto de Egresos de cada año la partida correspondiente dirigida al INALI para cumplir con tal fin.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas consideran inviable la propuesta de reforma al artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ya que es contraria al objetivo del propio Instituto.

SÉPTIMA.- Ahora bien, en cuanto a las adiciones del artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cabe mencionar que después del análisis realizado por estas comisiones unidas, se llega a la conclusión que resulta inviable la iniciativa propuesta por la diputada Hernández Madrid.

OCTAVA.- La propuesta tiene como objetivo principal que la víctima u ofendido que no hablen español deberán ser asistidos por traductor o intérprete que hablen la misma lengua, si bien es cierto que la iniciativa particulariza el carácter de la persona indígena que se encuentra involucrada en un acto procesal, también es cierto que la especificación puede dejar fuera a algún otro sujeto que forma parte del proceso jurisdiccional.

Asimismo, la fracción VIII del artículo 2 Constitucional establece que individualmente o colectivamente los indígenas tienen el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado; el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas considera que en la procuración y administración de justicia, los indígenas serán asistidos gratuitamente por intérpretes, los artículos 45, 103 y 109 del Código Nacional de Procedimientos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Penales, establece que las personas que no hablen o no entiendan el idioma español deberá proveerse de traductor e intérprete, y así otros ordenamientos jurídicos refieren lo mismo; en ese sentido, no se considera oportuno particularizar cada uno de los sujetos que intervienen en un procedimiento o proceso, porque de manera general sin especificar el carácter de su intervención, ya se incluyen en la legislación correspondiente.

Respecto a la adición que pretende que el imputado, la víctima o el ofendido, podrán nombrar por su cuenta traductor o intérprete de su confianza, se considera inviable en virtud de que si ellos nombran a dicho intérprete, el procedimiento se podría viciar en virtud de que la intervención del intérprete pudiera ser parcial en la interpretación que realice, además la autoridad podría desentenderse de su obligación de asignar intérprete y en consecuencia al pago de los mismos.

NOVENA.- Ahora bien, en cuanto a la iniciativa de reforma para que la Procuradurías, Fiscalías y Poderes Judiciales, de la Federación, de los Estados y de la Ciudad de México, puedan contar con traductores o intérpretes en lenguas indígenas, en términos de los artículos 103 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales deberán estar acreditados o inscritos en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del INALI quienes, a petición del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional, intervendrán durante todo el proceso, es necesario resaltar que, dicha adición debe ser complementada, a fin de expresar textualmente la obligación de las autoridades administrativas o judiciales de pagar los servicios del intérprete y traductor por los servicios prestados al asistir a alguna persona indígena, sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo.

De manera general la iniciativa refiere la participación del intérprete de lenguas indígenas, sin embargo, no establece la obligación que tienen las autoridades judiciales o administrativas de pagar los servicios prestados por el intérprete, lo cual se considera conveniente que se exprese, a fin de que la autoridad no evada esta responsabilidad de proveer lo necesario, para que en los juicios que realicen



los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura, como se establece en el artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos, y artículos 45, 109 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; artículo 7 fracción XXXI de la Ley General de Víctimas, entre otras leyes.

Asimismo, cabe mencionar que se considera pertinente que las personas capacitadas y certificadas como intérpretes en lenguas indígenas, deben también estar registradas en el Padrón de peritos del Poder Judicial de la Federación y de los Estados de la república para que de esta forma, el Poder Judicial cuente con otro mecanismo para garantizar el derecho al intérpretes y por consiguiente el pago de sus servicios.

Por lo tanto, resulta no viable el Proyecto de Decreto por el que se reforman el tercer párrafo del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por la Cámara de Diputados.

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y Estudios Legislativos con las atribuciones que nos otorgan los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, numeral 2; 117, numeral 1; 135, fracción I; 136, numeral 1; 150, 177, fracción I, 178, 182, 186, 188, 190, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente resolutivo:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO.- En atención a los razonamientos expuestos en el presente dictamen, se desecha la **MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES** disponiéndose se dé de baja de los registros y su archivo como asunto definitivamente concluido.

37



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

La Comisión de Asuntos Indígenas

Sen. Jorge Toledo Luis

Presidente

Sen. Sonia Rocha Acosta

Secretaria

Sen. Isidro Pedraza Chávez

Secretario

Sen. Andrea García García.

Integrante

38



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete.

39



COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS
8ª. REUNIÓN ORDINARIA
13 DE DICIEMBRE DE 2017, 10:00 HORAS
SALA 7, PLANTA BAJA DEL HEMICICLO

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVO, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Votaciones a favor

SEN. JORGE TOLEDO LUIS
PRESIDENTE

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA
SECRETARIA

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ
SECRETARIO

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA
INTEGRANTE

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ
INTEGRANTE



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERECER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Senador Miguel Romo Medina

Senador Héctor David Flores Ávalos

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya

Senador Manuel Cavazos Lerma

5 ABR 2018
RECIBIDO
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS



COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

LISTA DE ASISTENCIA
OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA

MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017, 10:00 HORAS
SALA 7 PLANTA BAJA DEL HEMICICLO.

SEN. JORGE TOLEDO LUIS
PRESIDENTE

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA
SECRETARIA

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ
SECRETARIO

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA
INTEGRANTE

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ
INTEGRANTE



COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Trigésima Reunión Ordinaria

Lista de Asistencia

21 DE MARZO DE 2018

	SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA Presidente	
	SENADOR HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS Secretario	
	SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Secretario	
	SENADOR MANUEL CAVAZOS LERMA Integrante	
	PAN Integrante	

3 ABR 2018

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS



33. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad este grupo de personas.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo con relación al Día internacional de las personas de edad.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de **"ANTECEDENTES"** se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de las Comisiones Dictaminadoras.

II. En el capítulo correspondiente a **"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO"**, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de **"CONSIDERACIONES"**, las Comisiones Unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas Comisiones Dictaminadoras.

I.ANTECEDENTES

1.- En la Sesión del Senado de la República del 5 de octubre de 2016, las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y las Senadoras Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Día Internacional de las personas de edad.



2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, turnó la Proposición en comento a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

3.-El 5 de octubre del 2016, se recibió el presente Punto de Acuerdo.

4.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables aprobaron el presente Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

La proposición en estudio con relaciòn al dìa internacional de las personas de edad tiene la finalidad exhortar a las entidades federativas a que realicen, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografia, un diagnóstico de los sistemas de transporte público, con la finalidad de generar estrategias que mejoren la movilidad de la población de adultos mayores.

III. CONSIDERACIONES

La composición de la población mundial ha cambiado de manera impresionante en los últimos años. Entre 1950 y 2010, la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado de los 46 a los 68 años, y está previsto que aumente hasta los 81 años para fines del siglo.

En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y la mayor parte vive en paìses en vìas de desarrollo y de igual forma se pronostica que para 2050 las personas de edad avanzada seràn 2 mil millones, es decir que en el mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños.

De acuerdo con la Organizaciòn de las Naciones Unidas en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, se acordò fomentar la concienciación internacional sobre las necesidades esenciales para el bienestar de las personas de edad.

Asimismo, la Comisiòn Econòmica para la regiòn (CEPAL) explicò que en Amèrica Latina y el Caribe estarà marcado por el envejecimiento de la poblaciòn sègun las proyecciones de la CEPAL.

La CEPAL advirtió que esta situación conlleva nuevos desafíos para la región y la sociedad.

Por su parte el Instituto Nacional de Estadìstica y Geografia de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 contabilizó 10.1 millones de personas mayores, lo que representa el 9% de la población total; y aumentará en más de 4% para 2030.

Con base al Dìa Internacional de las Personas de Edad, la poblaciòn de personas mayores en Mèxico enfrentan obstáculos que no garantiza una efectiva igualdad social.



Uno de los mayores retos para este grupo vulnerable es su movilidad en las zonas metropolitanas.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimnaciòn (CONAPRED) las personas adultas mayores enfrentan serias dificultades en los aspectos de trabajo, salud y movilidad si este último es un serio obstáculo en su forma de trasladarse, ya se como pasajeros o peatones, además de sufrir discriminación y maltrato .

Por lo siguiente la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 (ENADIS) reportó que el 93% de las personas adultas mayores hombres y mujeres carecen de problemas para moverse o caminar.

Por este motivo, el resultados de dichos datos nos crean conciencia de la necesidad de implementar acciones que permitan garantizar una vida digna para las personas de edad. Asimismo, afirman las autoridades que los adultos mayores necesitan y merecen ser vistos desde una perspectiva de derechos propios.

Por esta razón la importancia de realizar acciones afirmativas que contribuyan a generar una inclusión integral de las personas de edad y organizar cada vez más tareas efectivas que colaboran a generar una cultura de respeto a los derechos humanos de todas las personas.

PUNTO DE ACUERDO

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a realizar, de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad éste grupo de personas.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, del H. Congreso de la Unión, a los 29 días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis.

CONTINÚA TOMO IV

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL

Consulta la Gaceta del Senado enwww.senado.gob.mx

Nota: “La publicación impresa de la Gaceta y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”.